

VIENTO

POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

SUR

Movimientos por la paz: el resurgimiento. *Enric Prat* (editor), *Esther Vivas*, *Jordi Armadans*, *Tica Font*, *Claude Serfati* ● La descomposición de la ex-Yugoslavia, en el tablero internacional. *Catherine Samary* ● Bolivia. La Asamblea Constituyente: entre la utopía y el desencanto. *Hervé Do Alto* y *Pablo Stefanoni* ● Polonia. 1956. Poznan. Estalla la crisis del estalinismo. *Zbigniew Kowalewski* ● Sudáfrica. 1976. Soweto. *Bruce Jones* ● Una crítica feminista a la Ley de Dependencia. *Ana Hernando* ● La llegada de emigrantes a Canarias y el "negocio del desarrollo". *Enrique Venegas* ● Catalunya: nuevo ciclo. *Martí Caussa* y *Joan Fradera* ● "Por una vivienda digna": nace un nuevo movimiento. *Miguel Urbán* ● Crítica de la política fiscal del gobierno Zapatero. *Diego Guerrero* ● "Salvador": una película valiente. *José Gutiérrez* y *Miguel Romero*



Número 88 / septiembre 2006 / 7 €

1 el desorden global

Ex-Yugoslavia

La descomposición de la ex-Yugoslavia, en el tablero internacional. *Catherine Samary* **5**

Bolivia

La Asamblea Constituyente: entre la utopía y el desencanto. *Hervé Do Alto y Palo Stefanoni* **22**

2 miradas voces

Imageneria. "la REALIDAD" **25**

3 plural plural

Movimientos por la paz: el resurgimiento. 31

El movimiento por la paz frente a la economía militar. *Enric Prat* **32**

El movimiento contra la guerra, antes y después del 15-F. *Esther Vivas* **43**

Balance del gobierno Zapatero en al ámbito de paz, defensa y seguridad. *Jordi Armadans* **53**

Las guerras en África. *Tica Font* **61**

Militarismo e imperialismo: su actualidad en el siglo XXI. *Claude Serfati* **74**

4 futuro anterior

Polonia. 1956. Poznan. Estalla la crisis del stalinismo. *Zbigniew Kowalewski* **79**

Sudáfrica. 1976. Soweto. *Bruce Jones* **81**

5 voces miradas

Una mujer en una isla. *Concha Mateos Martín* **83**

6 aquí y ahora

Una crítica feminista a la Ley de Dependencia. *Ana Hernando* **89**

La llegada de inmigrantes a Canarias: Penúltima oportunidad para el negocio del desarrollo. *Enrique Venegas* **96**

Cambio de ciclo en Catalunya. *Martí Caussa* **103**

Catalunya ¿fin de ciclo? *Joan Fradera* **108**

"Por una vivienda digna": nace un nuevo movimiento. *Miguel Urbán* **112**

La política fiscal que el comunismo suprimirá. *Diego Guerrero* **119**

7 subrayados subrayados

Salvador **123**

Salvador (Puig Antich). *Pepe Gutiérrez* **124**

Uno de los nuestros. *Miguel Romero* **125**

Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas. *Manuel Gari* **126**

Cibersubrayados. Kaos en la Red y Revista Rebeldía. *Pedro Venero* **127**

Propuesta gráfica: *Jesús Hoyos Arribas (in memoriam)*.



Esta obra se puede copiar, distribuir, comunicar públicamente o hacer obras derivadas de la misma, bajo las siguientes condiciones:



Debe reconocer y citar al autor original.



No puede utilizar esta obra para fines comerciales.



Si altera o transforma esta obra, se hará bajo una licencia idéntica a ésta

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/>

Consejo Asesor

Iñaki Bárcena
Martí Caussa
Ramón Fernández Durán
Montserrat Galcerán
Pepe Gutiérrez
Pedro Ibarra
Petxo Idoyaga
Ladislao Martínez
María Jesús Miranda
Justa Montero
Daniel Pereyra
Jaime Pastor
Enric Prat
Miguel Urban
Begoña Zabala

Redacción

Josep Maria Antentas
G. Buster
Andreu Coll
Antonio Crespo
Josu Egireun
Manolo Garí
Alberto Nadal
Carmen Ochoa
Miguel Romero
Carlos Sevilla
Pilar Soto
Pedro Venero
Esther Vivas

Diseño original

Jérôme Oudin &
Susanna Shannon

Maqueta

www.tresmallosistemas.com
con software libre: *openoffice.org*

Redacción

C./ Limón, 20 – Bajo ext-dcha.
28015 Madrid
Tel. y Fax: 91 559 00 91

**Administración
y suscripciones**

Josu Egireun. Tel.: 630 546 782

Imprime

Perfil Gráfico, S.L.
C./ Medea, 4 – 1.º C - Edificio Ecu, Madrid

DL: B-7852-92
ISSN: 1133-5637

www.vientosur.info
vientosur@vientosur.info

Puntos de difusión de VIENTO SUR**Asturias**

Conceyu Abiertu
c/ La Gascona, 12 baxu A
33001 Uviéu
Tienda de Comerciú Xustu
"L'Arcu la Vieya"
C/ El Postigu Altu 14, baxu
33009 Uviéu

Barcelona

**Xarxa de Consum Solidari -
Ciutat Vella**
Pl. Sant Agustí Vell nº 15
08003 Barcelona
**Xarxa de Consum Solidari -
Eixample**
Rocafort, 198
08029 Barcelona
La Central del Raval
c/ Elisabets nº 6
08001 Barcelona.
Librería Documenta
c/ Cardenal Casañas nº 4
08002 Barcelona
Laie
c/ Pau Claris 85
08010 Barcelona
Espai Icaria
Arc de Sant Cristófol, 11-23
08003 Barcelona
La Central
Mallorca, 237
080038 Barcelona

Bilbao

Librería Cámara
Euskalduna, 6
48008 Bilbao
Elkar-Poza, Herriak SL
Licenciado Poza, 11
48008 Bilbao

Madrid

Librería Fuentetaja
c/ San Bernardo nº 48
28015 Madrid
Librería Antonio Machado
c/ Fernando VI nº 17
28004-Madrid
Librería Rafael Alberti
c/ Tutor nº 57
28008 Madrid

**Librería Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología**

Universidad Complutense
Campus de Somosaguas

Traficantes de sueños

Embajadores nº 35
28012 Madrid

La Libre

Argumosa nº 39
28012 Madrid

Kiosko

San Millán / Plaza Cascorro
28012 Madrid

Pamplona-Iruñea

Zabaldi (Casa Solidaridad)
Navarrería, 23, bajo
31001 Iruñea

Sevilla

Ateneo Tierra y Libertad
Miguel Cid, 45
Sevilla

Vitoria-Gasteiz

ESK
c/ Beethoven, 10, bajo.
01012 Vitoria/Gasteiz

Zaragoza

Bar Birosta
c/ Universidad, 3
50001 Zaragoza
Bar Barrio Sur
c/ San Jorge, 29
50001 Zaragoza
Asociación Cultural Bº Verde
c/ Dr. Palomar, 29
50001 Zaragoza
Bar Barrio Verde
c/ Dr. Palomar, 25
50001 Zaragoza
Paperlería Germinal
c/ Sepulcro, 21
50001 Zaragoza
Librería Antigona
c/ Pedro Cerbuna, 25
50009 Zaragoza
Librería Cálamo
Plaza San Francisco, 4
50009 Zaragoza
Kioskos
- Plaza San Francisco
50009 Zaragoza
- c/ San Juan de la Cruz, 3
50009 Zaragoza

Propuesta gráfica de este número**JESÚS HOYOS ARRIBAS (Laredo 1953)**

Polifacético periodista, músico, artista plástico, poeta... fallecido en 1995 en accidente al salir del periódico donde trabajaba. Las ilustraciones corresponden a su exposición "Némesis" realizada en 1985. In memoriam de su camarada y amigo, Pedro Venero.

Quisiera que mi estilo fuera la falta de estilo. Que pudiera contar con libertad absoluta para disponer de cualquier recurso encontrando antes por algún compañero de viaje en la historia del arte. (Jesús Hoyos). <http://www.laredospain.com/JHoyos.htm>.

La “guerra de los 33 días” en el Líbano y el llamado “alto el fuego” establecido por la precaria resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU ha sido, sin duda, el acontecimiento internacional más importante de la actualidad política y sus consecuencias seguirán teniendo una influencia muy grande en los próximos meses, al menos. En cambio no hay ningún artículo sobre estos temas en este número de la revista. El asunto merece una explicación. Normalmente los artículos que publicamos sobre la situación en Oriente Próximo (o Medio, según nos coloquemos) están firmados por Gilbert Achcar y Michael Warshawski, compañeros, amigos y colaboradores desde hace muchos años. Ambos están escribiendo artículos de enorme interés sobre la guerra y sus repercusiones internacionales y regionales. En la mayoría de los casos, esos artículos se difunden rápidamente por numerosas web y listas de correo, lo cual es magnífico para que esos textos lleguen al máximo número de gente, pero nos crea un problema para nuestra revista, en la que procuramos publicar textos inéditos, porque pensamos que eso forma parte de nuestro compromiso con las y los lectores. Como el problema tiene difícil solución, hemos decidido publicar en la web (ya se sabe: www.vientosur.info) la mayoría de estos textos, normalmente con traducciones de nuestra redacción y mantener la norma general de textos inéditos, que buscaremos también sobre estos temas, para la revista impresa. Recomendamos pues que se siga con atención nuestra web, cuya sección *sólo en la web* actualizamos con toda la frecuencia posible y, también, con el criterio de seleccionar textos que no están en las web y listas de izquierda más conocidas.

25 años de conflictos y guerras en la ex-Yugoslavia. La sola lectura de la cronología que acompaña el artículo que publicamos de **Catherine Samary**, da una idea de la complejidad de la larguísima crisis que condujo a la descomposición del país, a sangre y fuego. Con ocasión de la muerte de Milosevic, se publicaron muy numerosos artículos centrados en su figura, también en nuestra web. Pero nos preocupaba que la evaluación del personaje terminara ocultando el bosque terrible del proceso en su conjunto. El trabajo de Catherine Samary sitúa la crisis en el tablero internacional, en la compleja red de intereses y maniobras que se entrecruzaron en aquellos años. Nos parece por ello una importante contribución a la memoria de nuestra época, que no puede estar a merced de los sumarios del Tribunal Penal Internacional para el ex-Yugoslavia, instrumento jurídico de la “historia oficial”.

Las elecciones a la Asamblea Constituyente boliviana han abierto una nueva etapa en la que es, quizás, la experiencia política y social más radical y con mayor papel de los movimientos sociales de las que están teniendo lugar en América Latina. Esta valoración es, sin duda, discutible y, en realidad, el proceso boliviano-

no está siendo muy discutido dentro de la izquierda alternativa, no sólo latinoamericana, lo cual nos parece saludable. **Hervé Do Alto** y **Pablo Stefanoni** han escrito un texto que analiza los resultados electorales y las perspectivas de la Constituyente, e incluye también un debate claro y fraternal, que nos parece muy oportuno, con los puntos de vista de personas que conocen muy bien la realidad boliviana, como Raúl Zibechi, Raquel Gutiérrez y Dunia Mokrani.

La sección *Aquí y Ahora* incluye en esta ocasión numerosos y muy interesantes textos. El espacio de que disponemos sólo nos da para reseñarlos. **Ana Hernando** escribe una crítica feminista del proyecto de Ley de Dependencia. **Enrique Venegas** descubre la otra cara de la inmigración a Canarias: el “negocio del desarrollo” que hace ascos a los cayucos, pero busca hacer negocios en los países de origen, apoyándose frecuentemente en fondos de “ayuda al desarrollo”. **Martí Caussa** y **Joan Fradera** opinan sobre la situación post-referéndum en Catalunya. **Miguel Urbán** sobre las movilizaciones por el derecho a la vivienda y las dimensiones económicas y sociales de un problema que va adquiriendo, por muy buenas razones, una creciente capacidad de movilización. **Diego Guerrero** hace una crítica radical de la política fiscal del gobierno Zapatero.

solo en la web www.vientosur.info

Líbano

La guerra de los 33 días y la resolución 1701 del Consejo de Seguridad

Gilbert Achcar

Israel

¡Nos negamos a ser enemigos!

Michel Warschawski

Caminando a paso libero (militar) hacia el “Choque de Civilizaciones”

Europa cómplice del terrorismo de Estado israelí, apoyado por EE UU

Ramón Fernández Durán

Guerra Permanente

Los planes imperiales de EE UU son un barco que se hunde

Gilbert Achcar

Bolivia

Todo el poder a quechuas y aymaras (y el MAS de Evo)

Pablo Stefanoni

La guerra permanente

“Israel ha convertido en rehén a todo un pueblo

Gilbert Achcar entrevistado por Socialist Worker

La guerra permanente

Iniciativa 100% israelí

Michel Warschawski AIC (Alternative Information Center)

Al otro lado del muro

Una contrarrevolución burocrática

Catherine Samary

México

La descomposición de la política estatal, Atenco y la Otra campaña

Arturo Anguiano

w w w . v i e n t o s u r . i n f o

1 el desorden global

Ex-Yugoslavia

La descomposición de la ex-Yugoslavia, en el tablero internacional

Catherine Samary

Slobodan Milosevic fue retratado por la fiscal de su proceso en el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) de La Haya, como el “*carnicero de los Balcanes*”, el responsable central de los conflictos, guerras y limpiezas étnicas que caracterizaron la descomposición de la ex-Yugoslavia: la política de una “Gran Serbia étnicamente pura” preconizada por Milosevic habría estado en el centro de estas violencias durante la década 1990, causa de prácticas genocidas.

Los defensores de Slobodan Milosevic rechazan estas tesis como calumnias, y le presentan como un resistente al orden mundial imperialista y a la desintegración de Yugoslavia, que fue promovida por los otros nacionalismos, anticomunistas, armados e instrumentalizados por las grandes potencias para destruir la Yugoslavia socialista. Las falaces campañas de demonización del “serbo-comunismo” sirvieron para preparar una intervención armada planificada de la OTAN contra Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y la inculpación de Milosevic ante el TPIY, instrumento jurídico de estas campañas, sobre todo de los Estados Unidos.

I. Contra las interpretaciones simplistas

Ambos enfoques tienen algo de verdad, y eso les hace creíbles. Pero son *globalmente falsos* porque, tanto uno como otro, ocultan elementos fundamentales de lo que fue la política del dirigente de Belgrado y de las grandes potencias. Al margen de estos elementos, no se puede comprender el fiasco del proceso Milosevic. *Fiasco para la tesis de la fiscal*: una política de Gran Serbia, *supuestamente preconizada por Milosevic, que habría extendido las limpiezas étnicas de Kosovo a Bosnia durante toda la década*. Pero también un fiasco para *los defensores de Milosevic, incapaces de convertir su proceso en tribuna de resistencia al capitalismo, antiimperialista y “yugoslava” en el sentido de inter-nacionalista real...* porque no había sido ésta su política.

Para comprender el papel de Milosevic en los grandes conflictos de la crisis yugoslava (Kosovo, conflictos serbo/croata y sobre todo la guerra de limpieza étnica de Bosnia) hay que incorporar al análisis algunos elementos que desatienden las dos tesis mencionadas.

- ◆ Desde finales de los años 1980 el régimen de Milosevic se encontraba en plena mutación en el plano socio-económico; las leyes de cambio de la propiedad votadas en Serbia bajo el régimen de Milosevic no son cualitativamente diferentes a las aprobadas en los años 1990 (con expresiones de resistencias al ultraliberalismo) en la vecina Eslovenia, miembro hoy día de la Unión Europea /1. La guerra y las sanciones, no las políticas sociales opuestas a las privatizaciones, ralentizaron los procesos. La etiqueta “socialista”, en Serbia como en Polonia, en Hungría o en Albania, no quería decir en absoluto oposición a la lógica privatizadora.
- ◆ Milosevic no era un “serbo-comunista” defensor de la autogestión, ni un opositor irreductible al nuevo orden mundial.
- ◆ ¿Qué Estado pretendía construir Milosevic sobre las ruinas del sistema y de la federación titista? ¿Sobre qué territorio quería gobernar?
- ◆ Belgrado era la capital de Yugoslavia; el ejército en que confiaba era de tradición yugoslava titista, vinculado por sus privilegios al mantenimiento de un Estado yugoslavo; la propia Serbia era una república multiétnica, integraba a Kosovo, de mayoría albanesa, a la Vojvodina, con una importante minoría húngara, y al Sandjak, con mucha población bosnia (eslavos musulmanes). A diferencia del nacionalismo croata, que intentó construir un Estado exclusivamente croata, Milosevic tenía interés en jugar a dos bandas: el yugoslavismo y el nacionalismo serbio; ambos enfoques se combinaban en un proyecto “yugoslavo” basado en la mayoría y en la dominación serbia.
- ◆ Pero esta doble “línea” de ruptura reaccionaria, con el socialismo autogestionario y con la igualdad entre naciones preconizada por el titismo, no era una política de Gran Serbia étnicamente pura: Milosevic nunca defendió dicha orientación, ni en Kosovo ni en ningún otro lugar, a diferencia de sus opositores y a veces aliados nacionalistas gran-serbios. De ahí los apuros de la fiscal Carla del Ponte.

Milosevic defendía una recentralización de los poderes de la federación con procedimientos mayoritarios que favorecían a los serbios, contra la lógica confederal y la práctica del voto consensuado (donde los representantes de cada comunidad nacional tenían el mismo peso) aplicadas desde mediados de los años 1960. El giro del régimen de Milosevic en 1989 no fue una imposible “limpieza étnica” de Kosovo: los albaneses formaban el 80% de la población: no se podía expulsarlos ni matarlos. Sin duda, se trataba de establecer relaciones de dominación “gran serbia” sobre el pueblo albanés, forzando a la separación (un quasi-apartheid) de las poblaciones, a una regresión de estatutos y de derechos para los albaneses, lo que hizo irreversible su aspiración independentista. La supresión del estatuto de quasi-república de Kosovo significó su subordinación como simple provincia a Belgrado (lo que se sintió sobre todo en los programas escolares), exigiendo juramento de fidelidad

para acceder a los empleos públicos y despidiendo de forma masiva a los recalci-
trantes; uno de los objetivos pretendidos fue invertir la tendencia a la salida masiva
de serbios de la provincia, prohibiendo la venta de tierras a los albaneses, creando
colonias de repoblación, proporcionando empleo a los serbios a base de despidos
de albaneses; confiaban en que así regresaría a “su casa” (Albania) una buena parte
de la población, considerada infiltrada... Hubo también acoso y brutalidad policial
contra los supuestos militantes separatistas. La resistencia (al principio pacífica,
después armada) de los albaneses de Kosovo respondía a una lucha de independen-
cia y de liberación nacional contra una política de Estado “gran serbio” dominado
por Belgrado, que las grandes potencias, y muy en particular la Francia jacobina,
no estaban muy predisuestas a apoyar...

La Yugoslavia residual (tras la salida de las repúblicas sólo quedaron, frente a
frente, Serbia y Montenegro), abandonó, como todos los demás, las referencias so-
cialistas de la constitución de 1991, sin ninguna consulta popular.

- ◆ La orientación “yugo-serbia” de Milosevic explica tanto los conflictos parciales
(demasiado “yugoslavismo”) como sus acercamientos (apoyo en las poblacio-
nes serbias) a corrientes nacionalistas serbias, las auténticas defensoras, con sus
milicias, de la política de Gran Serbia.

Estas corrientes heterogéneas se diferenciaron en el grado de aceptación o re-
chazo de una alianza con el partido “socialista”, en la valoración sobre las vio-
lencias, y en las actitudes variables hacia las grandes potencias...

- ◆ El agujero negro de las tesis dominantes. Desde 1992 hasta febrero de 1999,
Milosevic prefirió jugar la carta de un distanciamiento con las políticas violentas,
aunque sin dejar de utilizar entre bastidores, tras la fachada parlamentaria
del régimen, a una policía paramilitar basada en mercenarios. Prefirió “traicio-
nar” a sus antiguos aliados nacionalistas serbios de Croacia y de Bosnia (como
le reprocharon sus opositores) y apoyar los planes internacionales de paz, en
alianza con Franjo Tudjman, para obtener el levantamiento de las sanciones y
un reconocimiento internacional.

En parte, lo consiguió.

II. De la alianza Milosevic-Tudjman a la división étnica de Bosnia Herzegovina

La etiqueta “socialista” sirvió para distinguir, de forma parcial y provisional, dos
variantes de “transición” post-titista. Las diferencias iniciales entre las distintas re-
públicas yugoslavas eran tan grandes como las que había entre Rumanía y Hungría
o Polonia... Y ya sabemos bien lo que vale hoy día la etiqueta “socialista” en una
Polonia donde los “ex” se han convertido en el punto de apoyo de los Estados Uni-
dos para la “nueva Europa” y la guerra de Irak.

El hecho de que el partido de Milosevic llevara una etiqueta “socialista” fue una
trampa catastrófica para la izquierda yugoslava, y no puede ser aceptado por quie-
nes dan sentido a las palabras y a las opciones.

En resumen, lo que acercó en la práctica al régimen de Slobodan Milosevic y al de Franjo Tudjman, pese a sus diferencias y conflictos parciales fue:

- ◆ la misma voluntad de apropiación territorial estatal de una “propiedad social” que, en la constitución de 1974, era “societaria”, no territorializada; el clientelismo en las privatizaciones;
- ◆ los cambios constitucionales introducidos por Belgrado y Zagreb a comienzos de los años 1990, bajo diferentes formas pero con la misma lógica de degradación agresiva de los derechos nacionales adquiridos bajo el titismo por las comunidades minoritarias de las dos repúblicas: Kosovo perdió su estatuto de quasi-república y los albaneses tuvieron que aceptar ser ciudadanos “serbios”, a la manera “universalista” francesa; paralelamente, Croacia perdió su carácter multinacional, convirtiéndose en Estado del pueblo croata y los serbios perdieron el estatuto de “pueblo”;
- ◆ el mismo tratamiento ideológico y político de Bosnia Herzegovina, de los derechos y pueblos consolidados, considerados como “creaciones artificiales” de Tito;
- ◆ intentaron arreglar sus propios conflictos a base de un reparto étnico de Bosnia-Herzegovina;
- ◆ en cuanto a los regímenes políticos, ambos poderes combinaron la acción de fuerzas paramilitares con un régimen parlamentario y pluralista; lo suficientemente pluralista, además, para quedarse, uno y otro, en minoría en algunas regiones o ciudades de su respectiva república... (el partido de Milosevic era minoritario en Belgrado y en varias grandes ciudades desde 1996);
- ◆ ninguno asumió explícitamente una lógica de guerra; al contrario, uno y otro buscaron compromisos para poder convertirse en interlocutores de las grandes potencias, mostrándose más moderados que su propia extrema derecha.

Hubo un juego de espejos entre los dos regímenes de Belgrado y Zagreb.

La política de Franjo Tudjman fue ocultada y blanqueada ... porque era denunciada en Belgrado. Y de forma recíproca, la realidad reaccionaria del régimen Tudjman cegó a los defensores del régimen Milosevic (o los condujo a un silencio culpable) en cuanto a los trabajos sucios de las milicias del régimen y de su mercenario Arkan y/o de las milicias de los aliados nacionalistas serbios del Partido Socialista, a comienzos de la década 1990, en Kosovo, en Croacia y en Bosnia.

El discurso antiserbio y antisemita de Tudjman, el retorno de símbolos y milicias ustachis, incorporados al ejército croata oficial, la diabolización del “serbo-comunismo” para poder revalorizar mejor a los seudo “demócratas” croatas, la rehabilitación del pasado y de los dirigentes fascistas...: todo eso fue denunciado en Belgrado y, por consiguiente, ocultado o minimizado en los medios de comunicación dominantes: el nacionalismo croata, se decía, era sólo “defensivo”.

Pero el objetivo de “Gran Croacia” tenía una potencialidad institucional, ideológica y militar que podía verlo quien quisiera /2:

- ◆ En el plano interno, trataba de reconstruir una “croacidad” selectiva como base de la nueva constitución y modificar el estatuto de los serbios para devolverlos a la condición de “minoría”.

- ◆ En el plano externo, la lógica de Gran Croacia se prolongaba hacia Bosnia-Herzegovina. De forma hipócrita, concedió derecho de voto en Croacia a los croatas de Bosnia-Herzegovina, anticipando una incorporación a un único y mismo Estado; y desde 1991, ya reconocida la soberanía de Bosnia-Herzegovina, poniendo en práctica una política de expansión territorial. Había varias variantes: una era la propugnada por las tropas ustachis, que pretendía agregar el conjunto de Bosnia a Croacia, “respetando” públicamente la integridad de Bosnia-Herzegovina... Otra, más “moderada” defendida por el partido de Tudjman (HDZ), pretendía la territorialización de los croatas de Bosnia-Herzegovina en Herceg-Bosnia, vinculada a Croacia, con su propia “capital” Mostar, para poder reivindicar así la “autodeterminación” del pueblo croata, simétrica a la reivindicación separatista bosnio-serbia.

Los nacionalismos serbio y croata de Bosnia-Herzegovina, sostenidos por Belgrado y Zagreb, compartían la misma lógica de territorialización violenta y forzada de los “pueblos”, fragilizando hasta hoy a Bosnia-Herzegovina.

Para hacerlo, había que destruir la “piel de leopardo” de una Bosnia-Herzegovina en la que casi ningún municipio era étnicamente puro: el “derecho de los *pueblos*, en el sentido étnico nacional, a la autodeterminación” (separatista) implicaba en la práctica limpiezas étnicas de territorios donde construir Estados “que pudieran mantenerse” y unirse a los Estados vecinos, provocando la huida irreversible de las poblaciones locales hostiles a esta separación.

Para legitimar esta lógica, Belgrado y Zagreb, y sus aliados en el terreno, abusaron de una ecuación falsa: “musulmán” en sentido étnico nacional = musulmán religioso = islamista = terrorista potencial. Se sirvieron de la *Declaración Islámica*, redactada en 1970 por Alija Izetbegovic y reproducida a comienzos de los años 1990, y de todas las ambigüedades de la política de Izetbegovic, lo cual no ayudó precisamente a consolidar la confianza en un Estado común. Alija Izetbegovic oscilaba entre un proyecto islamista (dispuesto a aceptar un Estado musulmán, aunque fuese residual, en las negociaciones de “paz”) y un nacionalismo musulmán bosnio, defendiendo el mantenimiento de las fronteras de Bosnia-Herzegovina; y en el seno de los musulmanes bosnios, entró en conflicto con la orientación de una resistencia asociada a la laicidad y al mestizaje bosnio /3.

La propaganda de Belgrado y Zagreb tenía dimensiones “autorrealizadoras”: la violencia contra las poblaciones musulmanas, cogidas en tenazas entre unos y otros, que proporcionaron el 70% de los aproximadamente 100.000 muertos de la guerra, podía provocar una cierta radicalización islámica entre los musulmanes; la legítima solidaridad del mundo musulmán, con la llegada de *mujaidines* a Bosnia, daba credibilidad, a su vez, a las tesis de un peligro islamista, manipuladas por Belgrado y Zagreb.

En contradicción con la ecuación citada, los partidos “*ciudadanos*” consiguieron su mayor número de votos en regiones de mayoría musulmana, como Tuzla. El SDA, partido de Alija Izetbegovic, estaba atravesado por corrientes y escisiones alejadas del integrismo musulmán. El proyecto de un Estado musulmán no resultaba atractivo en el contexto bosnio, ni siquiera para quienes querían una renovación

religiosa, desconfiando de clientelismos y prácticas corruptas generadas por la integración en el poder de Estado.

Si había corrientes islámicas diversas, era falso pretender que Bosnia-Herzegovina habría estallado por la amenaza de un “peligro islamista”; de haber ocurrido algo así, sería sobre todo como reacción a las agresiones sufridas por las poblaciones musulmanas.

La tesis de un “único agresor serbio” se vio facilitada por el discurso de Sarajevo al comienzo de la guerra. Era ciertamente difícil luchar en dos frentes y denunciar a quienes estaban siendo apoyados por Estados Unidos: la resistencia de la *Armija* de Sarajevo, multiétnica y no sólo *musulmana*, necesitaba armas. Croacia y Hercegovina estaban a mitad de camino de toda la distribución de ayuda enviada a la resistencia y era también la única “retaguardia” posible para los refugiados musulmanes. Aunque era una “retaguardia” trampa, una toma de rehenes que amordazó el discurso de forma desastrosa /4. Dentro del movimiento de solidaridad contra las limpiezas étnicas, las presiones croatas para señalar a un único agresor, y además del tipo étnico (serbio) de “violador”, fueron terribles, como bien lo sabe el movimiento feminista, sobre todo Rada Ivekovic, feminista croata denunciada como una “bruja” por atreverse a decir que también había violadores croatas /5.

La inestabilidad de los sucesivos “planes de paz” anteriores a Dayton fue debida, en lo fundamental, a que los dos proyectos estatales bosnio-serbios y bosnio-croatas no llegaban a culminar y avanzaban sobre el terreno, cuyas huellas pueden verse en los mapas. Radovan Karadzic y Ratko Mladic, a la cabeza de las milicias nacionalistas bosnio-serbias, y Mate Boban a la cabeza de las milicias nacionalistas bosnio-croatas, estuvieron asociados a las negociaciones de los “planes de paz” hasta Dayton. Se reunieron en Graz, en Austria, y pudo verse a milicianos de ambas partes brindar juntos cerca de un Sarajevo asediado por “un único agresor”.

Unos recibieron las armas e infraestructuras del ejército popular yugoslavo, tras la retirada de Bosnia-Herzegovina; los otros eran ayudados directamente por el ejército croata. Esta fue la causa principal de las guerras de limpieza étnica y de que la población musulmana, menos del 45% de la población, cogida por ambos lados, sufriese el 70% de las víctimas.

III. Las evoluciones de la política internacional

La diplomacia estadounidense quedó al inicio apartada de la gestión directa de la crisis yugoslava. El FMI apoyaba una gestión centralizada de la deuda yugoslava y privatizaciones a escala de la federación.

Tras las escisiones eslovena y croata, Estados Unidos siguió una lógica parecida a la de Alemania, repitiendo la propaganda croata sobre el “serbo-comunismo” y ocultando la realidad del régimen croata.

Washington criticó los “planes de paz” de la ONU y de la Unión Europea para Bosnia. Pudo matar varios pájaros de un tiro:

- ◆ presentarse como amigo de los musulmanes (albaneses y bosnios) contra el serbo-comunismo, para intentar hacer “tragar” al mundo musulmán su política en Irak y su silencio sobre Chechenia;

- ◆ ridiculizar los intentos de una política europea autónoma... y a la propia ONU.

Los juegos de la política interna en los Estados Unidos fueron determinantes. Frente a los republicanos que proponían un aislacionismo, Clinton trató de reinsertar a los Estados Unidos en el juego diplomático en Bosnia, junto a los socios europeos, haciendo avanzar a la OTAN. Las circunstancias y juegos diplomáticos en 1995 en Dayton se lo iban a permitir.

Francia y Gran Bretaña trataron primero de mantener una Yugoslavia unida; después, intentaron equilibrar a favor de Belgrado los apoyos concedidos por Alemania a Zagreb. Pero los gobiernos europeos pusieron “su construcción” europea común por encima de sus desacuerdos: se alinearon por tanto detrás de Alemania en el reconocimiento de la independencia de Croacia y de Bosnia-Herzegovina, para salvar la fachada de una “política exterior” de la UE.

La guerra croata-musulmana en 1992-1993 abrió la posibilidad de un reequilibrio entre aliados deseados, aunque sin cambio de discurso, sobre todo en los Estados Unidos, donde se siguió hablando del agresor único. Pese a ello, las bases para una nueva *real-politik* unificada ya estaban puestas: consistía en la búsqueda de una estabilización de los Balcanes apoyándose en una entente entre la Serbia de Milosevic y la Croacia de Tudjman, descartando a las fuerzas nacionalistas más radicales dentro de ambos regímenes y forzando a Sarajevo a compromisos.

Los bombardeos de la OTAN en Bosnia en 1995, en vísperas de las negociaciones de Dayton, no fueron en absoluto hostiles a Milosevic; al contrario, en aquella época Milosevic se había consolidado frente a los dirigentes ultranacionalistas de Bosnia y se levantaron en parte las sanciones, provocando, además de una aceleración de las privatizaciones, la constatación del fracaso de la política de resistencia pacífica impulsada en Kosovo por Ibrahim Rugova tras el cambio de estatuto de la provincia.

La detención de la guerra en Dayton se consiguió por dos conjuntos de condiciones, sin que tuvieran nada que ver los bombardeos de la OTAN contra blancos bosnio-serbios, que tan sólo sirvieron de cortina de humo para “hacer tragar” en Estados Unidos el cambio de un discurso que diabolizaba a Milosevic a un acuerdo con él (mostrando, se decía en Washington, una política fuerte capaz de “obligar” a Milosevic al compromiso: ¡nada más lejos de la realidad!).

El negociador estadounidense Richard Holbrooke subrayó que la vertiente político-militar del acuerdo era global (regional), con la esperanza en una estabilización del conjunto. Pero incluía una serie de atascos todavía visibles hoy en día:

- ◆ No hubo ni vencedores ni vencidos; el acuerdo firmado era por tanto muy contradictorio: el presidente bosnio lo firmó porque seguía siendo presidente de Bosnia-Herzegovina y se mantenían sus fronteras; los otros, porque se consolidaron las limpiezas étnicas con la creación de dos “entidades” y porque cada “entidad” podía establecer vínculos de confederación con los Estados vecinos.
- ◆ Franjo Tudjman firmó en nombre de los croatas, y Slobodan Milosevic en nombre de los serbios, porque tanto uno como otro salían reforzados con esta firma, en el plano internacional, en Bosnia-Herzegovina y en sus propios países.

- ◆ Franjo Tudjman sólo aceptó ser firmante de Dayton cuando se “arregló” la “cuestión serbia” en Croacia por medio de la limpieza étnica de varios centenares de miles de serbios durante el verano de 1995, haciendo bajar su porcentaje sobre la población del 12% al 5%, a la vista y con pleno conocimiento de las grandes potencias y del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia... y de Milosevic.
- ◆ Por su parte, Slobodan Milosevic salió ganando al aceptar la limpieza étnica de los serbios de Croacia, previa a los acuerdos de Dayton, porque le reportó un reconocimiento internacional y el silencio sobre Kosovo. Además, Serbia intentó canalizar a los serbios huidos de Croacia hacia la *Republika Srpska* y hacia Kosovo para consolidar allí la presencia étnica serbia. Salió ganando también a costa de sus ex aliados bosnio-serbios: en vísperas de los acuerdos de Dayton, Ratko Mladic y Radovan Karadzic, directamente responsables de las masacres de Srebrenica fueron inculpados por el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. Milosevic pudo firmar los acuerdos de Dayton en su lugar, “en nombre de todos los serbios”. Precisemos que si pudo hacerlo, con alguna credibilidad entre los serbios de Bosnia, fue sólo porque se reconoció a la *Republika Srpska* como una de las dos entidades de Bosnia-Herzegovina en el plano constitucional. El enclave fue abandonado por Sarajevo. Tenía que haber sido protegido por las fuerzas de la ONU y de la OTAN, y no lo fue.

Algunos “daños colaterales” de estos arreglos para el Tribunal Penal Internacional:

- ◆ Las masacres de Srebrenica han sido descritas como “genocidio” durante el proceso del general Krstic ante el TPIY. Pero fue condenado no por haber querido tal masacre o genocidio, sino por no haber intervenido para impedirla. El TPIY no tenía prueba alguna de una cadena de mando que implicase a Milosevic en la decisión de la masacre -probablemente habría sido condenado con argumentos similares a los de Krstic-. En cambio, las grandes potencias fueron directamente responsables por no proteger a estas poblaciones.
- ◆ Franjo Tudjman murió en 1999 sin haber llegado nunca a ser acusado, a pesar de que su ejército y su régimen estuvieron directamente implicados en las violencias contra los serbios de Croacia y en la limpieza étnica de la Herzeg-Bosna, sobre todo en Mostar.

En fin, la resistencia pacífica albanesa, dirigida por Ibrahim Rugova, perdió en Dayton toda esperanza de reconocimiento internacional. La activación del Ejército de Liberación del Kosovo (UCK) nació de esta constatación.

IV. De Dayto a Kosovo... una guerra para salvar a la OTAN

Dayton significó por tanto la consolidación de los poderes fuertes de la región. Se arruinó la esperanza de un reconocimiento internacional de la autoproclamada república de Kosovo.

Surgieron entonces críticas contra la estrategia de resistencia pacífica defendida por Ibrahim Rugova y su partido, la LDK (Liga Democrática del Kosovo) tras los

cambios constitucionales impuestos por Belgrado en 1989. Del balance de Dayton nació una estrategia alternativa de resistencia para conseguir la independencia, apuntando a la internacionalización del conflicto por medio de la violencia.

El Ejército de Liberación del Kosovo (UCK) poseía bases ideológicas heterogéneas. Sus acciones comenzaron a desplegarse en 1995 contra el aparato policial serbio, provocando represalias desmesuradas, porque las fronteras de la resistencia iban mucho más allá que el UCK y porque familias enteras, sobre todo en el campo, eran solidarias con algunos de los miembros implicados: cuanto más reprimido era el UCK, más popular se volvía su lucha, aunque era todavía marginal, muy sectaria en sus comportamientos, dentro incluso de su propia comunidad, e incapaz por tanto de poner en cuestión la popularidad de su adversario político Ibrahim Rugova.

Entre 1996 y 1998, el UCK fue “clasificado” como “terrorista”, no sólo por Belgrado sino también por todas las diplomacias occidentales, incluidos los Estados Unidos, que tan sólo pedían a Belgrado un poco de “moderación”. A finales de 1998, el engranaje de violencias convenció a Madeleine Albright de que podía obtener algunas ventajas geoestratégicas para los Estados Unidos, prolongando las adquiridas en Dayton por Richard Holbrooke:

- ◆ Instrumentalizar los conflictos de Kosovo con el objetivo de confirmar y extender la redefinición de la OTAN y su despliegue hacia la Europa del Este, estableciendo bases norteamericanas en esta región y en particular en la zona estratégica de los Balcanes, con acceso al mar en Albania y Rumanía; y actuar para integrar la construcción europea en un marco atlantista, evitando cualquier veleidad de política autónoma de la Unión Europea.
- ◆ El UCK trataba de apoyarse en el discurso inicial de los Estados Unidos contra el serbo-comunismo y en defensa de los albaneses, para cuestionar la dinámica post-Dayton de consolidación internacional del régimen de Milosevic y ganar el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

A fuerza de amenazar, hubo que pasar a los actos, so pena de descrédito. Para legitimar los bombardeos de la OTAN sobre un país europeo, hizo falta nada menos que un Hitler y una amenaza de “genocidio” anti-albanés.

Slobodan Milosevic, al igual que Saddam Hussein, fue retratado por tanto como un nuevo “Hitler”. El 25 de marzo de 1999, *Le Monde* titulaba /6: “*Bill Clinton invoca a Churchill contra Hitler para justificar la intervención*”, con este subtítulo: “*El presidente americano quiere limitar la capacidad serbia de continuar su genocidio*”.

En realidad, la diplomacia estadounidense contaba con un escenario triple: a) autonomía sustancial, aunque no independencia de la provincia; por tanto, b) dominio de Belgrado y mantenimiento de las fronteras, con la esperanza de obligar a Belgrado a aceptar; c) la cuestión principal: la OTAN... Nada que ver con ningún Hitler reinando en Belgrado y preparando un genocidio en Kosovo.

La primera fase de las negociaciones se llevó a cabo en Rambouillet por parte de Francia y Gran Bretaña, que querían hacer de Kosovo el Dayton de la “política exte-

rior” de la Unión Europea. Hubert Védrine y Robin Cook asumieron las dos primeras piezas del tríptico estadounidense, esto es, el proyecto de autonomía sustancial en el marco de las fronteras existentes; pero la cuestión de la OTAN fue dejada de lado y ocurrió “lo peor” que podía ocurrir para los diplomáticos: en febrero de 1999, los albaneses de Kosovo se negaron a firmar el proyecto ya aceptado por Belgrado, porque enterraba la independencia de Kosovo. La opción militar quedó en suspenso.

Este fracaso de la primera parte de Rambouillet a finales de febrero fue comentado por Jean-Michel Demetz en *l'Express* con el título: “*El doble fracaso de Madeleine: ni acuerdo, ni bombardeos en Kosovo. La secretaria de Estado americana está decepcionada*” /7.

Se acordó un nuevo retraso, con la decisión de retomar las negociaciones el 23 de marzo. Mientras tanto, Madeleine Albright convenció al UCK de firmar el acuerdo de autonomía, con el compromiso oral de una presencia de la OTAN en el país, elecciones rápidas y la promesa de una consulta a la población al cabo de tres años.

Siendo el objetivo de los Estados Unidos la intervención de la OTAN, para conseguir después su presencia en suelo serbio, le bastaba con imponerla como parte integrante del acuerdo, “castigando” con bombardeos el esperado rechazo de Belgrado /8.

La “campana aérea” degeneró en guerra, sin mandato de la ONU. La OTAN estuvo a punto de estallar /9. Era un hecho manifiesto que los bombardeos catalizaron una catástrofe en Kosovo: 800.000 albaneses huyeron de la provincia; la población civil fue tomada como objetivo, bien por error (por la “altura” de los bombardeos) o adrede (el mando estadounidense esperaba que la población serbia se levantaría contra Milosevic). Ocurrió lo contrario, el patriotismo frente a unas bombas resentidas como injustas reforzó a Milosevic y hundió a su oposición /10: el periodista de Belgrado Stanko Cerovic, adversario declarado de Milosevic, lo analizó con amargura /11.

El 22 de mayo de 1999, en mitad de la guerra, la magistrada canadiense Louise Arbour, procuradora del TPIY, decidió inculpar a Slobodan Milosevic, en aquel momento presidente de la República Federal de Yugoslavia, y a otros altos responsables políticos y militares del régimen, por “*crímenes contra la humanidad y violación de las leyes o costumbres de la guerra*”. La inculpación se refería al período que iba del 1 de enero de 1999 (cuando tuvo lugar la controvertida masacre de Racak, que provocó unos 45 muertos) hasta el final de la guerra en junio de 1999. Según Pierre Hazan /12, la magistrada canadiense tomó esta decisión de forma “*preventiva*” /13, más por desconfianza hacia las grandes potencias que bajo su presión: según esta tesis, habría temido que los gobiernos de la Alianza, confrontados a una guerra que se estaba volviendo un verdadero fiasco para la OTAN, intentarían un acuerdo con el dirigente de Belgrado, a cualquier precio. Como se puede comprobar, en cambio, la inculpación de Milosevic coincidía exactamente con lo la propaganda de la OTAN para legitimar su acción /14. Aunque también pudiera ser que Louise Arbour y Carla del Ponte fueran víctimas de esta misma propaganda.

Se anunció entonces la inculpación de Milosevic por el genocidio en Kosovo: centenares de fosas, decenas de Srebrenica, decenas o centenares de miles de muertos del genocidio anunciado por Clinton que justificaban la guerra /15.

Para “hacer tragar” el compromiso militar de Alemania, que no era una cuestión menor, sobre todo para los Verdes, el ministro alemán de Defensa tuvo que exclamar un “*nunca más*” que recordaba el genocidio anti-judío. En consecuencia, Rudolf Scharping informó el 9 de abril de 1999 sobre un plan de “deportación” de los albaneses que ya habría comenzado a ser aplicado desde noviembre de 1998 en Kosovo. Sólo que... El susodicho plan resultó ser una impostura de la que no se volvió a hablar más en el TPIY;

- ◆ Desde el final de la guerra se enviaron observadores internacionales a las supuestas fosas comunes (cf. *El País*, 23/11/1999), con todos los medios de investigación con que cuenta un protectorado bajo presencia de la OTAN, mandatada a proteger a todas las comunidades.
- ◆ Según el informe de *Human Right Watch* en 2001 /16, la expulsión masiva de los albaneses durante la guerra de la OTAN podía servir en realidad para objetivos distintos: una modificación de la composición étnica de Kosovo; una negociación sobre el reparto territorial de Kosovo; y también para objetivos inextricablemente unidos a la propia guerra de la OTAN: desestabilizar a los Estados vecinos y dificultar las actuaciones en tierra.
- ◆ El informe hace balance de los cuerpos exhumados por el TPIY al cabo de dos años de investigaciones, a fecha de julio de 2001: 4.300 albaneses muertos por las fuerzas serbias y yugoslavas, menos de los que se produjeron en sólo unas pocas horas en Srebrenica.
- ◆ Mientras Joska Fisher, ministro alemán de Asuntos Exteriores, justificaba la guerra de la OTAN por una “catástrofe humanitaria” que hacía pensar en un genocidio, un informe oficial de los servicios de seguridad alemanes estimaba, el 12 de enero de 1999: “*El Este de Kosovo no ha estado implicado en ningún momento en un conflicto armado. La vida pública en ciudades como Pristina, Urosevic, Gnjilan, etc., durante el conflicto, ha continuado de forma relativamente normal. Las acciones de las fuerzas de seguridad no se dirigieron contra los albano-kosovares como grupo étnico, sino contra un adversario militar [la UCK] y sus partidarios, reales o supuestos...*” /17.
- ◆ Finalmente, el 6 de setiembre de 2001, la Corte Suprema de Kosovo, en Pristina, concluyó tras una investigación, que no había habido genocidio en Kosovo durante el período analizado (cf. despacho de AFP del 7 de setiembre).

¿Qué dicen de ello los parlamentos europeos o el Congreso de los Estados Unidos?
¿Qué puede opinar al respecto la Francia “republicana”, que se niega a conceder un estatuto de pueblo a los corsos o tarda en adoptar la carta de las lenguas minoritarias del Consejo de Europa? ¿Por qué los Verdes alemanes apoyaron la guerra de Kosovo y no la de Irak, cuando las masacres de los pueblos kurdos en Irak no tu-

vieron comparación con lo que fue la represión en Kosovo? ¿Qué balance sacan? ¿Qué cuentas han pedido los parlamentos europeos y el congreso de Estados Unidos por una guerra que resultó ser un grave precedente de consecuencias negativas?

Algunas conclusiones: Dar sentido a los combates por otro mundo posible

Algunos antiimperialistas de anteaer constataron las violencias cometidas y las dificultades de las resistencias interiores, y llegaron a la conclusión de exigir primero y apoyar después la intervención militar de las grandes potencias; ante la paralización de los planes de paz de la ONU y de la Comunidad Europea, se volvieron hacia la OTAN, transformada en brazo armado de la ONU, con la esperanza de que emergiera un “gendarme” para un mundo supuestamente “civilizado”. Las corrientes que se adhirieron a esta ideología saludaron la guerra de la OTAN en Kosovo, entre marzo y junio de 1999, como “tardía” pero bienvenida, legítima ya que no legal, desde el punto de vista del derecho internacional.

Fuimos críticos con estas ilusiones y nos sumamos a quienes se movilizaron masivamente contra la intervención de la OTAN, denunciando la falta de salidas y las mentiras de la pseudo-guerra humanitaria que no protegió ni vidas ni derechos.

Los Balcanes se encuentran hoy “integrados” en un proyecto de encuadramiento europeo-atlántico, muy lejos de decisiones democráticas de sociedad y de una verdadera autodeterminación de las poblaciones sobre las formas y contenidos de los Estados en que se insertan y donde querían defender sus intereses y su dignidad. Kosovo incluye una gigantesca base estadounidense: Bondsteel; la generalización de Estados precarios en los Balcanes, cuestionados e incapaces de asegurar una cohesión social, por su adhesión a las políticas neoliberales, mostrando que la región no está estabilizada, tras la guerra de la OTAN y seis años después de la caída de Milosevic.

Rechazamos las lógicas simplistas (Milosevic o la OTAN), pero no las pusimos en el mismo plano, porque tener que escoger una contra la otra no era ni necesario ni clarificador. En dos sentidos:

- ◆ *A escala de los retos geoestratégicos*, tanto de orden mundial como europeo, donde Milosevic no pintaba mucho, había que denunciar el redespiegue de la OTAN y de las lógicas imperialistas y neoliberales estadounidenses y europeas, así como las mentiras de sus propagandas.
- ◆ *pero en cuanto a la búsqueda de “sentido” para las resistencias al orden mundial imperialista*, había que *disociarse claramente* de las políticas reaccionarias llevadas a cabo por Milosevic, porque *impedían* cualquier *acercamiento multinacional de los pueblos* y *desnaturalizaban* cualquier proyecto socialista. Condujo al pueblo serbio a un callejón sin salida, y fue el principal artífice de su propia caída.

1/07/2006

Catherine Samary es economista. Ha publicado numerosos libros sobre la historia de Yugoslavia y su descomposición, entre otros: *Le marché contre l'autogestion-l'expérience yougoslave*, Publisud-La Brèche, 1988 y *Les conflits yougoslaves de A à Z* (Atelier, 2000).

- 1/ Propone un análisis comparativo de las transformaciones de la propiedad, del Estado y de las relaciones sociales en Serbia y en los otros países “en transición”, en “Réinsérer la Serbie dans l’analyse de la transition”, *Revue d’études comparatives Est/Ouest*, vol. 35, marzo-junio 2004, nº 1-2, CNRS, pp. 116-156.
- 2/ *Le Monde Diplomatique*, agosto 1992: “La deriva de una Croacia étnicamente pura”.
- 3/ Cf. Bougarel, X. (2001) “L’Islam bosniaque, entre identité culturelle et idéologie politique”, en *Le Nouvel islam balkanique. Les musulmans acteurs du post-communisme 1990-2000*, Paris: Maitisneuve & Larose.
- 4/ Al llegar por Sarajevo en diciembre de 1992 por razones de solidaridad, mantuve entrevistas con los consejeros de Alija Izetbegovic, quienes explicaban la doble agresión sufrida, que estaba a la vista de todo el mundo, pero también la opción de no pelear en dos frentes a la vez: los musulmanes refugiados en Croacia eran rehenes de Zagreb. Al año siguiente, el poder de Sarajevo se enfrentó con la ofensiva de limpieza étnica de los musulmanes en la Herceg-Bosna por las fuerzas militares croatas. Las presiones estadounidenses para restablecer la alianza con los croatas y las decisiones políticas de Alija Izetbegovic, desfavorable a una auténtica movilización multiétnica que podría volverse en su contra, pesaron en una propaganda pública simplificadora.
- 5/ La instrumentalización de la causa femenina y de las asociaciones de mujeres en esta guerra, como en otras, encontró en cambio una gran resistencia. Abogadas serbias denunciaron en los años 1980, en Belgrado, una propaganda que estigmatizaba sólo a los violadores albaneses de mujeres serbias; durante la guerra de Bosnia, Tudjman intentó controlar una conferencia internacional de mujeres, bloqueando la llegada de las “mujeres de negro”, feministas serbias que se manifestaban regularmente en Belgrado contra la guerra. Pero su operación fue desbaratada...
- 6/ de Beer, P. *Le Monde*, marzo 1999.
- 7/ Léase el dossier de *L’Express*, <http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/kosovo/dossier.asp?id=231490>.
- 8/ Actualmente los Estados Unidos lo han conseguido. Cf. *Le Monde Diplomatique*, enero 2006.
- 9/ En una emisión televisada por la BBC el 20 de agosto, el viceconsejero de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Strobe Talbott, declaró que las divergencias dentro de la OTAN eran tan profundas que “habría sido sin duda muy difícil preservar la unión y la resolución de la Alianza” sin el acuerdo concluido con el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic a comienzos de junio. Cf. http://www.wsws.org/francais/News/1999/sept99/10-sept_kosovo.shtml.
- 10/ Cuando un año más tarde, tras haber esperado en vano los levantamientos populares, los occidentales confiaron en las elecciones para acabar con Milosevic (cosa paradójica, cuando se le describe como a un Hitler), detectaron en los sondeos que quien podía ganar a Milosevic no era Zoran Djindjic, convencido atlantista, sino Vojislav Kostunica, más nacionalista que Milosevic (que le reprochaba haber abandonado a los serbios de Croacia y de Bosnia, igual que en Kosovo) radicalmente hostil a los bombardeos de la OTAN y además no corrupto.
- 11/ Cerovic, S. (2001) *Dans les griffes des humanistes*, ed. Climats.
- 12/ Hazan, P. (2000) *La justice face à la guerre. De Nuremberg à la Haye*. Paris: Stock.
- 13/ Léase “Serbie, Louise Arbour: frappe préventive” (*Institute for War & Peace Reporting*), 29/05/1999, Archives, *Courrier del Balkans*.
- 14/ La imagen “política” del PRJY se remarcó por el momento en que se hizo la acusación y también por el hecho de considerar (Carla del Ponte) que no había materia para procesar a la OTAN por las denuncias recibidas contra la Alianza. Amnistía Internacional y Human Right Watch de 2001 consideraban en cambio que, tanto por los objetivos civiles como por la utilización de bombas de fragmentación, la OTAN no había respetado las convenciones humanitarias internacionales.
- 15/ Cf. Halimi, S. y Vidal, D. (2000) *L’opinion, ça se travaille... Les médias & les “guerres juste”*. Du Kosovo à l’Afghanistan. Ed. Agone, Contre feux.
- 16/ reports/2001/kosovo/indword.htm. Este informe establece también el balance de las agresiones cometidas por miembros de la UCK contra serbios o albaneses o minorías que “colaboran” con serbios en 1998 y después de la guerra.
- 17/ “Intelligence report”, *German Foreign Office*, 12/01/1999, citado por Michel Chossudovsky el 2/10/2000, <http://emperors-clothes.com/articles/chus/nato.htm>.

25 años de conflictos

1974. Nueva constitución: confederalización de Yugoslavia. Kosovo, provincia autónoma de Serbia, está representada en las instituciones federales con derecho de veto contra toda decisión serbia.

1980. Muerte de Tito. Lo reemplaza a la cabeza del Estado una presidencia colegial.

1981. Decenas de miles de albaneses de Kosovo reclaman el estatuto de República. Represión sangrienta.

1986. Manifiesto de los serbios de Kosovo. Se hace público el proyecto de memorándum de la Academia de Ciencias serbia.

1987. Milosevic excluye a sus oponentes y consolida su posición dirigente al frente de la Liga de los Comunistas de Serbia.

1988. “Revoluciones antiburocráticas” en Vojvodina y en Montenegro, favorables a Milosevic. Manifestaciones masivas en Serbia contra “el genocidio de los serbios en Kosovo”. Destitución de los dirigentes comunistas albaneses.

1989. Enmiendas constitucionales, aceptadas por la Federación, suprimiendo el derecho de veto de Kosovo en el marco de una autonomía subordinada a Belgrado. Manifestaciones albanesas. Envío de tropas de la policía federal. Huelga de hambre de los mineros de Trepcia. Represión sangrienta y ratificación por la asamblea kosovar de las enmiendas constitucionales serbias. Celebración del 600 aniversario de la batalla de Kosovo Polje (*el Campo de los Mirlos*). Estado de excepción en Kosovo.

Slobodan Milosevic es elegido presidente de la República serbia por el parlamento serbio.

Leyes de transformación de la propiedad y *terapia de choque* liberal introducida en el plan federal por Ante Markovic.

1990. XIV y último congreso de la Liga de los Comunistas Yugoslavos (LCY); salida de los delegados croatas y eslovenos. Primeras elecciones libres en las repúblicas. Franjo Tudjman es elegido presidente de Croacia. Slobodan Milosevic es elegido presidente de Serbia. Alija Izetbegovic es nombrado presidente de Bosnia-Herzegovina en el marco del reparto de mandatos entre partidos nacionalistas que habían prometido gobernar juntos.

Adopción de una nueva constitución serbia que reafirma la soberanía de Belgrado sobre las provincias. Adopción de una constitución en Croacia suprimiendo el estatuto de “pueblo” para los serbios. El parlamento de Kosovo, disuelto por decreto de Belgrado, se reúne y proclama la República de Kosovo en el marco de la Federación Yugoslava. Expulsiones masivas de albaneses. Organización de una sociedad albanesa paralela. Referéndum de independencia esloveno (93% de participación; 89% de Sí).

1991. Crisis de la presidencia colegial yugoslava. Plebiscito de los serbios de Croacia para su

mantenimiento en Yugoslavia. Incidentes armados en las zonas de población serbia. Referéndum de independencia boicoteado por los serbios (84% de participación; 92% de Sí). Declaraciones de independencia de Croacia y de Eslovenia (25 de junio). Referéndum de los albaneses de Kosovo en favor de la independencia (30 de septiembre). Referéndum de independencia en Macedonia boicoteado por los albaneses (79% de participación; 90% de Sí). Toma de Vukovar (Croacia) después de 86 días de asedio por el ejército federal y las milicias serbias (agosto-diciembre). Autoproclamación de una República serbia de Krajina.

La Comunidad Europea define criterios para las peticiones de reconocimiento que deben dirigirse antes del 23 de diciembre a las repúblicas que quieran abandonar Yugoslavia. El 23 de diciembre, Alemania reconoce a Eslovenia y a Croacia.

Encuentro de Milosevic y de Tudjman. Discusiones sobre la partición étnica de Bosnia-Herzegovina.

1992. La Comunidad Europea reconoce a Eslovenia y a Croacia y pide a Bosnia-Herzegovina que organice un referéndum de independencia.

Proclamación de la “República federal yugoslava” (Serbia-Montenegro) sobre la base de una nueva constitución.

Referéndum de independencia de Bosnia-Herzegovina boicoteado por los serbios (64% de participación; 99% de Sí). Manifestación pacifista ante el parlamento bosnio. Primeros enfrentamientos. Autoproclamación de la “República serbia de Bosnia-Herzegovina”. El ejército popular yugoslavo (JNA) se retira oficialmente de Bosnia-Herzegovina pero deja la mayoría de las infraestructuras y las armas a las milicias bosnio-serbias. Aunque Croacia apoya oficialmente la independencia de Bosnia-Herzegovina, el HDZ (partido de Tudjman) es purgado de sus elementos “pro-bosnios” y Herceg-Bosna comienza a establecerse con bandera y moneda croata.

El Consejo de Seguridad de la ONU impone un triple embargo (comercial, petrolero y aéreo) a Serbia y a Montenegro. Croacia, Eslovenia y Bosnia son admitidas en las Naciones Unidas, que rechazan la petición de admisión de la nueva República Federal Yugoslava.

1993. El Consejo de Seguridad decide la creación de un Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY).

Guerra entre croatas y musulmanes. En junio, reunión entre Tudjman y Milosevic, que proponen la partición de Bosnia-Herzegovina en tres entidades étnicas. Plan Owen-Stoltenberg. Autoproclamación de la “República de Herzeg-Bosna”, con la capital en Mostar. Los barrios musulmanes de la ciudad son arrasados por las milicias croatas apoyadas por el ejército de Zagreb. Aprobación condicional del plan por Sarajevo y acuerdo serbio-musulmanes. Sublevación y enfrentamientos entre

el ejército de Sarajevo y la “provincia autónoma de Bosnia occidental” fiel a Fikret Abdic.

1994. Cambios de personal en las fuerzas croatas. Bombardeos de la OTAN contra objetivos serbios. Presión de EE UU para el alto el fuego entre fuerzas croatas y musulmanes. Se establece la Federación Croata-Musulmana bajo la presión de EE UU.

Verano 1995. Ofensivas del ejército croata en Eslavonia occidental. Ofensivas serbias contra las “zonas de seguridad” instauradas por la ONU, entre ellas Srebrenica (7.000 muertos). En agosto, el ejército croata reconquista la Krajina y expulsa de ella a centenares de miles de serbios.

21 de noviembre de 1995. Reunidos en Dayton (Ohio, EE UU), Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman y Alija Izetbegovic firman un acuerdo que implica la colaboración con el TPIY, mantiene a Bosnia-Herzegovina en sus fronteras y emprende la partición étnica en dos entidades: la *Republika Srpska* (RS) y la Federación Croata-Musulmana. Se levantan las sanciones contra Serbia y Montenegro.

1996-1997. Lanzamiento de las acciones del ejército de liberación de Kosovo (UCK). Condena del “terrorismo” y del separatismo por el secretario de Estado adjunto americano John Kornblum y los ministros franceses y alemán de Asuntos Exteriores.

1998. Enfrentamientos en Kosovo, en la Drenica, contra una base local del UCK. Mueren su dirigente Adem Jashari y 36 personas de su familia. Gran reforzamiento del UCK. Enfrentamientos: 2.000 víctimas y 250.000 refugiados.

Plan Holbrooke aceptado por Belgrado: regreso de los refugiados, autonomía provisional de Kosovo por tres años con despliegue de 2.000 verificadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Enero-marzo 1999. Masacre de Racak en la que mueren aproximadamente cuarenta albaneses (enero). Conferencias de Rambouillet y París. Fracaso de la primera fase (6-20 de febrero): la delegación albanesa rechaza la autonomía y los serbios no aceptan la presencia de la OTAN.

El dirigente del UCK Ashim Thaci es recibido en EE UU. A su regreso (15-19 de marzo), la delegación albanesa firma el proyecto; se añade un “*anexo B militar*” que impone la presencia de la OTAN en el terreno. El proyecto es rechazado por los serbios.

23 de marzo-9 de junio de 1999. Bombardeos de la OTAN. La resolución 1244 que pone fin a la guerra define a Kosovo como una “*provincia yugoslava*” bajo protectorado de la ONU.

10 de diciembre de 1999. Muere Franjo Tudjman, presidente de Croacia, reeligido dos veces en el decenio de los 90; su ejército ha inte-

grado a las milicias de extrema derecha *ustachi*; su ministro de Defensa Gojko Susak es responsable directo de limpiezas étnicas, cometidas especialmente en Herzegovina contra serbios y luego contra musulmanes bosnios (con la construcción de Herzeg Bosna) y en Croacia contra los serbios de Eslavonia y de Krajina. Apoyado por EE UU y Alemania, murió sin ser inculcado por el TPIY.

5 de octubre de 2000. Milosevic reconoce su derrota en las elecciones de septiembre. Vojislav Kostunica es el nuevo presidente de la Federación Yugoslava.

1 de abril de 2001. Milosevic, inculcado por el Ministerio del Interior por malversaciones, se entrega a la justicia serbia.

28 de junio de 2001. Por decisión del gobierno serbio de Zoran Djindjic, pese al veto del Tribunal Constitucional, Milosevic es transferido al TPIY de La Haya. En septiembre de 2001, la acusación contra él se extiende a sus responsabilidades en Croacia (agosto 1991-junio 1992) y el 12 de noviembre de 2001, Carla del Ponte presenta una tercera acta de acusación por crímenes cometidos en Bosnia entre 1991 y 1995. La fiscal pide que las tres acusaciones sean tratadas en un solo proceso, lo que es rechazado por el juez Richard May. Pero el Tribunal de Apelación acepta el 1 de febrero de 2002 la petición de un solo proceso, petición apoyada por el acusado que se considera no culpable y pide defenderse él mismo.

12 de febrero de 2002. Comienza el proceso sobre la base de los procedimientos anglosajones. La primera parte (acusación sobre los tres sumarios) termina el verano de 2004.

11 de marzo de 2006. Slobodan Milosevic es encontrado muerto en su celda durante la primera fase del proceso (su defensa). Según el informe de la autopsia (12 de marzo) la causa de la muerte es un infarto de miocardio. El 17 de marzo, el TPIY excluye la tesis del envenenamiento en un nuevo informe de análisis toxicológico.

3 de junio de 2006. La independencia de Montenegro pone fin al Estado de Serbia Montenegro que, bajo la presión de la Unión Europea, había mantenido en 2003 la ficción de un Estado común de las dos repúblicas (¡sin moneda común!) suprimiendo ya toda referencia a Yugoslavia. Entre 1991 (independencias de Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina) y 2003, había subsistido una última República Federal Yugoslava (RFY) compuesta por Serbia (con sus dos provincias de Kosovo y de la Vojvodina) y de Montenegro, cuya nueva constitución había suprimido, sin consulta popular, toda referencia al socialismo. La independencia de Montenegro pone fin al proceso de separación de las repúblicas, mientras se abren negociaciones sobre el futuro estatuto de Kosovo.

La Asamblea Constituyente: entre la utopía y el desencanto

Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni

Las elecciones del 2 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente representaron un prematuro plebiscito para el gobierno de Evo Morales Ayma, antes de cumplir los seis meses en el Palacio Quemado. Con el 50,7% de los votos obtenidos por el Movimiento al Socialismo (MAS) se ratificó el nuevo rumbo iniciado con la nacionalización de los hidrocarburos, decretada dos meses antes y escenificada con la ocupación militar de los campos petroleros, las refinerías y las gasolineras de todo el país. Y esta victoria electoral se amplificó con el derrumbe de la capacidad seductora de una derecha que hegemonizó el poder desde mediados de los años ochenta: Poder Democrático Social (Podemos), la principal expresión conservadora, cosechó apenas el 15%, casi la mitad de los votos de las presidenciales del 18 de diciembre de 2005.

Sin embargo, pese a la expansión del oficialismo hacia el oriente y sur del país -ganó en Tarija con el 41% y en Santa Cruz con el 25%- el bastión *masista* sigue siendo el occidente aymara y quechua, donde el gobierno consiguió la mayoría absoluta en todos los departamentos (La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí). Estas “dos Bolivias” se expresaron en los resultados del referéndum autonómico paralelo a la elección de constituyentes: si bien el No a las autonomías departamentales se impuso a nivel nacional -un triunfo casi personal de Evo Morales- el Sí ganó con amplitud en Santa Cruz, Tarija, y en los menos poblados Beni y Pando, anticipando un escenario complejo en la Asamblea Constituyente que sesionará entre seis meses y un año, y deberá responder a las difusas, pero bien adheridas expectativas de los movimientos sociales y sindicales: que la convención sea el ámbito para refundar el país, luego del largo apartheid contra las mayorías indígenas.

Las dificultades para concretar esta tarea no son pocas. Como lo mostraron sus primeros pasos, la Constituyente es un escenario potencialmente conflictivo, a lo que se suma que, en Bolivia, las batallas políticas suelen pasar fácilmente de las instituciones a las calles.

¿Una “salida pactada”?

Al asumir el poder pareció imponerse la idea de “salida pactada” -entre los indígenas del occidente y las élites empresariales del oriente- promovida por el vicepresidente Álvaro García Linera. En ese marco, junto al apuro para aprobar una la ley de convocatoria a la Constituyente y el referéndum por las autonomías, se acordó la pregunta de la consulta popular -a la que incluso el MAS dijo que respondería afirmativamente- y la necesidad de dos tercios de la convención para aprobar el texto final de la nueva constitución política del Estado. Esta mayoría especial es visualizada por la derecha política y regional como un límite a la

hegemonía indígena y popular corporizada en el MAS, que estaría llevando al país por el camino de la Venezuela de Hugo Chávez.

Pero Evo Morales no tardó en distanciarse de estos acuerdos iniciales: el primer golpe de timón lo dio a poco más de un mes de las elecciones, cuando declaró públicamente que votaría No a las *“autonomías de la burguesía”* y entroncó con la posición negativa, pero hasta ese momento casi subterránea, de los sindicatos campesinos que constituyen el núcleo duro del partido de gobierno. El segundo paso fue poner en duda los dos tercios, no alcanzados por el MAS, y proponer que estos sean operativos para aprobar el texto final de la Carta Magna, pero no los artículos individuales, lo que se enfrentó al rechazo de la derecha y empantanó el inicio de las deliberaciones. Así, el gobierno se debate hoy entre dos estrategias: llevar las posiciones del oficialismo hasta el final, aún a riesgo de que la oposición conservadora se retire de la convención, o buscar consensos que *“reconozcan a la mayoría”* y no desdibujen el proyecto de cambio promovido por el mandatario boliviano. García Linera declaró el 22 de agosto que *“en democracia es la mayoría la que toma las decisiones, las minorías tienen derechos pero no puede ser rehén de minorías transitorias que recurren al chantaje”*. Y Morales señaló que *“no tiene sentido una mera reforma constitucional”*.

Al mismo tiempo, las idas y vueltas descritos son un síntoma del rumbo general del gobierno: el *“populismo-sindicalista”* de Evo Morales -que no escapa al discurso confrontacional y a la polarización del campo político- se fue imponiendo al *“indigenismo-socialdemócrata”* de García Linera, lo cual no ocurrió de forma conflictiva, sino a partir del reconocimiento vicepresidencial del liderazgo del todavía jefe cocallero, quien le ha impuesto al gobierno su sello personal.

Y es también en este marco que se produce el entronque histórico entre el nuevo nacionalismo indígena en el poder y el viejo nacionalismo militar boliviano. Evo Morales revitalizó la antigua alianza popular-militar del nacionalismo latinoamericano y la puso en práctica en dos momentos claves: la nacionalización de los hidrocarburos el 1º de mayo -cuando las Fuerzas Armadas ocuparon los campos petroleros- y la inauguración de la Asamblea Constituyente el 6 de agosto, con miles de indígenas y campesinos, provenientes de los rincones más remotos de Bolivia, marchando junto a los militares delante de la Casa de la Libertad, en Sucre.

El MAS contra las masas o las fantasías de los teóricos de la multitud

¿Cómo se explican los límites de la experiencia sui géneris que representa el gobierno de Evo Morales, incluida la deficiente ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente que le da a la derecha poder de veto sobre la posibilidad de un cambio radical y autolimita el poder del MAS en su momento de mayor legitimidad? Raúl Zibechi /1 anticipa el fracaso de la convención y sostiene que *“por penoso que resulte, debe reconocerse que una demanda nacida de los movimientos, defendida al calor de levantamientos masivos desde la ‘guerra del agua’ del año 2000 en Cochabamba, quedará atrapada en los vericuetos de una burocracia estatal que*

1/ “Bolivia: el deseado empate técnico”, *La Jornada*, México, 10-7-2006.

tiende a consolidarse. El que la maquinaria estatal colonial quede cubierta de ponchos y polleras no modifica de modo sustancial los hábitos y modos de su funcionamiento”. Y le atribuye este devenir a la teoría del “empate catastrófico” de García Linera, a la “tentación del poder estatal” y al pasaje del “momento insurreccional al momento institucional”. “La ley de convocatoria ha reducido el espacio político abierto por los movimientos sociales en los años de lucha anteriores”, dicen Raquel Gutiérrez Aguilar y Dunia Mokrani /2, y agregan: “Dada la captura de la ‘política constituyente de la multitud’, desplegada en años previos por el orden legal instituido, que tiñe a la actual Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente redactada por el vicepresidente García Linera, los contenidos políticos de fondo parecen estar hoy curiosamente ausentes del debate”.

Los problemas descritos por estos textos son reales, pero las atribuciones de responsabilidades parecen demasiado rápidas (y no muy fundamentadas). Cualquiera que hay participado en congresos sindicales en Bolivia sabe que de allí salió la “tesis del instrumento político” -electoralmente, el MAS- que buscó centralizar la representación política popular frente a la derecha y ocupar el poder del Estado (la consigna de “cambiar el mundo sin tomar el poder” jamás tuvo eco en Bolivia). Es más, la lectura actual es que si no hubieran logrado esa centralización, hoy Evo Morales no estaría en el Palacio Quemado y el cuento sería otro: quizás la *multitud* resistiendo -y muriendo- en las calles. Por otro lado, si “el escenario actual ha dejado de ser un espacio amplio de deliberación e intervención directa” es por la dinámica de los propios movimientos sociales bolivianos, que presentan picos de acción colectiva para luego replegarse hacia los ámbitos corporativos que determinan su lógica de funcionamiento; pero estos “límites” del movimiento social están fuera del horizonte de los autores. Como tantas otras veces, estos análisis reivindican a una *multitud* ideal que normalmente se estrella con los movimientos sociales realmente existentes, de los cuales emerge el MAS.

¿De dónde sale acaso la legitimidad -y la cultura política, incluso en su faceta *caudillista*- de Evo Morales sino de esos movimientos sociales? Otra cosa es que esas organizaciones no se adapten a los moldes de los teóricos de la *multitud*.

A la hora de nombrar representantes “puros” de los movimientos sociales que no están en la Asamblea, Gutiérrez y Mokrani mencionan a Óscar Olivera, quien tuvo un papel relevante en la “guerra del agua” pero carece actualmente de cualquier capacidad de movilización. Lo paradójico es que Olivera no llegó a postularse por el fracaso del frente electoral de los “excluidos” del MAS, que incluía a figuras como el mayor David Vargas, jefe del motín policial de febrero de 2003 y con contornos ideológicos bastante ambiguos. También parece quedar fuera de análisis que movimientos sociales “radicales” como los de la ciudad de El Alto apoyaron todas las salidas electorales desde 2003.

La realidad parece ir por otro lado. El gobierno del MAS, y sus enormes dificultades de gestión, no son ajenas a problemas más terrenales como la falta de cuadros y la completa inexperiencia en el manejo del Estado (esa fue la crítica más frecuente en la autoevaluación gubernamental a siete meses de gestión). No sólo el MAS sino la

2/ Una Reflexión sobre el Proceso Constituyente en Bolivia, en *Bolpress*, 18-7-2006.

mayoría de los movimientos sociales llegan a la Asamblea Constituyente con muchas dificultades para transformar su voluntad de “refundar” el país en propuestas concretas de cambios institucional y democratización del Estado.

En ese marco, toma fuerza la idea de “constitucionalizar” los cambios ya iniciados -como la nacionalización de los hidrocarburos o la reforma agraria- más que en el despliegue de una nueva creatividad social. Para el constituyente Yoni Bautista, representante del MAS por La Paz, la Constituyente debe servir “*para que los recursos naturales y la tierra sean propiedad inalienable del Estado, para establecer nuevos derechos para los pueblos indígenas, para democratizar el Estado mediante autonomías diferentes a las que defienden las oligarquías cruceñas*”. En síntesis: los límites de Evo Morales son en gran medida los límites de los movimientos sociales en este camino emancipatorio plagado de obstáculos derivados de siglos de dominación colonial.

Los desafíos actuales

Todavía es demasiado pronto para anticipar si se abre una posibilidad refundacional para Bolivia o un camino al desencanto. “*La Asamblea será el gran escenario del ritual de integración y de acoplamiento de la sociedad en un momento de victoria cuando, por lo general, los momentos de unificación de la sociedad boliviana han sido después de grandes derrotas, como la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, etc.* -sintetizó recientemente García Linera- *Si se logra el gran armisticio nacional la Constituyente habrá cumplido con creces su misión. Pero también la convención será el lugar de materialización de las nuevas relaciones de fuerza en el país y, por lo tanto, de constitucionalización de las principales medidas tomadas por el gobierno*” /3. La lucha contra la derecha política, empresarial y regional en las primeras semanas de la Asamblea Constituyente muestran que el MAS está dispuesto a dar batalla para que la convención sea “originaria” y no derivada, y esté por encima de los poderes constituidos.

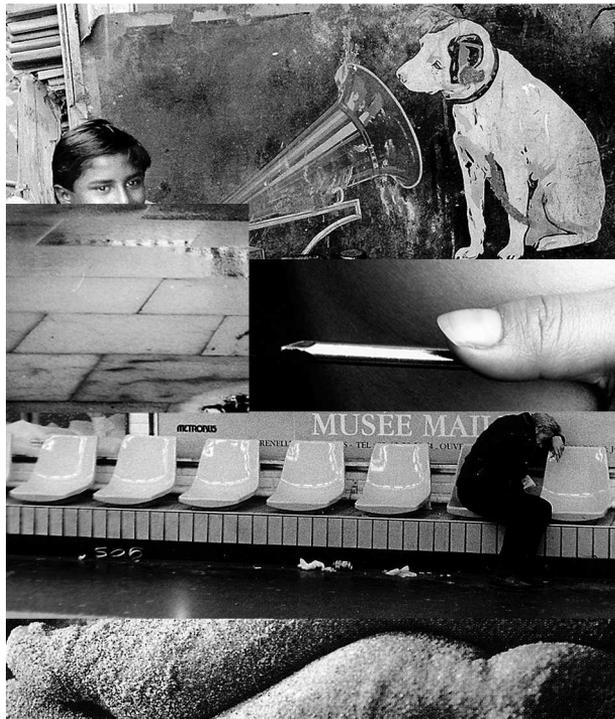
Al momento de escribir esta nota, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) ya amenazaba con movilizarse para evitar que los dos tercios deriven en un empantanamiento que haga fracasar la constituyente. Lo mismo hacía el Comité Cívico de Santa Cruz, una organización autoconsiderada el “gobierno moral” de ese departamento y principal animadora de la autonomía regional, en defensa de esos mismos dos tercios, calentando los motores para la batalla por la autonomía. Y este tema es uno de los huesos más duros de roer: para las poderosas élites orientales, la autonomía regional es una especie de muro frente al avance del “populismo indígena”, y después de perder el poder en el ámbito nacional, se atrincheran en sus regiones para defender sus privilegios.

Más allá de los análisis de cierto sector de la izquierda “radical”, lo cierto es que el MAS ganó ampliamente las elecciones del 18 de diciembre con un programa reformista, que proponía recuperar la soberanía nacional, reconstruir el Estado y dejar atrás el colonialismo interno. Y a la luz de esos parámetros deberá leerse el éxito o el fracaso de la actual experiencia de cambio que vive Bolivia.

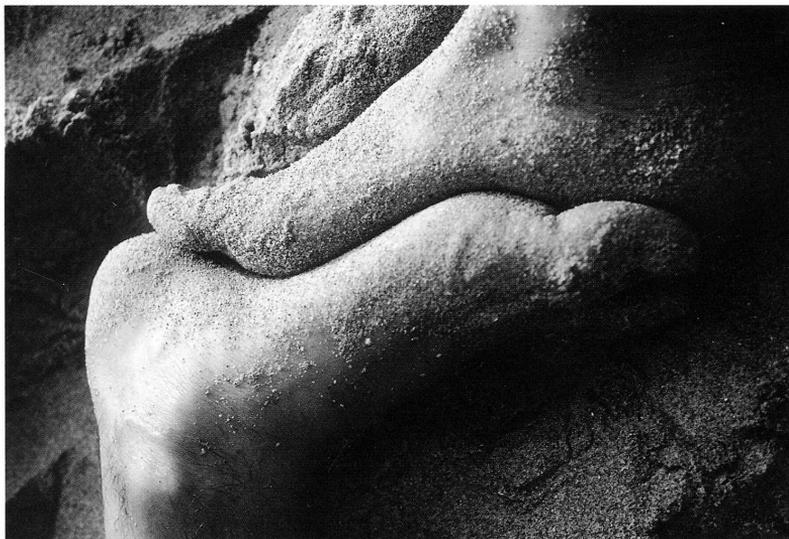
Hervé Do Alto es historiador y politólogo. **Pablo Stefanoni** es economista y periodista. Han publicado el libro *Evo Morales, de la coca al palacio*. Ed. Malatesta.

3/ *Página/12*, Buenos Aires, 5-7-2006.

2 miradas voces



imagenaria



ANA DÍEZ. 

Imagenaria (la REALIDAD)

La cultura de abajo

El semanario “la REALIDAD” mantuvo dos años de independiente existencia a pesar de la oposición de los poderes políticos y económicos establecidos de Cantabria. Dos años de lucha, pero también dos años en los que se ofrecía voz a los que no la podían ejercer y un lugar para mostrar miradas, diferentes y esperanzadas, diversas e indagadoras. Dos años de sueños que al final cayeron frente al hormigón de los poderes políticos cántabros. Una de las secciones, “Imagenaria”, ofrecía un espacio a los profesionales y aficionados a la fotografía que tuvieran una visión propia sobre el entorno, que quisieran expresar sus sentimientos, exponer unas ideas personales a través de la creación mediante el objetivo de la cámara.

Aquí seleccionamos cinco, entre las más de sesenta aportaciones. Cinco que abrimos como un abanico en estos calores veraniegos. Cinco autores, cinco temas. Aún no conocíamos el “éxito” de la cámara digital que tanto está cambiando el modo de mirar, que tan banal convierte el hecho de disparar... Aún enfocar, ajustar, disparar, provocaban la incertidumbre y el temblor del resultado. Pero este es otro tema.

Ahora sólo quiero imaginar a estos cinco fotógrafos en el momento, único e irreplicable, de la creación de estas obras de arte: A Ana Díez buscando la textura de esos pies arenosos entrecruzados; a José Miguel del Campo añadiendo una uñas violentas a unas suaves y acariciadoras manos, que tanto dicen; a Higinio Sanz Crespo, cámara en ristre, pendiente del brillo, del reflejo que crea una realidad soñada; a Mateo Pérez, percibiendo la soledad de ese hombre que refleja la contradicción y el fracaso de unas palabras tan bellas, igualdad, fraternidad...; a José Ramón Riego, sorprendiendo esa “Voz de su amo” junto a una sonrisa. A todos ellos los acogemos en este *VIENTO SUR*.

Carmen Ochoa Bravo



© José Miguel del Campo – publicado en “la REALIDAD”



© Higinio Sáinz Crespo – publicado en “la REALIDAD”



© MateoPérez Fraile – publicado en “la REALIDAD”



© José Ramón Riego – publicado en “la REALIDAD”

Movimientos por la paz: el resurgimiento

El movimiento por la paz fue uno de los protagonistas sociopolíticos fundamentales de los años 80 en el mundo occidental. Movilizó a centenas de millares de personas, creó nuevas culturas militantes, fue lugar de convergencia e impulso de otros movimientos sociales, como el feminismo y el ecologismo, perturbó y renovó a la izquierda alternativa, cambió en numerosos países el mapa político de la izquierda institucional... Una extensa y polémica literatura ha analizado desde muy diversos puntos de vista este proceso.

En los años 90, el movimiento sufrió los cambios fundamentales que tuvieron lugar en la escena internacional, como toda la izquierda social y política. Se mantuvieron focos de actividad: organizaciones, campañas... aunque sin la centralidad política y los referentes comunes de la etapa anterior.

Desde el 11 de septiembre de 2001, asistimos a un resurgimiento, desde luego necesario frente a la “guerra sin límites”, pero también posible gracias a la continuidad de experiencias, organizaciones y campañas durante los 90, y a nuevos factores, entre los cuales destaca especialmente el “movimiento antiglobalización”. Será en todo caso el resurgimiento de un proceso muy diferente al que conocimos hace veinte años. Los artículos que publicamos en *Plural* estudian este proceso.

Enric Prat, que ha sido el editor del dossier, analiza las diferentes expresiones actuales de movimientos y campañas vinculados con la lucha por la paz y contra el militarismo. **Esther Vivas** trata específicamente las relaciones de las movilizaciones contra la guerra con el movimiento antiglobalización. **Jordi Armadans** analiza la política militar del gobierno Zapatero, especialmente, la Directiva de Defensa Nacional. **Tica Font** critica e interpreta las “nuevas guerras”, especialmente las que están asolando África. **Claude Serfati** actualiza la interpretación marxista de las relaciones entre imperialismo y militarismo.



1.- Movimientos por la paz: el resurgimiento

El movimiento por la paz frente a la economía militar

Enric Prat

Uno de los rasgos más característicos de la economía internacional es la producción y el comercio de armamentos. Las industrias de estos medios de destrucción tienen garantizada la venta de la gran mayoría de sus productos porque una buena parte de ellos se fabrican a petición de los gobiernos y sus Ministerios de Defensa, que satisfacen el precio de las armas y municiones producidas con el dinero que tienen presupuestado para gastos militares. Las industrias de armamentos son las grandes beneficiarias de los gastos militares, ya que obtienen beneficios a través de la venta de armamentos al Estado del país donde están radicadas y a otros Estados del mundo. Estos gastos militares son bastante elevados, tanto en el mundo como en España. Acaparan una parte importante de los Presupuestos Generales del Estado y representan una porción significativa del Producto Interior Bruto. La investigación con finalidades bélicas también absorbe ingentes recursos. Su finalidad es garantizar los pasos previos necesarios para la producción y exportación de armas (estudios, proyectos, diseños, verificaciones, etc.), que después serán empleadas en guerras y conflictos bélicos, matando personas y destruyendo bienes. En fin, la exportación e importación de armamentos tiene un gran peso en el conjunto del comercio mundial.

El movimiento por la paz ha ido cuestionando los diferentes ámbitos de la economía de la defensa o componentes del ciclo armamentístico (gastos militares de los Estados, investigación con finalidad bélica, industrias de armamentos y comercio de armas) a través de diferentes campañas y objeciones de conciencia, entre las que hay que destacar la objeción fiscal a los gastos militares, la campaña “Por la paz: ¡no a la investigación militar!” y la objeción científica, las actividades y propuestas para la conversión de las fábricas de armamentos en productoras de bienes y servicios de uso civil, y las campañas por la transparencia, el control y la reducción del comercio de armas.

Las críticas fundamentales que ha realizado el movimiento por la paz a la economía militar han sido las siguientes: todos los componentes del ciclo armamentístico contribuyen a la preparación de la guerra; los gastos militares y la investigación con finalidades bélicas absorben una cantidad inmensa de recursos que podrían destinarse a necesidades sociales y a investigación civil; las industrias de armamentos producen medios de destrucción; el comercio de armas alimenta los conflictos armados, fortalece a gobiernos que violan los derechos humanos y contribuye al en-

deudamiento de muchos países. Frente a la economía de la defensa, el movimiento por la paz ha defendido una serie de propuestas alternativas: el desarme; la reducción y desaparición de los gastos militares y de la investigación militar, y la transferencia de esos recursos hacia la investigación civil y a cubrir necesidades sociales; la conversión de las industrias de armamentos en productoras de bienes y servicios civiles; la transparencia, control, reducción y eliminación del comercio de armamentos, y la aprobación de códigos de conducta sobre las exportaciones de armas.

Objeción de conciencia fiscal a los gastos militares

Cada año, desde 1983, se realizan en España campañas de objeción fiscal a los gastos militares. En la época del gobierno Calvo Sotelo, el Parlamento aprobó en julio de 1982 la Ley de Dotaciones Presupuestarias para Inversiones y Sostentamiento de las Fuerzas Armadas, que asignaba más de dos billones de pesetas para los ocho años siguientes, con el objetivo de homologar el Ejército español con los del resto de países de la OTAN. Ante esta ley, la Asamblea Andaluza de No Violencia impulsó en 1983 la primera campaña de objeción fiscal.

La objeción fiscal es una acción de no colaboración con el Estado en los gastos de preparación de las guerras y de mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Técnicamente consiste en lo siguiente: los objetores fiscales deducen en su declaración de la renta el porcentaje equivalente al que en los Presupuestos Generales del Estado se destina a gasto militar, adjuntando al impreso de la declaración de la renta una carta dirigida a la Delegación de Hacienda en la que se explican los motivos de su objeción fiscal y un resguardo bancario como prueba de haber donado la cantidad no pagada a entidades y ONG que desarrollan proyectos solidarios y asistenciales (conservación del medio ambiente, atención a los pobres...) /1.

Los objetivos de estas campañas quedaron muy bien reflejados en las conclusiones del Primer Congreso Estatal de Objeción Fiscal celebrado en 1989:

“la objeción fiscal es una forma de desobediencia civil con la que se pretende, por un lado, lograr que se respete el derecho individual a la objeción de conciencia a los gastos militares y, por otro, los siguientes objetivos de índole social: reducción progresiva hasta la total desaparición de los gastos militares y, consecuentemente, de los ejércitos; denunciar el militarismo y la militarización creciente de la sociedad; cuestionar el modelo actual de Defensa impulsando líneas de debate en este sentido; contribuir a impulsar el movimiento antimilitarista abriendo nuevas vías de participación y lucha” /2.

Por lo tanto, los objetores fiscales se sienten parte integrante de un movimiento por la paz y antimilitarista más amplio, que tiene como objetivo la construcción de una sociedad desmilitarizada a través de la movilización social, la desobediencia civil y la educación para la paz; y realizan la objeción fiscal de forma colectiva y pública, con el propósito de generar debate social sobre los gastos militares y ampliar el número de objetores.

Los grupos que impulsan la objeción fiscal han denunciado el progresivo aumento de los gastos militares en el mundo desde 1999, después del descenso que se produjo en la década de los noventa, como consecuencia del fin de la Guerra Fría y de una redefinición de las políticas de defensa: en 1998 el gasto militar mundial ascendió a 765 mil millones de dólares USA y en el 2004 la cifra se elevó a 975 mil millones; los gastos militares mundiales de 2002 se incrementaron un 5'4% en términos reales respecto al 2001, en 2003 un 7'2% respecto a 2002 y en 2004 un 5'3% respecto a 2003 /3. También han criticado que el presupuesto militar de España siga siendo tan elevado /4: 12.726 millones de euros para el 2000, 13.311 (2001), 13.937 (2002), 14.608 (2003), 15.185 (2004), 16.213 (2005) y 17.166 (2006) /5. El presupuesto militar de España para el 2005 equivalía al 1'86% del PIB (el Informe de Desarrollo Humano define como país militarizado aquel que destina el 2% del PIB al mantenimiento de la estructura militar) y el de 2006 supone el 12% del total de los Presupuestos Generales del Estado y un gasto militar diario de 47 millones de euros.

Esa crítica a los gastos militares se ha complementado con la objeción fiscal. El aumento del número de objetores fiscales que se produjo después de las movilizaciones contra la guerra de Irak de 2003 es esperanzador: en España se pasó de unos 1.500 objetores fiscales "censados" en 2002 a los actuales 5.000 objetores fiscales "censados", aunque hay más que lo hacen de forma anónima. Pero sigue existiendo una preocupación en el movimiento por la paz sobre el número relativamente reducido de objetores fiscales. También es motivo de reflexión el hecho de que un número significativo de objetores fiscales dejan de serlo al cabo de unos pocos años. Este problema afecta directamente al ánimo de los propios objetores fiscales, que se interrogan sobre la eficacia de su acción cuando comprueban el lento crecimiento o el estancamiento de la objeción fiscal.

No obstante, cada vez es mayor la convicción de que el logro del principal objetivo de la campaña, la reducción de los gastos militares, no sólo vendrá condicionado por el número de objetores fiscales sino por otros factores más, como la sensibilización social y el apoyo político conseguido o las disensiones que puedan aparecer en la élite política sobre este tema. Sin lugar a dudas, es esencial que se valore la importancia del número de objetores fiscales y la necesidad de un trabajo específico y sostenido en el tiempo dirigido a su crecimiento, sabiendo que es inevitable que después de un fuerte aumento de objetores fiscales favorecido por algún acontecimiento impactante, como la guerra de Irak, puede producirse un estancamiento o incluso un cierto descenso. De todas formas, hay que ser conscientes que la opción de la objeción fiscal será minoritaria en la sociedad, al igual que lo era la insumisión al servicio militar obligatorio, y que lo decisivo es que no se convierta en una forma de desobediencia aislada política y socialmente. Para conseguir una mayor difusión de las ideas y las propuestas de los objetores fiscales se debería dar una mayor importancia a las tareas de difusión (charlas, reparto de folletos informativos, artículos en prensa, programas de radio...) y a las acciones de protesta en la calle; y lograr una mayor implicación en las campañas de objeción fiscal de las en-

tidades pacifistas y de otras organizaciones sociales y políticas (sindicatos, asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas, partidos...).

Campaña “Por la paz: ¡no a la investigación militar!” y objeción científica

La Fundació per la Pau promueve desde 1999 la campaña “Por la paz: ¡no a la investigación militar!” /6, que cuenta con la colaboración técnica de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona, el apoyo de Justícia i Pau, Associació per a les Nacions Unides a Espanya, Centre UNESCO de Catalunya y las Federacions catalanes d’ONG per la Pau i pels Drets Humans, y la participación de más de treinta entidades /7. En junio de 2002 se constituyó la plataforma estatal de la campaña. Sus objetivos principales son promover el debate en la sociedad y en la comunidad científica sobre la investigación con finalidades bélicas, y presionar a los poderes públicos para que transfieran recursos de la investigación militar a la civil, a través de las actividades de la campaña y de la objeción científica.

Los argumentos y las propuestas principales de esta campaña son los siguientes:

- ◆ Se afirma que la investigación militar también es responsable de las guerras porque está directamente orientada a desarrollar nuevos sistemas de armas. /8.
- ◆ Se alerta sobre los inmensos recursos que se destinan en el mundo a este tipo de investigación: aproximadamente un millón y medio de personas trabajan en el sector militar, de los cuales más de medio millón son científicos que se dedican a la investigación militar; la inversión mundial en investigación militar del año 2003 se elevó a más de 70.000 millones de dólares /9, acaparando un tercio de los recursos que se dedicaron a la investigación en todo el planeta; en investigación con finalidades bélicas se destinaron cinco veces más recursos que a la investigación para la salud.
- ◆ Se denuncia la militarización de la investigación científica a nivel internacional (ninguna actividad científica cuenta con tantos científicos y recibe tanto dinero como la investigación militar) y en España: en los Presupuestos Generales del Estado para el 2006 se destinaron 1.683 millones de euros a la investigación militar /10, que representa el 26% del total presupuestado en investigación y desarrollo /11, y supone casi tres veces más que los recursos dedicados a investigación científica básica (fuente principal de financiación de las universidades y el CSIC) y cinco veces más que los gastos en investigación sanitaria /12.
- ◆ Y se reclama la transferencia de los recursos que se destinan a la investigación militar hacia la investigación con finalidades civiles.

La campaña pide a los científicos, a las universidades y a los centros de investigación que expresen su negativa a colaborar en programas de investigación militar, firmando declaraciones de objeción científica e incluyendo cláusulas de buen uso en sus trabajos científicos (tesis, tesinas, patentes, proyectos...), donde manifiesten que prohíben la utilización de sus aportaciones científicas a los ejércitos y grupos armados, y para

cualquier uso militar o que atente contra los derechos humanos o el medio ambiente. Finalmente, la campaña propone la promulgación de una Ley de Objeción Científica, que proteja a los investigadores que se nieguen a participar en programas militares.

Hasta ahora la repercusión de la campaña ha sido considerable: entre abril de 2002 y febrero de 2004, 2.050 científicos firmaron un compromiso de no participar en investigaciones que tengan finalidades bélicas o estén subvencionadas con fondos dedicados a la investigación con objetivos militares /13; durante el 2003, doce universidades españolas incluyeron en sus estatutos cláusulas de objeción científica, en las que se renuncia a la investigación científica orientada hacia finalidades armamentísticas y militares /14, y los claustros de otras aprobaron mociones en el mismo sentido /15; en 2004, por primera vez una tesis doctoral presentada en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla incorporó una cláusula para impedir su utilización con finalidades militares /16; en fin, 1.210 investigadores y 151 ONG pidieron la desmilitarización de la investigación en los presupuestos del 2005 /17.

Actividades contra las industrias de armamentos y propuestas para su conversión

En España hay unas 200 empresas y entre 15.000 y 20.000 trabajadores que se dedican a producir o prestar servicios de tipo militar: armamentos y munición, construcción naval, electrónica e informática, equipamientos y componentes, industria aeroespacial, consultorías, seguridad... La actual industria de defensa en España presenta las siguientes características: ha experimentado un proceso de fusiones para poder competir en buenas condiciones en el mercado internacional de armamentos y está casi totalmente privatizada /18; las empresas del sector suelen tener varios propietarios, habitualmente grandes grupos de inversión; es una industria muy deficitaria y está fuertemente subvencionada por el Estado, a través de las ayudas a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica del Ministerio de Industria; depende prácticamente de un solo cliente, el Ministerio de Defensa (sólo un 20% de los armamentos producidos se destinan a la exportación); estas empresas participan en programas internacionales de producción de armamentos; y tienen un carácter dual, ya que producen para el Ministerio de Defensa y para el mercado civil /19.

Desde principios de la década de los noventa, se han ido realizando en el País Vasco diferentes marchas contra las fábricas de armamentos y por su conversión en producción civil de utilidad social, dando lugar a la formación del colectivo Gasteizkoak, que ha realizado diversas propuestas de conversión de las industrias de armas, entre ellas la de Explosivos Alaveses (EXPAL), que generó un importante debate entre los diversos sectores implicados (sindicalistas de la fábrica, grupos antimilitaristas y colectivos sociales...). En 1997, la Campanya Contra el Comerç d'Armes (C3A) de Barcelona propuso la realización de un estudio de conversión de esta fábrica, que debía incluir dos condiciones: el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y el apoyo de los trabajadores de la empresa. CC OO de EXPAL, que en aquellos momentos contaba con la mayoría absoluta en el Comité de Empresa, se opuso a la propuesta ante el riesgo de la posible pérdida de puestos de

trabajo, dando prioridad a esta cuestión frente al problema moral que significa la producción de artefactos que sirven para matar /20. En abril de 2004 se anunció que la dirección de Unión Española de Explosivos iba a cerrar EXPAL, a causa de un descenso de la producción por falta de pedidos /21. Sin duda, el cierre de una fábrica de armamentos es una buena noticia para la causa de la paz y el desarme, pero no lo es que los trabajadores pierdan el puesto de trabajo. Por lo tanto, a la vista de los resultados, parece bastante claro que hubiera sido mucho mejor luchar en su día por la conversión de EXPAL hacia producción civil que asistir al cierre de la empresa y tener que movilizarse para que se garantice a los trabajadores otras alternativas de empleo. En cualquier caso, convendría un debate sobre estas cuestiones entre los grupos pacifistas y antimilitaristas, los sindicatos y otros movimientos sociales, elaborar propuestas de conversión de las industrias de armas que garanticen los puestos de trabajo y valorar las posibilidades de impulsar la objeción laboral, es a decir, la negativa a realizar trabajos que tengan finalidades bélicas.

Algunas organizaciones pacifistas han cuestionado los proyectos de desarrollo de la industria militar en Cataluña. Cuando la Comissió d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme del Parlament presentó en el 2004 la candidatura de Cataluña para que el consorcio europeo EADS (European Aerospace Defense Space Systems) instalara una factoría de su filial Eurocopter para la fabricación de los helicópteros de combate Tigre, Justicia i Pau de Barcelona envió una carta al presidente de la Generalitat Pasqual Maragall pidiendo la retirada de esta propuesta /22. Por otra parte, el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs ha denunciado la creación de un polo de desarrollo de la industria aeronáutica en Cataluña, impulsado por diversas administraciones (Generalitat, ayuntamientos de Barcelona, Sabadell y Viladecans) y por la asociación BAIE (Barcelona Aeronáutica i de l'Espai), que agrupa a 55 empresas catalanas de este sector y en la que participa la Generalitat, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universitat Politècnica de Catalunya. Bastantes de las empresas vinculadas a BAIE fabrican productos del sector militar (componentes de misiles, cápsulas de proyectiles, piezas para aviones de combate...) /23. Además, el presidente de la Generalitat anunció en septiembre de 2004 la creación de una feria aeroespacial y un Centro Tecnológico de Aeronáutica y el Espacio en Viladecans, en el que participan empresas del sector aeronáutico, las universidades catalanas, la Caixa y la Generalitat /24.

Por último, algunas ONG y centros de investigación para la paz han realizado estudios sobre el accionariado de las industrias militares en España, con el objetivo inicial de saber qué empresas y entidades financieras controlan estas industrias, para posteriormente informar a la opinión pública y presionar para que estas empresas dejen de apoyar la industria de armamentos.

Campañas por la transparencia y el control del comercio de armas

Los principales países exportadores de armas son Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y Gran Bretaña /25. Una parte de los armamentos que producen las industrias militares occidentales es para los ejércitos de la OTAN, pero otra es

venta a gobiernos de diferentes países del mundo, bastantes de ellos en situación de conflicto, que violan los derechos humanos o que padecen situaciones de pobreza (entre los principales países importadores de armamentos están Turquía y Egipto) /26. Es decir, el comercio de armas internacional continúa alimentando los conflictos bélicos y contribuyendo al endeudamiento y empobrecimiento de muchos países. Por esa razón, las ONG y los grupos pacifistas han realizado diversas campañas contra este “mercado de la muerte”.

La Campaña contra el Comerç d' Armes (C3A) se formó en Barcelona en otoño de 1988, impulsada por Justícia i Pau, la Fundació per la Pau y la Coordinadora pel Desarmament i la Desnuclearització Totals, en respuesta al aumento de las exportaciones españolas de armas que se había producido desde 1982. C3A realizó diversas denuncias de la industria y el comercio de armas y elaboró bastantes estudios sobre estas cuestiones /27. En el 2001 se transformó en el Centre d'Estudis per a la Pau J. M. Delàs, integrado en Justícia i Pau. Tanto la C3A como el Centre Delàs han formado parte de ENAAT (European Network Against Arms Trade) /28, una red de grupos con presencia en casi todos los países europeos, que ha realizado diversas acciones coordinadas en contra del comercio de armas.

La campaña “Hay secretos que matan” /29 fue liderada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Intermón y el Centre UNESCO de Catalunya, que asumió la gestión técnica y la coordinación general de la campaña. Esta campaña, que se inició en diciembre de 1994:

- ◆ Denunció la falta de información sobre las exportaciones de armamentos y sus consecuencias destructivas (prolonga y agrava los conflictos armados, acapara recursos económicos de países empobrecidos y endeudados, aumenta el nivel de militarización de muchos países y regiones del mundo, fortalece a gobiernos represivos...).
- ◆ Reclamó una mayor reducción del comercio de armas. Las exportaciones de armas de España eran elevadas: según un informe del Ministerio de Economía las exportaciones de material militar realizadas entre 1991 y 1996 ascendían a un total de 97.610 millones de pesetas. La Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos cuestionó estas cifras, ya que ocultaban las exportaciones de material aeronáutico (aviones de transporte militar), navales (patrulleras), de vehículos (camiones militares), telecomunicaciones y electrónica militar, y cifró las exportaciones españolas de material militar en el período 1991-1996 en un total de 240.000 millones de pesetas /30.
- ◆ Y se marcó como objetivos prioritarios acabar con el secretismo de las exportaciones de armas, conseguir que el gobierno informara periódicamente (trimestralmente) a los parlamentos y a la sociedad sobre las ventas de armamentos (países de destino, productos exportados e importes), como paso previo e indispensable para el control parlamentario y público de esas exportaciones, y la adopción de un Código de Conducta en el que se incluyera que solo podrían ser destinatarios de las armas aquellos gobiernos que respetasen los derechos humanos, no tuvieran

conflictos bélicos internos, no estuvieran implicados en agresiones armadas contra otros países y sus gastos militares no superasen el 4% de su PIB.

Esta última reivindicación era esencial, ya que la mayoría de los receptores de las exportaciones españolas de armas eran países inmersos en conflictos bélicos, con elevados niveles de militarización y/o que no respetaban los derechos humanos (se encarcelaba a los disidentes políticos, se torturaba a los presos, se realizaban ejecuciones extrajudiciales, “desaparecían” personas mientras estaban custodiadas por las fuerzas de seguridad, se dictaban sentencias de muerte...), como Turquía, Marruecos, Tailandia, Chile, Irán, Corea del Sur, Jordania, Angola, Arabia Saudita, Filipinas, Indonesia, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Honduras, India, Mozambique, Myanmar, Papúa-Nueva Guinea, Sudáfrica, Venezuela y Yibuti.

Durante los cuatro años que duró la campaña “Hay secretos que matan” (entre 1995 y finales de 1998) se realizaron diversas actividades: publicación de anuncios y artículos en la prensa; multitud de gestiones y reuniones con los grupos parlamentarios; envío masivo de postales al presidente del Gobierno en las que se exigía la transparencia; envío de miles de faxes al presidente de la Junta Interministerial reguladora del comercio de armamento exigiendo la publicación trimestral de las actas de aprobación de las exportaciones de armas; envío de cartas a los directores y presidentes de los Consejos de Administración de las empresas más importantes del sector, solicitándoles que hicieran públicas sus exportaciones; edición de un póster con una relación de empresas del sector armamentista en España; carta a los partidos políticos solicitándoles que incorporaran en sus programas electorales la transparencia, el control parlamentario del comercio de armamentos y la introducción de un Código de Conducta que concretara los criterios comunes de la UE en esta materia; carta a los diputados para que introdujeran en el debate parlamentario las peticiones de la campaña que habían sido incluidas en los programas electorales de los partidos; envío masivo de cartas y faxes al portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados pidiendo que apoyaran la proposición no de ley sobre la transparencia y el control de las exportaciones de material de defensa; y difusión de un boletín donde se informaba de las actividades, del que se publicaron 180 números.

El Manifiesto por la Transparencia y el Control del Comercio de Armamentos, que fue presentado en una rueda de prensa en diciembre de 1994, fue firmado en los dos años siguientes por unas mil entidades y asociaciones. Asumiendo la propuesta que les hizo la campaña, nueve parlamentos autonómicos /31 aprobaron proposiciones no de ley, resoluciones o declaraciones en las que se instaba al Gobierno a que se hicieran públicos los datos esenciales sobre exportaciones de armas. También aprobaron mociones a favor de la transparencia, el control y el Código de Conducta en el comercio de armas unos 200 ayuntamientos españoles.

La campaña “Hay secretos que matan” incorporó los contenidos de la propuesta de Código de Conducta europeo sobre el comercio de armamentos elaborada por British-American Security and Information Council (BASIC), Saferworld y World Development Mouvement, que fue apoyada, en mayo de 1995, por unos centenares de organi-

zaciones. Desde 1996 varios premios Nobel de la Paz, encabezados por Oscar Arias, promovieron una iniciativa a favor de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara un Código Internacional de Conducta sobre Transferencias de Armas. El éxito de la campaña española por la transparencia y el control de las exportaciones de armamentos contribuyó a que en 1997 y 1998 se desarrollaron campañas similares en otros lugares del mundo (Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia, Gran Bretaña...).

La campaña internacional “Armas bajo control” /32 está impulsada por IANSA (The International Action Network on Small Arms), una red global formada por más de 500 grupos de unos 100 países, entre los que destacan Amnistía Internacional, BASIC, OXFAM, Pax Christi, Christian Aid, International Alert y Saferworld. Entre las actividades desarrolladas por la campaña, que se inició en octubre de 2003, hay que mencionar la iniciativa “Un millón de rostros”, que consistió en la recogida de un millón de firmas y fotografías de personas de 160 países del mundo reivindicando la adopción de un Tratado Internacional que regule el comercio de armas, que se entregaron al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en la Conferencia sobre las armas ligeras que esta institución celebró entre el 26 de junio y el 7 de julio de 2006. Hasta ahora, los gobiernos de cincuenta y dos países, entre ellos España, han manifestado su apoyo a esta iniciativa /33.

Intermón Oxfam y Amnistía Internacional son los promotores de esta campaña en España. Aunque la Unión Europea aprobó en 1998 un Código de Conducta sobre control y transparencia en las exportaciones de armas convencionales, el Gobierno español lo incumple sistemáticamente. En un informe publicado por Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam sobre las exportaciones españolas de material de defensa se denuncia que el 30% de las armas españolas transferidas durante el año 2004 podrían violar el Código de Conducta de la UE, ya que se exportaron a países en conflicto, con graves violaciones de derechos humanos o con problemas de desarrollo (Colombia, Arabia Saudita, Israel, Sudan...)/34. Por estos motivos, las ONG exigen que el gobierno informe semestralmente sobre los productos y servicios exportados a cada país y su importe; que se prohíban las transferencias que violen el Código de Conducta de la UE; y que se apruebe una ley para un control efectivo del comercio de armas.

Las campañas a favor de la transparencia y el control del comercio de armas fueron un factor clave para que se aprobaran algunos códigos de conducta sobre exportación de armas convencionales, como el de Estados Unidos en 1997 y el de la Unión Europea en 1998, y la proposición no de ley acordada por el Congreso de los Diputados en marzo de 1997, en la que instaba al gobierno a incorporar a la legislación española los criterios sobre transparencia y control de las exportaciones de material de defensa aprobados por la UE en 1991 y 1992, a enviar semestralmente los datos de esas exportaciones a las Comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores del Parlamento, y a facilitar a estas comisiones la lista de países que están en situación de conflictividad o militarización o no respetan los derechos humanos, para someterlos a restricciones en cuanto a exportación de material de defensa. Desde la aprobación de esta proposición

no de ley se han publicado varios informes oficiales, que aportan información sobre los países receptores de material de defensa y los valores absolutos de productos vendidos, aunque no informan sobre los productos que se exportan a cada país. Por otra parte, las ONG reclaman corregir algunas deficiencias del Código de Conducta de la UE, para evitar la transferencia de armas a países en conflicto o que no respeten los derechos humanos, tales como el establecimiento de un sistema común de verificación del uso final de las armas una vez exportadas, que las empresas de armas hayan de obtener el permiso de sus gobiernos antes de firmar los contratos de exportación, y el control de los comerciantes de armas /35.

Finalmente, hay que mencionar que en el reciente encuentro de la red ENAAT (Gante, 13 y 14 de mayo de 2006) se planteó la posibilidad de iniciar una campaña europea que denuncie públicamente a las empresas bancarias y las Agencias de Crédito a la Exportación (ACE) que están financiando el comercio de armamentos (actualmente se están desarrollando campañas de este tipo en Italia -“Banche Armate” /36-, Bélgica y Gran Bretaña). Las ACE, en su mayoría de capital público, facilitan las exportaciones comerciales en regiones inestables y lo hacen de forma poco transparente. Por ello, bastantes industrias de armamentos acuden a ellas para que les concedan créditos y les ayuden a exportar sus productos a países que no respetan los derechos humanos. De la ACE de España, que se denomina Compañía Española de Seguros y Créditos a la Exportación, el 50’25% de la cual es de propiedad pública y el 49’75% privada, se tiene constancia de que en diversas ocasiones ha facilitado exportaciones de armas /37.

Enric Prat Carvajal es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia por la Universitat Pompeu Fabra. Es miembro del Centre d’Estudis per a la Pau J. M. Delàs de Justícia i Pau, del Consejo Editorial de la revista *Sin Permiso* y del Consejo Asesor de *VIENTO SUR*.

1/ En las siguientes web de los grupos que impulsan la objeción fiscal se explica detalladamente cómo hacerla, los proyectos solidarios a los que se destina el dinero de la objeción fiscal y las situaciones en las que pueden encontrarse los objetores fiscales después de realizar su declaración de la renta. Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal www.objecciofiscal.org www.justiciaipau.org/siof, Coordinadora d’ONG Solidaries de les comarques gironines i l’Alt Maresme www.solidaries.org/ofiscal, Alternativa Antimilitarista-MOC www.nodo50.org/objeccionfiscal www.nodo50.org/tortuga, Coordinadora Galega pola Obxección Fiscal www.nonaogastomilitar.org.

2/ Conclusiones del Primer Congreso Estatal de Objeción Fiscal, 1989.

3/ Fuente: Stockholm International Peace Research Institute, *SIPRI Yearbook 2005*. www.sipri.org.

4/ Los colectivos que promueven la objeción fiscal consideran que en los gastos militares se deben incluir las siguientes partidas: el presupuesto del Ministerio de Defensa, el presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia, los gastos de defensa incluidos en presupuestos de otros ministerios (Guardia Civil en el Ministerio Interior, Investigación y Desarrollo militar en el Ministerio de Industria, fuerzas armadas en el exterior en el Ministerio de Exteriores), los gastos de las clases pasivas militares, los gastos derivados de las cuotas de participación en la OTAN y la UEO, y la parte proporcional correspondiente a gastos militares de los intereses abonados para sufragar la deuda pública.

5/ Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Elaboración: Pere Ortega. www.justiciaipau.org/centredelas.

6/ www.noalainvestigacionmilitar.org.

7/ Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras, Associació d’Estudiants Progressistes (Catalunya), Aula de Paz y Desarrollo (Burgos), Bibliotecarios por la Paz (Madrid), Casa de la Paz (Sevilla), CGT-CIEMAT (Madrid), CGT-Universidades, Ciutadella contra la Guerra, COA-MOC de Zaragoza, Colectivo Hypatia (Madrid), Colectivo No Violencia y Educación (Madrid), Colectivo Universidad y Compromiso Social (Sevilla), Comisión Mueve (València), Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans, Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias, Coordinadora Uni per la Pau (Catalunya), ESF de Galicia, Barcelona, Girona y Lleida, Físics per al Desenvolupament (Barcelona), Fundació Solidaritat UB (Barcelona), Instituto de la Paz y los Conflictos de Granada, ISF de A Coruña, Málaga, Valencia, Valladolid, Asturias y León, Movimiento Antiglobalización de

León, Movimiento Ciudadano por la Paz de Soria, Oficina de Acción Solidaria Universidade da Coruña, Seminario Galego de Educación para la Paz (Santiago de Compostela), UNED No a la Guerra (Madrid).

8/ Por ejemplo, en España la mayoría del dinero de la investigación militar de 2004 se gastó en programas de desarrollo y fabricación de nuevas armas, como el avión de combate Eurofighter, el avión de transporte militar A400-M, los helicópteros de ataque Tigre, las fragatas F-100 o los carros de combate Leopard I Pizarro.

9/ Estados Unidos destinó unos 50.000 millones de dólares, es decir, las dos terceras partes del total.

10/ La cifra total de investigación militar en España incluye el presupuesto de I+D del Ministerio de Defensa y los anticipos a empresas que facilita el Ministerio de Industria para el diseño y construcción de diversos tipos de armamento.

11/ Fuente: Presupuestos Generales del Estado. Elaboración: Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs. www.justiciaipau.org/centredelas.

12/ Según un informe de la OCDE, España es el segundo país del mundo que más porcentaje del PIB dedica a investigación militar, después de Estados Unidos, y el segundo país que menos porcentaje del PIB destina a la investigación básica. *Boletín de la Objeción Científica*, núm. 7, marzo de 2004.

13/ Fundació per la Pau, nota de prensa, 18 de febrero de 2004; *Boletín de la Objeción Científica*, núm. 7, marzo de 2004.

14/ Universidades de Valladolid, Oviedo, Alacant, Girona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Granada, Autònoma de Madrid, Santiago de Compostela, Barcelona, Lleida y Rovira i Virgili. *Boletín de la Objeción Científica*, núm. 5, julio de 2003.

15/ Universidades de València, Ramon Llull y Pompeu Fabra.

16/ *Boletín de la Objeción Científica*, núm. 8, julio de 2004; Fundació per la Pau, nota de prensa, 5 de julio de 2004.

17/ Campaña "Por la paz: ¡no a la investigación militar!", nota de prensa, 10 de noviembre de 2004. *El País*, 11 de noviembre de 2004.

18/ La industria de defensa en España consta de cuatro sectores industriales básicos, dominados cada uno de ellos por una gran empresa. La mayoría de ellas, que en su día eran públicas, actualmente están privatizadas. En el sector terrestre, que produce armamentos y municiones para el Ejército de Tierra, domina la estadounidense General Dynamics, que compró la empresa Santa Bárbara después de que esta fuera privatizada. El sector naval, que produce para la Armada, sigue estando concentrado en una empresa pública, IZAR, que es el resultado de la unión de Bazán (hoy Navantia) y Astilleros Españoles. El sector aeroespacial, que abastece al Ejército del Aire, está monopolizado con el consorcio europeo European Aerospace Defense Space Systems (Construcción Aeronáutica se integró en ese consorcio y hoy se denomina EADS-CASA), que está casi todo controlado por empresas privadas de Francia, Alemania y Gran Bretaña, contando el Estado español con una participación de tan sólo el 5'6%. La empresa que domina el sector electrónico-informático, que trabaja para los tres ejércitos, es INDRA, que es el producto de la fusión de Inisel y Ceselsa. Las cuatro principales empresas del sector de defensa en España (General Dynamics, Navantia, EADS-CASA e INDRA) concentran el 70% de la facturación y el 80% de la mano de obra.

19/ Informe "Base a base: la militarización del territorio español a vista de satélite (V)". www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=2348.

20/ Colectivo Gasteizkoak, "El movimiento antiarmamentista vasco. Una experiencia en desarrollo", en: Grau, E. y Ibarra, P. (coord.), *Una mirada sobre la red. Anuario movimientos sociales*, Betiko Fundazioa/Icaria, Donostia/Barcelona, pp. 81-84.

21/ Ortega, P. (2004) "El 11-M y Unión Española de Explosivos", *Materiales de Trabajo*, núm. 24, abril de 2004.

22/ *Materiales de Trabajo*, núm. 24, abril de 2004.

23/ Ortega, P. (2004) "La industria militar aeronáutica aterriza a Catalunya", *Illacrua*, núm. 124, noviembre de 2004, pp. 14-16.

24/ *El País*, 5/12/2004.

25/ *SIPRI Yearbook 2004*.

26/ *SIPRI Yearbook 2004*.

27/ Entre ellos el libro que se cita a continuación: Oliveres, A. y Ortega, P. (eds.) (2000) *El ciclo armamentista español. Una panorámica crítica (1989-1999)*. Barcelona: Icaria.

28/ www.enaat.org.

29/ Para una mayor información sobre la campaña "Hay secretos que matan" consultar los siguientes libros de Fisas, V. (1995) *Secretos que matan. Los derechos humanos y la exportación española de armamento*. Barcelona: Icaria. (1998) *El lobby feroz. Las ONG ante el comercio de armas y el desarme*. Barcelona: Icaria.

30/ Fisas, V. (1998), pp. 89-92.

31/ Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid y País Vasco.

32/ www.controlarms.org/es, www.armessotacontrol.org.

33/ *El País*, 26/6/2006.

34/ Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam, *Por una ley para un control efectivo del comercio de armas. Análisis de las Exportaciones Españolas de Armamento 2004*.

35/ Fisas, V. (2000) *Adiós a las armas ligeras. Las armas y la cultura de la violencia*. Barcelona: Icaria, p. 91.

36/ www.banchearmate.it.

37/ Trobada anual de la Xarxa Europea Contra el Comerç d'Armes: el paper de la Banca i les Agències de Crèdit a l'Exportació en el foment del comerç d'armes. www.justiciaipau.org/centredelas.



2.- Movimientos por la paz: el resurgimiento

El movimiento contra la guerra antes y después del 15-F¹

Esther Vivas

El Estado español vivió en el año 2003 las movilizaciones antiguerra más importantes de su historia. Unos cinco millones de personas salieron a la calle el 15 de febrero (15-F) en sesenta ciudades para decir “No a la guerra en Irak”. A nivel internacional, el 15-F significó un paso adelante en la capacidad de coordinación y acción conjunta del movimiento con la celebración de manifestaciones en unas 800 ciudades de todo el mundo. Pero, ¿de dónde surgió el 15-F?, ¿qué ha quedado de todo ello?, ¿qué retos tiene por delante el movimiento antiguerra en la coyuntura actual? El presente artículo intenta dar algunas respuestas a estas preguntas.

Del movimiento antiglobalización al movimiento antiguerra

Las movilizaciones contra la guerra del año 2003 no se pueden entender sin el creciente descontento social que había generado la gestión y el talante autoritario de Aznar después de siete años en el gobierno. Unas políticas marcadas, tanto a nivel interior como exterior, y especialmente en los últimos tres años de mayoría absoluta, por la prepotencia y el menosprecio hacia los movimientos sociales y hacia las distintas fuerzas políticas críticas con su gestión. Esta situación desembocó en un auge de luchas específicas contra las políticas reaccionarias impulsadas por el gobierno del Partido Popular (PP).

A principios del 2003, justo antes de las importantes movilizaciones contra la guerra, el mapa de la protesta contra las políticas antisociales impuestas por el gobierno del PP abarcaba un amplio abanico sectorial y geográfico. Este escenario fue determinante en la explosión del movimiento antiguerra. Las protestas contra la guerra en el Estado español no deben de ser entendidas sólo como el rechazo al conflicto bélico sino también y sobretodo como un rechazo popular a la política y al talante del gobierno de Aznar. Una prepotencia que tuvo su máxima expresión en el apoyo gubernamental a la guerra en Irak con un 90% de la opinión pública en contra².

¹/ El cierre del presente artículo a 03/08/2006 dificulta la actualización de los datos referentes a la evolución de la guerra en el Líbano y la crisis en los territorios palestinos.

²/ El barómetro de febrero del 2003 del Centro de Informaciones Sociológicas (CIS) indicaba que un 90,8% de los encuestados estaba en contra de la guerra.

Las protestas antiguerra no pueden explicarse sin el auge del movimiento antiglobalización. Desde principios del 2000, a raíz de Seattle, se llevaron a cabo distintas campañas que tuvieron en su punto de mira la lucha contra la globalización neoliberal y sus artífices: el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC)... Estas protestas permitieron fortalecer el tejido social ya existente y constituir plataformas unitarias contra la globalización neoliberal en centenares de municipios que, posteriormente, fueron espacios de trabajo y coordinación claves para la organización de las marchas antiguerra. Un ciclo de protesta fortalecedor de las luchas tanto a nivel global como estatal y local que desembocó en una re-movilización social, en especial entre amplios sectores juveniles, y que sienta las claves para entender las importantes movilizaciones del 2003 y 2004 contra la guerra en Irak.

La constitución del movimiento antiguerra en el Estado español respondió principalmente a la confluencia de dos sectores: el movimiento pacifista histórico, artífice de las protestas contra la OTAN en los 80 y contra el servicio militar obligatorio y a favor de la insumisión en los 90 ³; y el movimiento antiglobalización, que actuó de fuerza motriz. A finales del 2002, después de la celebración del 1º Foro Social Europeo (FSE) en Florencia, donde se aprobó el 15 de febrero como jornada de acción global contra la guerra, se produjo la confluencia entre ambos sectores.

La centralidad de la guerra

La incorporación de la lucha contra la guerra a la agenda del movimiento antiglobalización no estuvo exenta de debates sobre su centralidad en el sí del movimiento. Algunos, como Bernard Cassen, dirigente de ATTAC Francia, cuestionaban la vinculación de la guerra con las políticas neoliberales, afirmando, de forma absurda, la desconexión entre una y otra: *“Con guerra o paz, los problemas de la globalización eran esencialmente los mismos el 10 de septiembre que el 12 (...) Porque estalle o no la guerra, los B-52 y las fuerzas especiales no cambiarán ni la pobreza de Brasil ni el hambre de Argentina”* ⁴.

En el otro extremo, estuvieron quienes, como Alex Callinicos, dirigente del Socialist Workers Party británico, plantearon la centralidad casi exclusiva de la lucha contra la guerra, infravalorando otras cuestiones como la denuncia de la profundización de las políticas neoliberales en Europa y el Tratado de Constitución Europea. El grueso del movimiento, no obstante, acabó integrando la lucha contra la guerra imperialista como parte del combate contra la globalización neoliberal, dándole gran centralidad estratégica sin por ello reducir su amplia agenda temática a *“un sólo asunto”*. La manifestación final del 1.º FSE en Florencia bajo el lema: *“Contra la guerra y el neoliberalismo”* resume bien este enfoque.

³/ Para una evolución más detallada del movimiento pacifista, principalmente en Cataluña, ver: Prat, E. (2004) *“Sorgiment i desenvolupament del moviment per la pau a Catalunya. 1981-1986”* en Prat, E. (coord.) *Els moviments socials a la Catalunya contemporània*. Publicacions i edicions UB, Barcelona.

⁴/ Cassen, B. (2003) *“ATTAC a l'ataque”* en *New Left Review*, nº 19, 88-106.

Las protestas del 15-F sacaron a la calle a entre ocho y trece millones de personas en unas 800 ciudades de todo el mundo para denunciar la inminente invasión de Irak. Las manifestaciones más importantes tuvieron lugar en los países con gobiernos favorables a la guerra. A destacar los tres millones de manifestantes en Roma, los dos de Londres o el millón y medio en Madrid y Barcelona respectivamente, así como las marchas en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, entre otras 150 ciudades estadounidenses. El 15-F fue la protesta antiguerra más grande de la historia y demostró la capacidad de los movimientos sociales para llevar a cabo acciones coordinadas en todo el planeta con un fuerte impacto mediático, político y social. Unas movilizaciones tan masivas que llevaron al periódico *The New York Times* (17/02/05) a afirmar que “*existen dos superpotencias en el planeta, los Estados Unidos y la opinión pública mundial*”. Una acción que sin el trabajo previo de coordinación de los movimientos sociales a partir de la organización y del encuentro en los foros sociales no hubiera sido posible.

El 15-F y el 11-M

En el Estado español, cinco millones de personas (más del 10% de la población) se manifestaron en 55 ciudades para expresar su rechazo al conflicto bélico. Acciones, manifestaciones, ocupaciones y centenares de miles de actividades se sucedieron de febrero a abril del 2003 en una protesta masiva contra la política del presidente José M. Aznar y su apoyo incondicional a la guerra en Irak impulsada por George W. Bush. En Cataluña, las movilizaciones llegaron a ser tan numerosas que incluso el ex-presidente George Bush padre afirmó que la política exterior de EE UU no estaría dictada por las protestas en Barcelona.

¿Pero de qué sirvieron estas movilizaciones? A pesar del desencanto por la invasión de Irak, la movilización internacional contra la guerra forzó a EE UU a tener que dar más argumentos de lo habitual para justificar su voluntad de atacar a Irak y el precio político que el gobierno de George W. Bush y sus aliados tuvieron que pagar fue muy superior al previsto. A la vez, el conflicto generó brechas importantes en el consenso, que hasta el momento había existido, en la estrategia de guerra global contra el terrorismo, que había legitimado la intervención militar de EE UU en Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre (11-S).

Pero las consecuencias de la movilización antiguerra en el Estado español fueron, especialmente, evidentes tras los atentados del 11 de marzo del 2004 (11-M) en Madrid y la reacción popular a las mentiras del gobierno de Aznar. Las impresionantes movilizaciones que acabaron con la derrota del PP en las urnas no pueden explicarse sin el ciclo de movilizaciones previo que había fortalecido un importante tejido social crítico con la gestión del PP y, evidentemente, sin el papel de las plataformas antiguerra capaces de generar un consenso social muy amplio contra la participación española en la guerra en Irak.

Esta acumulación de elementos fue clave en el desenlace de la crisis de marzo del 2004 y en la capacidad de los movimientos sociales para presionar al gobierno del PP, poner de relieve sus mentiras y mostrar a la opinión pública la verdad de los hechos.

Tras la victoria del PSOE

Después de la victoria del PSOE el 14 de marzo del 2004, Zapatero llevó a cabo algunas reformas destinadas a contentar parte de su electorado y a marcar diferencias respecto al gobierno de Aznar. La retirada de las tropas de Irak aprobada, pocos días después de ganar las elecciones, fue buena prueba de ello y significó una victoria importante para el movimiento antiguerra. Pero en tan sólo unos meses, Zapatero reforzó la presencia militar en Afganistán y defendió, en el marco del Tratado de Constitución Europea, la necesidad de un ejército europeo común, tan sólo por citar algunos ejemplos que ponen de relieve que la retirada de las tropas debe de ser entendida en clave partidista, de desmarque de las políticas del gobierno anterior y como un guiño a una opinión pública contraria a la ocupación en Irak. En definitiva, la política del gobierno de ZP se ha caracterizado por una orientación social liberal y su estrategia en materia de defensa, a pesar del maquillaje y los juegos tácticos, no dista respecto a la del Partido Popular, como afirmaba *El País* (30/05/05), en motivo de la reforma de las fuerzas armadas: “*Se vislumbra un ejército con más medios y más presupuesto, diferente al tono pacifista con el que arrancó el Gobierno*”.

El cambio de coyuntura política, con la subida del PSOE al poder, afectó, enormemente, a la capacidad de movilización social generando un importante reflujo de la protesta. El movimiento antiguerra no quedó al margen de esta tendencia, especialmente, cuando su demanda central, la retirada inmediata de las tropas de Irak, fue cumplida pocos meses después de la victoria de Zapatero. Pero a pesar de las dificultades, el movimiento ha seguido trabajando para poner de relieve tanto las contradicciones del gobierno de ZP, en materia exterior y de defensa, como las gravísimas consecuencias de la ocupación en Irak y la crisis de supervivencia del pueblo palestino frente a los ataques sistemáticos del gobierno de Israel. Un conflicto que con su reciente propagación al Líbano, con los ataques israelíes sobre población libanesa y el consiguiente número de muertes, heridos y desplazados, ha visualizado de nuevo la capacidad de convocatoria del movimiento antiguerra que, aunque limitada, ha reunido a miles de personas en varias llamadas a la movilización, especialmente en Barcelona y Madrid. Aún y así debemos de señalar que la percepción pública de un gobierno español no alineado con George W. Bush dificulta la de ya por sí difícil tarea de protesta en un contexto adverso de desmovilización.

A nivel internacional, mantener el *tempo* de la movilización tampoco ha resultado fácil a pesar de los esfuerzos realizados para llevar a cabo una coordinación del movimiento antiguerra después del 15-F. Una coordinación que se ha realizado a partir de reuniones específicas de los colectivos contra la guerra, entre las que debemos destacar la conferencia en Yakarta (Indonesia) en mayo del 2003 y la conferencia en Beirut (Líbano) en septiembre del 2004. En Yakarta, pocos meses después del inicio de la guerra, varias coaliciones y organizaciones de 26 países de Asia, Europa, Austra-

lia, África, América Latina y Norteamérica se reunieron con el fin de evaluar la coyuntura política y establecer un plan de acción. Un encuentro, especialmente, importante porque estableció un amplio consenso en el movimiento de retirada inmediata de las fuerzas extranjeras de en Irak y el fin de la ocupación de Palestina.

Pero aún más numerosa resultó ser la conferencia en Beirut, del 17 al 19 de septiembre del 2004, con la participación de organizaciones, redes y coaliciones de 43 países de todo el mundo, con una importante presencia de organizaciones iraquíes y palestinas. El objetivo de la conferencia consistía en reforzar el movimiento antiguerra a través del debate y el desarrollo de estrategias y campañas comunes y, sobre todo, profundizar las relaciones con los movimientos del mundo árabe, de aquí la organización de la conferencia en el Líbano. Para Walden Bello, el significado del encuentro de Beirut era “*pasar de la espontaneidad a unas acciones más coordinadas y organizadas*” como la única vía posible para hacer frente al poder militar de EE UU /5.

Al margen de las conferencias de Yakarta y Beirut, el movimiento antiguerra aprovechó la celebración de los foros sociales mundiales y regionales, así como las movilizaciones contra el G8 y la OMC, para llevar a cabo reuniones de trabajo e ir avanzando en la definición de un plan de acción vinculado a la coyuntura internacional. Así y de un modo continuado las organizaciones antiguerra mantienen un espacio de encuentro permanente y de coordinación coincidiendo con estos eventos.

Aparte, debemos de señalar la celebración de las conferencias antiguerra de El Cairo, un encuentro anual, que se viene celebrando desde diciembre del 2002 en la capital de Egipto, y que tiene como objetivo fomentar el encuentro entre organizaciones de carácter islámico, socialista y nacionalista del mundo árabe con grupos antiguerra de otros países. Un encuentro con un peso muy importante de las organizaciones árabes y con un impacto relativo a nivel internacional.

Días de acción global y tribunal popular

Después de las multitudinarias movilizaciones del 15-F, el calendario internacional de protesta antiguerra se ha centrado en la convocatoria de jornadas de acción global alrededor del 20 de marzo, coincidiendo con el aniversario del inicio de la guerra en Irak. Unas movilizaciones que, en la medida que el conflicto y la ocupación perduraba, han tenido cada vez más dificultades para mantener el tempo de la protesta y año tras año la capacidad de convocatoria se ha ido reduciendo. En el 2004, se estableció el día 20 de marzo como jornada de protesta a nivel internacional, en el primer aniversario del comienzo de la guerra. Más de 375 marchas se llevaron a cabo en todo el mundo, sumando un total de más de un millón de manifestantes (*El Periódico*, 21/03/04). En el Estado español se celebraron unas 21 manifestaciones en diversas ciudades, que estuvieron precedidas por actos de protesta coincidiendo con el 15-F y las manifestaciones por los atentados del 11M /6.

5/ Bello, W. (2004) *Encuentro internacional del movimiento antiguerra en Beirut* (entrevista realizada por Esther Vivas) en <http://www.espacioalternativo.org>.

6/ Gordillo, J.L. (2005) “Movimiento pacifista y antimilitarista” en Grau, E. y Ibarra, P. *La política en la red. Anuario de movimientos sociales*. Icaria editorial, Barcelona.

Un año más tarde, en el 2005, se aprobaron los días 19 y 20 de marzo como jornadas de acción global, y unos cuarenta países en todo el mundo llamaron a la movilización en esta fecha. Las protestas más significativas tuvieron lugar en Estados Unidos, donde se llevaron a cabo 314 manifestaciones en distintas ciudades. En el Estado español, se celebraron manifestaciones y concentraciones en algunas ciudades, aunque con poca participación.

Otra de las acciones más importantes a escala global fue la organización del Tribunal Internacional sobre Irak, que tuvo lugar del 24 al 26 de junio del 2005 en Estambul, con el objetivo de denunciar los crímenes de guerra y exigir justicia para la población iraquí ⁷. El Tribunal contó con veinte sesiones previas en distintas ciudades como Bruselas, Hiroshima, Barcelona, Londres, Mumbai, Nueva York, Seul, Túnez, entre otras. La sesión en Barcelona tuvo lugar del 16 al 19 de mayo del 2005 y fue organizada por la Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq (PASI) y la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak (CEOSI), con el apoyo de la Plataforma Aturem la Guerra.

En el tercer aniversario del inicio de la guerra, en el 2006, las manifestaciones de protesta fueron convocadas para el 18 y 19 de marzo con la mirada puesta en la retirada de las tropas de Irak y Palestina, el cierre de la base-prisión de Guantánamo y las amenazas a Irán. Varias ciudades alrededor del mundo organizaron marchas de protesta, entre las que cabe destacar como las más numerosas las de Londres, con unos ochenta mil participantes, y las de Estados Unidos, con la organización de unos 600 eventos en cincuenta estados.

Los recientes ataques al Líbano por parte del gobierno israelí han generado nuevas convocatorias de movilización en apoyo al pueblo libanés y de rechazo al conflicto bélico, aunque con una débil coordinación entre sí. De este modo, de mediados a finales de julio varias manifestaciones fueron convocadas en capitales como Londres, París, Roma, Nueva York, México DF, Sydney, entre otras.

En el corazón de la bestia

Mención aparte recibe la situación del movimiento en los Estados Unidos, en *el corazón de la bestia*, donde las mentiras para justificar la guerra, las torturas en la prisión de Abu Ghraib, los casos de espionaje relacionados con el conflicto, los más de dos mil soldados muertos y los costos de la guerra han acabado por deteriorar la credibilidad del presidente George W. Bush, que en mayo del 2006, llegó a su índice más bajo de popularidad desde que entró en la Casa Blanca: un 31%, según los sondeos de *The New York Times* y de *USA Today*. Según estas fuentes, un 61% de los encuestados consideraba un error haberse embarcado en la guerra, frente al 53% que pensaba lo mismo tres meses antes.

En este contexto, y aparte de las múltiples manifestaciones contra la guerra que se han celebrado por todo el país, cabe destacar la protesta llevada a cabo por Cindy Sheenan, madre de un soldado muerto en Irak, que el 6 de agosto del 2005,

⁷ Más información en <http://www.worldtribunal.org>.

acampó frente al rancho Crawford (Texas), donde George W. Bush pasaba sus vacaciones, decidida a que el presidente la recibiera y le respondiera al por qué de la guerra en Irak y para cuando el regreso de las tropas. La acampada tuvo un importante eco mediático y consiguió la solidaridad de otros familiares de soldados, de veteranos y de colectivos antiguerra. Una iniciativa que resultó ser un revulsivo para el movimiento antiguerra estadounidense, el cual parece ir adquiriendo más fuerza, aunque aún débil, a medida que perdura el conflicto y se agudizan las contradicciones en política interna a causa de la guerra y la ocupación.

Retos y perspectivas

Pero en el contexto actual y tras los recientes acontecimientos en Oriente Medio con la masacre del pueblo palestino y libanés por parte del gobierno israelí, ¿cuáles deben de ser los retos del movimiento antiguerra? En primer lugar, es fundamental denunciar la estrategia impulsada por el gobierno Olmert-Peretz-Peres, que bajo la bandera de la “guerra global contra el terrorismo” lleva a cabo el exterminio del pueblo de Palestina. Una estrategia que sólo en el transcurso del mes de julio ha provocado la muerte de más de 170 palestinos y miles de heridos bajo fuego israelí, un tercio del parlamento encarcelado, y el bombardeo sistemático de la franja de Gaza. Por no hablar de los sueldos de políticos y de funcionarios congelados desde el mes de enero y de tasas de paro que suman un 70% de la población activa /8. ¿Hasta cuando?

Un conflicto que ahora desplaza su centro de gravedad al Líbano, asesinando a centenares de civiles la mayoría mujeres, niñas y niños, provocando miles de desplazados y acabando con las infraestructuras del país. Unos ataques que están generando una catástrofe humanitaria y ecológica /9 de gran envergadura y que dibujan un escenario de guerra de larga duración y que extienden el conflicto a toda la región de Oriente Medio. Una masacre llevada a cabo en nombre de la “defensa preventiva”, bajo la bendición del gobierno estadounidense de George W. Bush y del británico Tony Blair y con el silencio de la Unión Europea y las Naciones Unidas. El movimiento antiguerra debe de exigir el cese inmediato de los ataques y la investigación de responsabilidades por los crímenes de guerra cometidos.

En relación a Irak, las consignas del movimiento deben de ser claras y firmes: retirada inmediata de todas las tropas de ocupación de Irak y de la región. Como señala Gilbert Achcar y Stephen Shalom /10, el llamado: “*Tropas fuera ahora*”, que en su momento fue el eslogan principal del movimiento contra la guerra en Vietnam, debe de ser recuperado por parte del movimiento antiguerra en EE UU. Esta estrategia es la que permitirá contrarrestar con más eficacia los intereses imperialista de Estados Unidos en Oriente Medio y aglutinar en su propio país, bajo una misma demanda, a sectores muy amplios del movimiento contra la guerra, desde aquellos

8 Para más información sobre el conflicto en Palestina ver crónicas de Laura Camargo en <http://www.espacioalternativo.org>.

9/ Los bombardeos israelíes sobre depósitos de combustible en la subestación de Yiyeh, al sur del Líbano, el 27 de julio, causaron un vertido de 15.000 toneladas de gasóleo al mar.

10/ Achcar, G. y Shalom, S.R. (2006) *La posición de la “reorganización estratégica” frente a los partidarios del “out now”* en <http://www.vientosur.info>.

que se preocupan por el futuro de los soldados norteamericanos hasta quienes exigen la soberanía del pueblo iraquí. Frente a llamadas, por parte de sectores demócratas en EE UU, a una “salida responsable” de Irak y, por lo tanto, a una “reorganización estratégica” en la región, que no renunciaría al control de los recursos petroleros y que en todo caso intentaría una reducción de las bajas de soldados sustituyendo las tropas terrestres por tropas de aviación, el movimiento antiguerra debe de mantenerse unido bajo la consigna “*Tropas fuera ahora*”. La retirada de las tropas estadounidenses y de las fuerzas de la coalición debe de implicar también el fin del control económico, el pago de reparaciones y la apertura de investigaciones por los crímenes de guerra causados a la población iraquí.

El movimiento antiguerra debe dar su total apoyo al pueblo de Irak, quien está en su derecho legítimo para resistir a la ocupación. Frente a la dominación norteamericana no sólo encontramos una resistencia militar, televisada día a día por los grandes medios, sino que existe también una resistencia política, más amplia que la militar, e incluso encontramos a una resistencia mucho más extensa, la civil, integrada por ciudadanos de a pie que niegan, día a día, la legitimidad de la ocupación /11. Es en este contexto donde la solidaridad con el pueblo de Irak y el establecimiento de lazos y conexiones con los movimientos contra la ocupación estadounidense en Oriente Medio es hoy más necesaria que nunca.

Los medios de comunicación, con su estrategia de mostrar una sola cara de la ocupación, con imágenes de actos de barbarie de la insurgencia y el silenciamiento de los crímenes de las fuerzas de ocupación, no han contribuido a la creación de un sentimiento antiguerra como durante la guerra de Vietnam. Entonces, los *media*, con la transmisión de imágenes del sufrimiento del pueblo vietnamita, contribuyeron al auge del movimiento contra la guerra. En esta ocasión, el propio gobierno estadounidense se ha encargado de censurar las imágenes que pudieran “herir la sensibilidad” de sus conciudadanos, como las de los féretros y los funerales de los soldados caídos en combate. Estos elementos, junto con la dificultad por entender el laberinto de la resistencia iraquí y la situación en Oriente Medio, han dificultado una respuesta continuada en el tiempo contra la ocupación, al hilo de las manifestaciones del 15 de febrero del 2003.

A nivel internacional es imprescindible continuar con la coordinación del movimiento antiguerra y los llamados a la movilización. Pero más allá de los días de acción global contra la guerra, y como sugiere Walden Bello /12, es necesario avanzar hacia otras formas de protesta que presionen a los respectivos gobiernos implicados en la ocupación y en el conflicto en Oriente Medio. La estrategia de desobediencia civil, el boicot a productos israelíes y estadounidenses, la denuncia de las bases norteamericanas y la organización de acciones y marchas para exigir su cierre son otras formas de protesta que nos deben de permitir mantener un cierto nivel de movilización. Es aquí donde el movimiento antiguerra en Gran Bretaña tiene un papel funda-

11/ Bello, W. (2005) *Iraq, the US and the challenges to the global peace movement* en <http://www.tni.org>.

12/ Bello, W. (2005) *Op. Cit.*

mental, ya que su gobierno es el principal valedor de EE UU en la ocupación iraquí y la invasión del Líbano. Por ello, la movilización en este país es clave a la hora de presionar tanto a su propia administración, como indirectamente a la estadounidense, y exigir su retirada inmediata de Irak y el cese de hostilidades en la región.

Un movimiento necesario

Pero, en los últimos meses, otro escándalo se ha destapado en la guerra sucia contra el terrorismo de George W. Bush: los secuestros y los vuelos secretos de la CIA. Después de las denuncias de Amnistía Internacional sobre secuestros y entregas extrajudiciales de detenidos, ahora el informe de la comisión temporal del Parlamento Europeo que investiga el caso avala estas denuncias (*El País*, 16/06/06). Según las investigaciones, diez aeropuertos españoles recibieron 69 escalas de la CIA, la mayoría entre el 2003 y 2004, y cuatro de estos vuelos pasaron por la base-prisión de Guantánamo, a la vez que se registraron seis secuestros en suelo europeo de ciudadanos trasladados después en aviones a países terceros. El gobierno de Zapatero, que levantó la bandera “antiguerra” en la contienda electoral del 2004 y que defiende la llamada “Alianza de civilizaciones” como alternativa al unilateralismo estadounidense, no se pronunció frente a los primeros cuestionamientos de gobiernos europeos acerca de los vuelos secretos /13 y posteriormente restó valor al informe del Parlamento Europeo, aludiendo a una falta de información contrastada (*El País*, 16/06/06). Ante estas situaciones, la necesidad de un movimiento antiguerra con capacidad de reacción y denuncia es fundamental para hacer frente a las agresiones sistemáticas de la guerra global contra el terrorismo.

Del mismo modo, la base-prisión norteamericana de Guantánamo en Cuba, donde permanecen en el limbo legal desde hace cuatro años (sin juicio ni acusación formal en la mayoría de los casos) cerca de 460 hombres por ser sospechosos de tener lazos con Al Qaeda y los talibanes es otra de las vergüenzas de esta estrategia de guerra global. Las presiones de la opinión pública internacional, especialmente en EE UU, aunque débiles, parece que van haciendo mella: en la cumbre de la Unión Europea-Estados Unidos, en junio del 2006 en Viena, George W. Bush oficializó públicamente su propósito de clausurar el centro de detención de Guantánamo. Pero la más reciente sentencia del Tribunal Supremo de EE UU, del 29 de junio del 2006, declarando ilegales los tribunales militares especiales con los que se pretendía juzgar a los presos de Guantánamo, significa un nuevo varapalo judicial y político para el presidente estadounidense y un punto a favor en la lucha para conseguir el cierre de Guantánamo.

El cerco de Washington a Teherán para frenar la política nuclear iraní parece apuntar a un nuevo episodio de la guerra preventiva. Según informaciones de *The Washington Post*, de principios de abril del 2006, basándose en declaraciones de altos cargos de la administración, “se consideraba la posibilidad de lanzar ataques selectivos contra Irán, como parte de una estrategia de diplomacia coercitiva más

13/ Montoya, R. (2006) “Los vuelos de la CIA y el gobierno Zapatero” en *VIENTO SUR*, n° 86, 13-20.

amplia“ (*El País*, 29/04/06). Una amenaza que George W. Bush ha extendido a Siria, acusando a ambos gobiernos de apoyar a redes terroristas. El movimiento antiguerra deberá de estar alerta a la evolución de los acontecimientos.

A nivel del Estado español, la retirada de las tropas de Irak dejó al movimiento antiguerra sin un objetivo específico y la política de ZP le restó apoyo social y mediático. A pesar de la estrategia del gobierno de maquillar su política de defensa y de exterior, como alternativa al unilateralismo de Washington, la realidad nos muestra todo lo contrario. Sólo es necesario observar la postura del gobierno frente a los vuelos secretos de la CIA en territorio español: silencio; o el aumento de las tropas en Afganistán, Haití y el Congo; o la previsión de aumento del presupuesto de defensa y la revitalización del ejército y las fuerzas armadas; o a la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional que legitima las funciones que la Constitución atribuye al ejército, y que incluye la “defensa de la integridad territorial y el orden constitucional”, por citar algunos ejemplos.

En este contexto, y a pesar de la dificultad por trascender el muro mediático, es fundamental para el movimiento antiguerra: en primer lugar, poner de relieve las contradicciones en política exterior y de defensa del gobierno ZP y ejercer un pacifismo crítico y combativo; en segundo lugar, reforzar las alianzas con otros actores sociales y hacer de la lucha contra la guerra y el militarismo un elemento clave en el combate contra la globalización neoliberal; en tercer lugar, mantener una actividad constante, en cuestiones como la denuncia de la ocupación de Irak, Palestina y la reciente guerra en el Líbano; y finalmente poner de relieve los objetivos ocultos de la estrategia de George W. Bush en Oriente Medio, con el silencio y la indiferencia de la comunidad internacional, y que está causando centenares de civiles muertos en nombre de la “guerra global contra el terrorismo”.

Esther Vivas es militante de Revolta Global. Forma parte de la Redacción de *VIENTO SUR*.



3.- Movimientos por la paz: el resurgimiento

Balance del gobierno Zapatero en el ámbito de paz, defensa y seguridad

Jordi Armadans

Han pasado ya más de dos años del nuevo gobierno socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. El presente artículo propone ofrecer un modesto y, por fuerza, limitado balance sobre lo que ha hecho el nuevo gobierno en el ámbito de la política de paz, defensa y seguridad.

A nadie se le escapa que el gobierno de Zapatero tiene una especial relación con los temas de paz y seguridad. Sin duda, su llegada al poder tiene un claro vínculo con la tensión generada por la decisión del anterior gobierno del Partido Popular (PP), presidido por José María Aznar, de liderar una guerra que contaba con un escaso apoyo ciudadano, social, intelectual, político e, incluso, gubernamental.

Las manifestaciones masivas en contra de la intervención militar vividas en todo el Estado español certificaron la escisión definitiva entre un gobierno cada vez más autista y autoritario y una opinión pública que, a través de varias movilizaciones sociales, había ido tomando conciencia crítica y expresaba cada vez más un fuerte rechazo.

El empeño de Aznar por liderar la guerra provocó un divorcio significativo entre ciudadanía y gobierno. Divorcio que, con los graves atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y el patético y burdo intento de manipulación informativa del gobierno, llegó a sus máximos.

Teniendo en cuenta esta fuerte conexión, parece razonable preguntarse por el impacto de la acción del gobierno en esta materia. Obviamente, no puedo ser exhaustivo. Me centraré en algunos aspectos que, a mi entender, considero cruciales y significativos.

Creo que podemos avanzar que el gobierno Zapatero ha impulsado, por un lado, nuevas líneas en el ámbito de la política exterior que han intentado canalizar e impulsar ideas y propuestas más cercanas a la concepción de seguridad humana; por el otro, ha continuado desarrollando una política de defensa claramente continuista. Podríamos decir, pues, que el nuevo gobierno ha pretendido abrir nuevos espacios en seguridad sin transformar ni redimensionar la defensa tradicional. Una combinación, ciertamente, compleja.

Política de Defensa

Vamos a analizar algunos aspectos de esa política de seguridad, a partir de los principios y actuaciones que el Gobierno ha desarrollado en el ámbito de la defensa y de la política exterior.

Más allá de declaraciones, decisiones, etc., la Directiva de Defensa Nacional (DDN), aprobada el 30 de diciembre de 2004, es el instrumento clave que enmarca y determina las opciones a desarrollar durante la legislatura. La verdad, no deja de ser descorazonador que un instrumento tan clave y determinante de la política de defensa sea tan poco conocido y, en general, tan poco debatido social y políticamente. Pero así es.

Como eje fundamental, de las premisas establecidas en la DDN se han alimentado dos instrumentos legislativos: la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (LODN) y la Ley de Tropa y Marinería. Vamos a analizar este entramado, así como algunas actuaciones.

Principios generales y marco de actuación. La DDN *“es el documento en el cual el Gobierno define los objetivos de la defensa nacional y expone las líneas generales de actuación para alcanzarlos”*. La DDN *“con un horizonte temporal de la legislatura, constituye la base del planeamiento de la defensa, describe el escenario estratégico y la defensa de España, así como la respuesta española a los riesgos descritos”*.

En la DDN se cuelean algunas concepciones de la seguridad más acordes con los nuevos tiempos y perspectivas. Así, se estipula que, con respecto a las anteriores y primeras directivas de la democracia, *“hemos pasado de una concepción tradicional, vinculada al ámbito territorial de soberanía -con planteamiento casi exclusivamente militar- a otra más amplia de seguridad compartida y defensa colectiva con nuestros socios y aliados, en la cual la sociedad en su conjunto debe estar involucrada”*.

Pero algunas de esas premisas y frases bonitas conviven con el continuismo más explícito en otras vertientes de la política de defensa. En algunos casos, claramente antiguos: así, también se fija que una de las líneas de fondo de actuación para la legislatura será la *“consolidación del papel de las Fuerzas Armadas como elemento relevante de la acción exterior del Estado”*. Un principio francamente curioso que casa mal con la voluntad de contribuir a crear un nuevo concepto y práctica de seguridad.

Por lo que respecta al análisis estratégico internacional, la DDN asume que los atentados terroristas masivos sufridos los últimos años ponen de relieve que *“la lucha contra estas nuevas amenazas, muy en particular contra el terrorismo, es clave en la estrategia de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa”*. Además, ante los retos que plantea ese nuevo terrorismo internacional, de forma razonablemente lúcida, en la DDN se asume que *“frente a los nuevos riesgos y amenazas, la superioridad militar tradicional no constituye un factor de disuasión eficaz ni garantiza más seguridad automáticamente. Tampoco asegura una prevención efectiva contra ataques terroristas ni evita el riesgo de proliferación de armas de destrucción masiva”*.

Por lo que respecta a áreas geográficas, en la DDN se afirma que *“en cuestiones de seguridad y defensa, Europa es nuestra área de interés prioritario”*. El gobierno mantiene que la apuesta por Europa no debe hacer incompatible una relación

transatlántica “robusta y equilibrada”. También se especifica que mantiene una “relación estrecha y consolidada con los Estados Unidos; una relación que debe estar articulada sobre la lealtad, el diálogo, la confianza y el respeto recíprocos”. Está claro, pues, que ante las disensiones europeas provocadas por la valoración ante la guerra de Irak (y que llevaron a unos a defender la unidad europea y, otros a privilegiar un vínculo transatlántico), el gobierno español opta por, sin dejar de lado la OTAN, la Unión Europea como prioridad.

También se afirma que el Mediterráneo e Iberoamérica deben ser áreas preferentes de atención por parte de España.

Por su parte, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (LODN), aprobada el 17 de noviembre, coexisten o han coexistido varias contradicciones conceptuales.

En el texto final de la Ley, se afirma que “Hoy, además de un derecho básico y una necesidad de las personas y las sociedades, la seguridad es un reto, y lograr que sea efectiva requiere la concurrencia de la Defensa como un de los medios necesarios para alcanzarla, junto a la defensa de los derechos humanos, la lucha por la erradicación de la pobreza y la cooperación al desarrollo, que también contribuyen a este fin”. Pues bien, el anteproyecto de la Ley, la propuesta inicial del Gobierno vaya, decía textualmente lo siguiente: “Hoy, además de un derecho básico y una necesidad de las personas y las sociedades, la seguridad es un reto, y lograr que sea efectiva requiere la concurrencia de la Defensa como medio fundamental para alcanzarla” (el subrayado es mío, claro está). ¡Para ser un Gobierno que se considera cercano a las tesis y concepciones de la Seguridad Humana, no está mal lo rancio, anticuado y conceptualmente superado que encierra tal afirmación! En cualquier caso, gracias a las enmiendas que varias ONG de paz, entre ellas la Fundació per la Pau y Justícia i Pau de Barcelona, enviaron a los grupos parlamentarios, esta redacción fue claramente mejorada. No es que no me alegre de la capacidad de incidencia de dos modestas ONG de ámbito catalán: más bien me escandaliza que un texto tan importante del gobierno pueda presentarse inicialmente bajo un redactado tan trasnochado.

Participación en intervenciones militares. La DDN, como ya había pasado con las anteriores, afirma que además de defender los intereses de España, la política de defensa debe incorporar como propia la implicación en un proyecto común que puede suponer la realización efectiva de intervenciones armadas que no respondan necesariamente o sólo a intereses estatales.

Lo más significativo de la DDN aprobada por el actual gobierno, y acorde con los debates acaecidos sobre la intervención militar en Irak, es el establecimiento de requisitos y condiciones para poder permitir su efectiva realización.

De forma general, la DDN determina que “la acción exterior española debe basarse en el respeto escrupuloso a la legalidad internacional como medio para la resolución de conflictos; en el reconocimiento de las Naciones Unidas como organización responsable de velar por la paz y la seguridad internacionales, y hará hincapié en una utilización más eficaz de todos los instrumentos políticos, diplomáticos, económicos y

sociales para el arreglo pacífico de controversias y la prevención de conflictos, de modo que la acción militar sólo se contemple como un último recurso”.

A nivel más concreto, la DDN fija que toda posible intervención del ejército fuera de las fronteras estatales deberá cumplir dos condiciones: que exista una decisión previa de Naciones Unidas y que se acuerde con la participación activa del Parlamento.

En la LODN todo ello se lleva a mayor concreción. De hecho, el debate sobre este aspecto es lo que tuvo un cierto impacto mediático y conllevó que la Ley fuera conocida más allá del círculo de interesados en los temas de defensa y seguridad.

Por lo que respecta al papel del parlamento, la ley fija que *“para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados”.* Sin duda, una buena noticia que puede ayudar a evitar situaciones tan absurdas y dañinas para la calidad democrática como la de ver a un presidente, prácticamente solo, defendiendo una guerra que ni la sociedad, ni la clase política, ni los medios de comunicación, ni los líderes de opinión, etc. veían como necesaria, razonable o lógica. Pero no deberíamos olvidar que se trata de una buena noticia en referencia al pasado nefasto de recuerdo tan cercano. Porque, debería ser una obviedad democrática el considerar que hacer una guerra no es una decisión que pueda escamotearse al Parlamento de un país.

Por otro lado, determina las condiciones por las que puede permitirse que el ejército pueda realizar algún tipo de intervención exterior. Fundamentalmente, se explicita que para que ello sea posible, las acciones armadas exteriores solo podrán realizarse cuando *“se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la OTAN, en el marco de sus respectivas competencias”.*

Aunque periodísticamente se destacó mucho este aspecto y se vino a decir que esta ley *“impedía otra participación española en una guerra como la de Irak”* esto no es rigurosamente cierto. Pese a que parece que se pretenda dar sólo carta de legalidad a las guerras que tengan el aval de Naciones Unidas, en el fondo, cuándo se admite que también podrán ser acordadas por otros organismos -OTAN, UE, etc.- se abre la puerta a legalizar en España guerras que, según el derecho internacional existente, sean ilegales. Algo realmente grave. Más allá que toda guerra es moralmente y políticamente detestable, hay que decir que este redactado, partiendo de la voluntad de impedir lo que hizo Aznar, en la práctica permite ir mucho más allá de lo que este hizo: Aznar participó en una guerra ilegal según el derecho internacional. Ahora, sería posible participar en una guerra ilegal según el derecho internacional pero con el respaldo, nada más y nada menos, de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

Fuerzas Armadas y cultura de defensa. En la DDN se mantiene la voluntad de *“la mejora de la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Defensa y la modernización de las Fuerzas Armadas”.*

Una parte de esta reforma estructural y orgánica, se contempla y desarrolla en la Ley de Tropa y Marinería, aprobada el 24 de abril del 2006. De todos es sabido las dificultades que las Fuerzas Armadas profesionales han tenido para reclutar a soldados profesionales. Pero también hay problemas serios de consolidación y estabilización de los que entran. El ex-ministro de Defensa, José Bono, en su tono trágico habitual, dijo al aprobarse la ley que había presentado en el Congreso: *“Ningún soldado trabajará sin opciones de futuro”*. La Ley de Tropa y Marinería facilita la estabilización y continuidad de los soldados profesionales con compromisos de larga duración o la renovación de compromisos cortos. Además, se establecen posibilidades de promoción dentro del Ejército y, en el caso de salir, se facilitan ventajas para poder acceder a la Guardia Civil o las diversas policías. Además, y eso es claramente cuestionable, el tiempo servido en las Fuerzas Armadas será considerado un mérito a la hora de acceder a plazas en la Administración. En definitiva, la ley supone mejoras y estímulos para enrolarse al Ejército y quedarse en él.

Para los próximos meses, está prevista la discusión de la Ley de la Carrera Militar, que terminará el diseño de reajuste y modernización de la estructuración del ejército.

Como elemento innovador e interesante, fruto también de las peticiones que varias ONG realizaron a los grupos parlamentarios, en la LODN, se incluyó una disposición transitoria por la que el gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados *“un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del Observatorio de la Vida Militar”*. Sin duda, un instrumento interesante que debe permitir más luz y control a las, no por poco numerosas menos graves, acciones de violación de los derechos humanos básicos que, dentro del ejército, han sufrido y sufren soldados. También, y de forma especial, algunas mujeres. La previsión es que, la Ley de los Derechos Fundamentales de los Militares Profesionales, entre este año al Congreso.

Insistiendo en un principio que introdujo fundamentalmente Aznar en su primera DDN (la de 1996), la actual DDN se propone *“elevar el nivel de cultura sobre seguridad y defensa en la sociedad española. Para ello el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Defensa y en coordinación con otros organismos del Estado, impulsará la difusión del papel y la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor implicación de la sociedad y de posibilitar el ejercicio del derecho y el deber de defender a España”*.

En la LODN también se recoge que se *“promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de ese fin”*.

La aparición de este concepto, *“cultura de defensa”*, surgió después de muchos años de fuertes críticas por parte de objetores, insumisos, pacifistas y antimilitaristas varios. Críticas que, consiguieron un cierto eco social y mediático. Así, por un lado, círculos militares y de la Defensa pretendían compensar esa mala imagen.

Además, con la profesionalización del ejército era imprescindible reclutar a gente joven y, por lo tanto, conseguir una cierta empatía. Por ello, conseguir implicar la sociedad española en los esfuerzos de modernización y profesionalización (más gasto militar, para entendernos) era una clara prioridad. A raíz de ese proyecto de la “cultura de defensa”, se puso especial empeño en mejorar la imagen y credibilidad del ejército en varios ámbitos. Especialmente, se hizo un plan para el mundo de la enseñanza. Se llegó a diseñar hasta la realización de una asignatura optativa de Defensa en enseñanza secundaria, se llegaron a realizar algunas pruebas piloto de cursos de formación en Defensa para maestros y maestras, etc. Todo ello generó una contestación social, la campaña “Escuelas Objetoras, Escuelas por la Paz”, que consiguió parar los aspectos más estrafalarios de la propuesta. Pero hay algo que se proyectó y que se ha realizado a fondo: la intensificación de las relaciones entre escuelas y centros de enseñanza y las Fuerzas Armadas. Así, participación de escolares en actividades como premios, visitas presenciales a cuarteles o campamentos de prácticas, etc. Por otro lado, las Fuerzas Armadas se han ofrecido muchas ocasiones a institutos y centros para hablarles del Ejército y de las salidas profesionales que puede suponer para los jóvenes.

Pues bien, la “cultura de defensa”, algo bien alejado de lo que es la educación por la paz, es una opción que el actual gobierno mantiene y promete desarrollar durante estos cuatro años.

El ciclo armamentista: gasto militar, investigación militar y comercio de armas. El gobierno español ha mantenido y engrasado la maquinaria del ciclo armamentista.

Se ha continuado incrementando el gasto militar en los Presupuestos Generales (PPGG) del 2005 y del 2006, ha continuado incrementando los programas de investigación militar (en los PPGG del 2006 fuertemente: un incremento del 27%). En vez de avanzar en la reconversión de la industria militar en algunos casos ha liderado su mantenimiento y expansión, y finalmente, no ha tenido ningún tipo de problema a vender armamento dónde ha podido, sin valorar ni importarle las consecuencias humanitarias y de seguridad que estas operaciones pudieran tener. Algunas de estas operaciones, por cierto, han levantado fuertes tensiones entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, por un lado, y los Ministerios de Defensa e Industria, por el otro.

No es extraño: en la DDN se entiende que la transformación de las Fuerzas Armadas debe basarse en *“fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación para mantener un nivel tecnológico elevado, que mejore la operatividad de las Fuerzas Armadas y favorezca la competitividad de la industria nacional de Defensa”*.

Más aún: España, tal como ha ido haciendo en los últimos años, debe estar en condiciones de *“poder participar con determinados países, si así se decidiese, para el desarrollo de capacidades militares más exigentes y en la adquisición de compromisos más vinculantes, en los términos previstos en el Tratado Constitucio-*

nal de la Unión Europea”. Lo que, traducido, quiere decir que España debe continuar participando en proyectos de desarrollo tecnológico militar europeo.

También se afirma que durante la presente legislatura se pretende al menos *“mantener un incremento presupuestario sostenido de entidad no inferior al experimentado entre los años 2003 y 2005, para proporcionar un escenario económico estable que permita acometer con éxito la transformación de las Fuerzas Armadas”*. Llevamos, pues, años de incremento del gasto militar. En vez de construir perspectivas y prácticas alternativas de seguridad, estamos reforzando las prácticas y los esquemas más clásicos de la defensa militar.

Política exterior

Evidentemente, no lo podemos obviar: la retirada de las tropas españolas de Irak, fue la noticia más impactante del actual gobierno: por su rapidez, ejemplaridad y valentía. Sin embargo, la prueba que eso era más una decisión inevitable dada la contestación social contra la guerra y la conmoción social por los atentados del 11 M, que no un cambio profundo de concepto, es que en Afganistán el gobierno ha continuado manteniendo e incrementando su presencia. Y, parece difícil, entenderlo en clave estrictamente humanitaria.

Hay muchas otras cuestiones, destacables -en positivo y en negativo- de la política exterior. Pero por lo que respecta al ámbito estricto de paz y seguridad, debemos mencionar de forma especial el proyecto de la Alianza de Civilizaciones. Incluso sólo como idea y propuesta lanzada en la arena internacional, ha tenido ya impacto. Ha conseguido visualizar que puede haber otros enfoques y perspectivas que, superando la lógica perversa de tensión permanente *“terrorismo-choque cultural-guerra al terrorismo”* abran nuevos espacios para el diálogo, el desarrollo, la profundización democrática y el respeto a los derechos humanos.

En cualquier caso, ha tenido sus primeras concreciones. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, recogió la idea presentada en la Asamblea General de Naciones Unidas por José Luis Rodríguez Zapatero y se creó un Grupo de Alto Nivel para elaborar un informe sobre el posible desarrollo de la propuesta, liderado por Federico Mayor Zaragoza.

También, en el ámbito de la regulación del comercio de armas pequeñas y ligeras, el gobierno español ha adoptado -pese a sus operaciones indiscriminadas de venta de armas- una actitud interesante. Por un lado, el Congreso de Diputados aprobó a finales del 2005, el compromiso de desarrollar una Ley que regule el comercio de armas. El gobierno ha mostrado su disposición a elaborar un texto realmente ambicioso y útil.

Por otro lado, a nivel internacional, el gobierno español ha estado entre los más avanzados en la Conferencia de Revisión sobre Armas Ligeras que se ha celebrado en Nueva York del 26 de junio al 7 de julio de 2006. Ha apostado por la creación de un Tratado Internacional que regule el comercio de armas, propuesta que un re-

ducido grupo de Estados (desde Estados Unidos a Rusia, pasando por China, Venezuela, Irán o Cuba) rechazan de plano.

Conclusiones

El balance de la gestión del gobierno Zapatero en el ámbito de la paz, la seguridad y la defensa, es claramente contradictorio.

Por una parte, ha apoyado a nivel internacional iniciativas interesantes a favor de la paz y la seguridad entendida de forma global y multidimensional. Ha impulsado y liderado procesos estimulantes que pueden suponer la apertura de nuevos espacios y oportunidades para superar la actual dicotomía basada en seguridad = fuerza + militarismo.

Sin embargo, en lo que hace referencia a la política de defensa, ha mantenido las principales constantes que ya existían sin ningún tipo de reforma o cambio sustancial. Incluso cosas básicas a nivel de gestión y presentación formal de datos (transparencia y correcta asignación presupuestaria en I+D civil y militar, en gasto militar, etc.) continúan siendo, hoy, una quimera.

Sin dejar de valorar los cambios y nuevas oportunidades creadas, está claro que un discurso nuevo de seguridad sin verse acompañado de una redimensión y reducción real de la defensa militar, es insostenible conceptual y operativamente.

Jordi Armadans es politólogo y periodista. Director de la Fundació per la Pau.

Algunas referencias bibliográficas mínimas:

- Directiva de Defensa Nacional 1/2004. 30 de diciembre de 2004.
- Directivas de Defensa Nacional (2000, 1996, 1992).
- Ley Orgánica 5/2005, de 17 de Noviembre, de la Defensa Nacional. BOE, núm 276.
- Ley 8/2006, de 24 de Abril, de Tropa y Marinería. BOE, núm 98.
- Web campaña “Por la paz, no a la investigación militar!”: www.noalainvestigacionmilitar.org.
- Web Fundació per la Pau: www.fundacioperlapau.org.



4.- Movimientos por la paz: el resurgimiento

Las guerras en África

Tica Font

En este artículo pretendo reflexionar sobre algunos aspectos de los conflictos armados que han tenido lugar en Angola, Liberia, Sierra Leona, Somalia, Ruanda o Sudán en la década de los noventa. En concreto, pretendo profundizar en los cambios que se han producido en la manera de hacer la guerra y la visión que los medios de comunicación nos ofrecen sobre las llamadas guerras civiles africanas, discurso que tiende a explicarlas como producto de rivalidades étnicas ancestrales, sin prestar atención a los factores políticos y económicos actuales complejos. A principios de los noventa los conflictos anteriores se explicaban como una revitalización de la etnicidad africana; de manera que el final de la Guerra Fría liberó de ataduras ideológicas los conflictos en África y pasó a mostrarnos los conflictos o guerras africanas como un retorno al primitivismo o una vuelta al tribalismo.

En los estudios procedentes de entidades de cooperación, la tesis predominante es la que relaciona los nuevos conflictos africanos con el subdesarrollo, defiende que las guerras civiles africanas son un producto de la pobreza creciente, del deterioro medioambiental, del crecimiento desmesurado de población, del aumento de la exclusión social y de la corrupción de las élites. En este aspecto considero más sugerente la perspectiva de M. Duffield, en donde las guerras civiles africanas no serían producto de la irracionalidad étnica, tampoco serían un producto exclusivo del subdesarrollo, sino más bien, desde una visión de la economía política de guerra, los conflictos africanos serían una respuesta de ciertas élites políticas y económicas a su integración en la economía mundial.

Durante un tiempo, los conflictos africanos han sido descritos como unos conflictos en el que fracciones diversas luchaban sin programa político o ideológico alguno, movidos por rivalidades étnicas y dedicados al saqueo, al bandillaje y al uso de la violencia extrema contra la población, mientras que las instituciones estatales, la ley y el orden se colapsaban. Con el paso del tiempo han surgido otros estudios que muestran una cara diferente del conflicto, lejos de mostrarnos una anarquía étnica irracional, nos visualizan a actores locales y regionales que buscan y encuentran una funcionalidad racional a la guerra, en su economía. De esta manera, los señores de la guerra han usado políticamente el desorden para obtener beneficios políticos y económicos en el contexto de guerra, lo que influye en que no se resuelva el conflicto.

Como primer paso para desarrollar este aspecto de la causalidad de las guerras africanas, querría poner de manifiesto que para abordar los conflictos de post-Guerra Fría nos hacen falta nuevas herramientas y redefinir conceptos como el de guerra (tesis que no pretendo desarrollar en este artículo). En terminología de Guerra Fría, los conflictos se clasifican como *guerra* si se producen más de mil muertos por año, *conflicto de intensidad media* si se producen más de mil muertos a lo largo de la historia del conflicto y *conflicto de baja intensidad* si no llegan a mil. Esta terminología de clasificación de los conflictos por su intensidad, actualmente no tiene sentido, no ayuda a abordar los conflictos actuales. Por ejemplo, en Brasil hay más de 30.000 víctimas al año por armas y no tienen declarada ninguna guerra y no aparece en ningún observatorio de conflictos. De la misma manera que la frontera entre legalidad e ilegalidad se ha difuminado, en el caso de las nuevas guerras el estado de guerra y de paz también son términos relativos, no son periodos absolutos y contrapuestos, por no decir que ya no se declaran las guerras, o que las treguas de paz son tan frecuentes como sus incumplimientos. Los niveles de violencia, muerte y desplazamientos en tiempo de paz pueden llegar a ser similares o superiores a los tiempos de guerra; por ejemplo El Salvador durante el periodo de guerra tenía una media anual de 6.250 muertos en 1995, en tiempo de paz el número de muertos por armas fue de 8.500. Sudáfrica en 1989 durante el apartheid fueron asesinadas 12.000 personas, en 1997, finalizado el apartheid, fueron asesinadas 27.000. Muchos de estos asesinatos no tienen una relación clara con los problemas políticos del conflicto y reflejan la persistencia de una economía política violenta a pesar de la ausencia de guerra. Las relaciones sociales dentro de una paz violenta pueden ser muy similares a las existentes en tiempo de guerra.

Según Mary Kaldor, en la década de los 90 se ha desarrollado un nuevo tipo de violencia organizada especialmente en África y Europa del Este que la califica de nuevas guerras, “nuevas” en el sentido de distinguirlas de las guerras procedentes de épocas anteriores y “guerras” para remarcar el carácter político de estos nuevos tipos de violencia.

Otros autores hablan de los nuevos conflictos como guerras internas o civiles, en el sentido que tienen lugar dentro de las fronteras del Estado. Pero aunque la mayoría de los conflictos son locales, incluyen muchos elementos transnacionales, de forma que la distinción entre lo interno y lo externo resulta difuso. Otros hablan de los nuevos conflictos como guerras privatizadas o informales; aunque la privatización del uso de la violencia es un elemento importante, en la práctica distinguir entre lo privado y lo público o lo formal y lo informal no es demasiado fácil de establecer. Otros, como Ignatieff, hablan de estas nuevas guerras como “*guerras posmodernas*”.

Lo que es seguro, es que representan un cambio profundo en las relaciones sociales de la guerra, cambios que tienen que ser interpretados en el marco del final de la Guerra Fría, en la expansión de la globalización y dentro del proceso de intensificación de las interconexiones mundiales. El impacto de la globalización se hace visible en muchos aspectos de las nuevas guerras.

Los actores. La imagen que nos ha aportado el cine sobre los que practican la guerra, nos ha conducido a pensar que la guerra es cosa de militares, que los enfrentamientos y luchas son llevadas a cabo por los ejércitos nacionales, en el caso de guerras entre Estados, o entre ejércitos y guerrilla en conflictos propios de la Guerra Fría. En definitiva, en nuestra imaginación la guerra la llevan a cabo militares (fuerzas públicas, trabajadores del Estado) o civiles militarizados (guerrilla o ejércitos insurgentes que reclutan en sus miembros entre la misma población civil que se rebela a los que ostentan el poder del Estado). En cambio las imágenes que tenemos de las nuevas guerras posmodernas a través de los informativos de televisión, nos muestran a jóvenes, a menudo adolescentes con un kalashnikov en las manos, descalzos o con bambas Nike, o paramilitares con gafas de sol oscuras o a fanáticos con turbante que rezan sobre una alfombra junto a su rifle, etc. Las nuevas guerras se caracterizan por una desmilitarización de la violencia.

Los nuevos conflictos incorporan nuevos actores como bandas paramilitares, unidades de autodefensa, mercenarios extranjeros, mafias, grupos terroristas... que no responden a ningún estereotipo, no se asemejan a los guerrilleros de los años 70 y no presentan referencias ideológicas o políticas claras. La mayoría de grupos que practican la violencia no tienen ideario ético o político claro, no defienden los derechos humanos o la democracia, en general podemos afirmar que utilizan la violencia para sobrevivir o para obtener parcelas de poder y riquezas. Los soldados no regulares se reclutan en la calle, entre bandas urbanas, en prisiones, se los entrena en campos secretos, se los equipa con armamento, a menudo estatal. En definitiva, los soldados no regulares se crearon para realizar la limpieza étnica o las masacres que el Estado no se atreve a realizar directamente, de esta manera puede negar oficialmente la autoría de dichos crímenes. Con lo cual la guerra se convierte en una franquicia que se concede a empresas privadas para eludir la responsabilidad moral asociada a los militares profesionales. En definitiva, podemos decir que los nuevos conflictos representan la invención de un modelo de guerra que permite al Estado negar las responsabilidades que le confieren acuerdos internacionales como los de Ginebra, y un modelo de luchador o guerrero sin escrúpulos.

En aquellos conflictos procedentes del periodo de descolonización o de Guerra Fría, podemos observar una mezcla de características propias del periodo junto con características de las nuevas guerras, de manera que las guerrillas de Colombia o Filipinas se definen como comunistas, pero utilizan el secuestro o la droga como instrumentos de financiación y supervivencia.

Si como acabamos de decir, se ha ampliado el abanico de actores que utilizan la violencia, también tenemos que constatar la aparición de nuevos actores que no participan del uso de la violencia; que no forman parte del conflicto, pero que intentan intervenir en el transcurso del conflicto. Entre estos nuevos actores tenemos los altos funcionarios de la política internacional, la prensa y las ONG. En todos los conflictos encontramos a los representantes de Naciones Unidas, los funcionarios de ACNUR, los enviados de la Unión Europea, de la OSCE... todos ellos intentan

mediar entre los bandos enfrentados, propiciar una tregua, impulsar acuerdos de paz o procesos de paz, estos mediadores intentan que las partes en conflicto consideren la paz como más rentable que la guerra. Este papel que ejercen hace que los bandos enfrentados les perciban como un eslabón más del conflicto y pasen ser objeto y objetivo de actos violentos: recordemos el ataque que sufrió la sede de Naciones Unidas en Bagdad y el asesinato de su máximo responsable Sergio Vieira de Mello junto con otros funcionarios internacionales.

Los medios de comunicación y los reporteros de guerra junto con las ONG han pasado a engrosar las filas de los actores de guerra y a ser objeto de los ataques que los bandos enfrentados. Las ONG que trabajan en situaciones de emergencia han sufrido ataques violentos, destrucción de infraestructuras, saqueos y asesinatos de algunos de sus miembros.

Todos podemos recordar reportajes de TV con musulmanes bosnios famélicos detrás de alambradas, fue la imagen más famosa del conflicto bosnio. En realidad estos campos que los periodistas consiguieron filmar con permiso de los guardias, no eran campos de exterminio, sino de tránsito, en él los detenidos civiles estaban a la espera de ser enviados al exilio. Este permiso para filmar representa una cínica explotación por parte de los serbios, de la memoria del holocausto que perdura en la mente de los europeos, con la finalidad de ablandar las conciencias occidentales y conseguir que los gobiernos occidentales acogieran a los refugiados musulmanes y se convirtieran en cómplices de la limpieza étnica. Lo mismo podemos decir cuando una ONG negocia un corredor para desplazar a civiles y salvarlos del exterminio: han salvado vidas, pero han colaborado en el objetivo de una de las partes del conflicto.

Muestra de cómo los periodistas y las ONG son percibidos por las partes en conflicto como unos actores que pueden intervenir en el transcurso del conflicto, son los ataques que reciben. Algunas ONG como Cruz Roja han contratado servicios de seguridad para su personal, para los almacenes de comida y medicinas. Las armas están prohibidas dentro de las clínicas y hospitales, pero se han dotado de un perímetro de seguridad.

Víctimas. Las víctimas de la Primera Guerra Mundial en un 95% fueron militares. Las víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueron un 50% de militares y un 50% de civiles. Las víctimas de las nuevas guerras en un 90% son civiles.

La población civil durante la Primera Guerra Mundial fue considerada como una reserva de potencial humano para el combate: la guerra la gana aquél que tiene más fuerza, es decir, más hombres y más armas; los civiles tienen asignado el papel de alimentar el campo de batalla. En la Segunda Guerra Mundial, la población civil cubrió aspectos importantes como aportar hombres en el frente de batalla y aportar los recursos humanos necesarios e imprescindibles para mantener la producción de armas y así mantener la guerra. Durante la Guerra Fría, la población civil pasa a ser considerada como rehén por parte de la guerrilla que lucha por su liberación, y considera la población como la cantera donde alimentarse, la que le proporciona alimentos y atenciones cuando los requieren... para los militares la población civil

eran posibles guerrilleros; pero los dos bandos a través de la propaganda buscaban la adhesión de la población a su ideario. En las nuevas guerras la población civil se ha transformado en objeto de guerra, en escenario de guerra; cada bando se enfrenta al otro mediante el ataque a la población que se identifique con el bando contrario o enemigo (*hutus-tutsis*). En las guerras clásicas el campo de batalla era el espacio físico donde se llevaba el enfrentamiento armado, esta limitación del espacio impedía que el conflicto se extendiera a espacios más amplios.

Informes de Cruz Roja Internacional (CICR) avalan la idea de que la población civil se ha transformado en escenario de guerra. De los 17.086 casos de intervención quirúrgica que realizaron CIRC por heridas de arma de fuego, el 35% fueron mujeres, hombres menores de 16 años y mayores de 50 años, todos ellos por su edad y características se ha de suponer que no son combatientes.

Entre los *métodos de lucha* hay que destacar el genocidio, la limpieza étnica, la violación de mujeres, matanzas colectivas, mutilaciones, grandes desplazamientos de población, secuestros, robos... la destrucción del sistema económico productivo: minar tierras de labranza, destrucción de infraestructuras (carreteras, puentes, centrales eléctricas...). Las estrategias y métodos de lucha han tenido como objetivo la población civil. Se ha utilizado la violencia como una manera de visualizar e internacionalizar el conflicto, de que los medios de comunicación hagan de portavoces del conflicto. Pero lo más doloroso es que se utiliza la violencia con el objetivo de generar sufrimiento, dolor humillación...: es más rentable generar dolor, sufrimiento y odio que no provocar la muerte. Podemos decir que muchas de las acciones violentas han buscado el hundimiento psicológico de las personas (las víctimas), con la pretensión de generar traumas psicológicos, de atemorizar o humillar en la población.

Para las guerrillas revolucionarias, el objetivo central era conseguir la adhesión de la población a la idea revolucionaria, por eso los guerrilleros intentaban construir sociedades modelo en los territorios que dominaban. En cambio los nuevos guerreros establecen el control político mediante la adhesión a una etiqueta, y las personas que viven en el territorio bajo su control deben ajustarse a la etiqueta adecuada. El dominio sobre la población depende de mantener el miedo, la inseguridad y de perpetuar los odios recíprocos. De aquí, la importancia de cometer atrocidades desmesuradas, espectaculares y de involucrar al mayor número posible de personas en los crímenes, con la finalidad de instaurar una complicidad compartida, afirmar la violencia contra el otro al que se odia y hacer más intensas las divisiones. Por esta razón algunos dicen que las nuevas guerras representan un retroceso hacia el primitivismo. A estos hay que recordarles que las guerras primitivas eran muy ritualistas y se atenían a unas reglas y limitaciones sociales.

Las cifras de muertos, heridos o víctimas en general siempre son aproximadas; las cifras oficiales no son del todo fiables, hay que pensar que las víctimas también están sujetas a intereses políticos de los combatientes. A pesar de ello, se calcula que a lo largo del siglo XX ha habido más de 110 millones de muertos y en la década de los 90 ha habido más de siete millones de muertos. Pero, como ya se ha mencionado, los

nuevos conflictos no sólo comportan violencia física, sino que también conllevan la violencia psíquica, se busca el hundimiento psicológico de la población, generar sufrimiento, odio o humillación. Algunas ONG humanitarias narran cómo, en el caso de Sierra Leona, se han amputado manos de campesinos para impedir que puedan trabajar los campos y sean una carga para sus familias. En Bosnia, la población era encerrada en campos de concentración, escuelas o casas, no se les dejaba salir, se les obligaba a vivir sin un mínimo sanitario y de higiene, a hacer trabajos duros y humillantes. Por las noches las personas armadas amenazaban a las mujeres con matarlas a ellas y a las hijas y las violaban /1. Los hombres eran obligados a mirar como se violaba a su mujer y/o hija mientras era apuntado con un arma. El objetivo de estas acciones era atemorizar y humillar a los supervivientes /2. El trauma de ver asesinar, mutilar o violar a familiares o vecinos es difícil de superar y genera grandes dosis de sufrimiento, odio y rencor. Se calcula que diez millones de niños han quedado traumatizados psíquicamente como consecuencia de las barbaridades que han visto y que requerirían tratamiento psicológico, del que no disponen.

El sufrimiento de la población civil no acaba con los daños físicos o psíquicos; en los nuevos conflictos hemos observado como se han sembrado tierras agrícolas con minas, se han destruido viviendas e infraestructuras. Todo eso, junto con el miedo, ha conducido a los supervivientes del desastre y el caos a abandonar casas, tierras y pueblos. Los reportajes de televisión nos han mostrado las largas caravanas de población caminante o en camión huyendo de la destrucción y el horror. Según el PNUD, en 1998 se calcula que más de ocho millones de personas han abandonado su país, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Refugiados (ACNUR) afirma que hay más de 23 millones de refugiados en el mundo, la mitad de los cuales son menores de 18 años, y 40 millones desplazados.

Cuando se creó ACNUR en 1950, en Europa quedaban 400.000 refugiados, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y 1.500.000 refugiados en el mundo. Cincuenta años después la situación se ha agravado. En 1990 se produjeron 1.500.000 de refugiados en Liberia, en 1991 un millón de refugiados kurdos, entre 1991 y 1992 se atendieron 2.700.000 refugiados bosnios, en 1994 el conflicto de Ruanda provocó el exilio de dos millones de personas, en 1999 los bombardeos de la OTAN sobre Kosovo provocaron un éxodo de un millón de personas y el ataque de EE UU sobre Afganistán han generado un millón de refugiados.

1/ La violación de mujeres en periodo de guerra o conflicto no es un hecho aislado, es un instrumento de guerra ampliamente utilizado en los conflictos de la década de los 90. Simplemente se mencionan los hechos de la ex-Yugoslavia por que son de los que dispongo de más documentación.

2/ Para más información sobre la violación de mujeres como arma de limpieza étnica, se puede consultar el libro *El genocidio bosnio. Documentos para un análisis*, editado por La Catarata, Madrid, 1996. Este libro recoge los veredictos del Tribunal Permanente de los Pueblos reunido en Barcelona del 7 al 11 de diciembre de 1995, algunos estudios sobre el proceso de desintegración, los acuerdos de Dayton, la actitud de la comunidad internacional o el papel de los medios de comunicación. Sobre la utilización de la violencia sexual, por parte de los serbios de Bosnia, contra las mujeres como arma de guerra, como parte de una política de depuración étnica planificada y sistemática la sentencia recoge: *"En consecuencia, la violencia sexual en tiempo de guerra, sea aislada o sistemática, debe dejar de verse como un mal inevitable y ser considerada en todo caso como crimen de guerra; en cuanto sea perpetrada con el propósito de destruir a un grupo o etnia debe calificarse como Delito de Genocidio"*. Más adelante proponen que la comunidad internacional adopte entre otras medidas: *"Tipificar la violación sexual como crimen de guerra incluyéndola en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de guerra"*.

Los refugiados dependen de la ayuda humanitaria y, sobre todo, de las ONG. Las víctimas en un 85% son acogidas en campos de refugiados o en las afueras de ciudades fronterizas por los países vecinos, situados en países del mismo Sur. Estos países receptores no tienen más remedio que ser solidarios; su acogimiento supone una carga económica elevada para los países pobres de acogida, pero además, a menudo estos refugiados traen consigo los problemas y tensiones que originaron su salida, con el peligro de trasladar a la población de acogida parte de estas tensiones (tensiones por los recursos, tensiones de seguridad...).

Financiación. Mientras el monopolio del uso de la violencia ha estado en manos del Estado, éste ha pagado los gastos del conflicto, ha pagado el salario de los militares, las armas, etc. En definitiva la guerra hasta ahora ha sido un asunto público y el Estado era el único que ostentaba la legalidad de ejercer la violencia. Durante la Guerra Fría cada bloque, Este y Oeste, proporcionaba apoyo económico, en armas, en formación... a cada uno de los bandos enfrentados, al Estado y a las fuerzas militares o a la oposición y las guerrillas o fuerzas insurgentes.

Pero, acabada la Guerra Fría, las dos superpotencias ya no se enfrentaron la una contra la otra a través de terceros países; ello reducirá el poder negociador de los dirigentes africanos, hasta entonces especialistas en sacar dinero de la contienda.

En este nuevo contexto internacional de victoria del bloque occidental y de los valores occidentales, de promoción de los derechos humanos y de la democracia como organización política, los Estados Unidos emprenden un proceso de retirar y suspender la ayuda a los regímenes autoritarios. En el caso de muchos países africanos, EE UU decide retirar su ayuda económica, militar y su apoyo político, eliminando de esta manera la fuente principal de sostenimiento económico y militar de muchos regímenes políticos, con lo que dada su escasa legitimidad política interna por parte de la población, muchos de ellos entran en una crisis importante.

En los nuevos conflictos, la mayoría de los actores no son militares, no reciben un salario del gobierno y no están financiados por una potencia y en consecuencia tienen que buscar fuentes de financiación. La continuidad del conflicto depende de los medios de financiación que puedan conseguir. Las formas para obtener recursos económicos son muy variadas, participar de los mercados negros de drogas, armas, diamantes..., practicar el saqueo, robo, extorsión, toma de rehenes, apropiación de tierras o bienes después de la expulsión de la población de un territorio...

Los *señores de la guerra*, u hombres fuertes, controlan un territorio y explotan los recursos de dicho territorio, son personajes que han sido capaces de aprovechar los cambios que aporta en proceso de globalización para crear vínculos con el mercado mundial, utilizar las compañías extranjeras y establecer una autoridad local. C. Taylor de Liberia es un ejemplo de esta nueva forma de autoridad. Durante un tiempo, entre 1990 y 1993, Taylor tuvo el control de gran parte de Liberia y Sierra Leona; este territorio controlado por Taylor tenía su propia moneda, su sistema bancario; su fuente principal de ingresos provenía de la madera, la producción agrícola y los diamantes. Este comercio se llevaba a cabo a través de diversas empresas

extranjeras y diversas redes comerciales. Como milicias armadas, Taylor contaba con jóvenes marginados, desmotivados, a menudo sin educación, con poco futuro y que se sienten atraídos por figuras como él. Mientras que para Taylor la guerra es una fuente de riqueza, para estos jóvenes es una forma de vivir o sobrevivir.

Taylor se dedicó a controlar las rutas comerciales y la plantación de Firestone así como al establecimiento de fuertes lazos comerciales con compañías francesas e inglesas dedicadas al comercio de hierro, minerales, caucho o madera. Se sabe que la compañía británica African Mining Consortium entregaba al FNPL diez millones de dólares al mes para el transporte de minerales a través del ferrocarril. Otras compañías francesas exportaban madera a cambio de armas o asistencia militar. Por otra parte, el embajador estadounidense W. H. Twaddell manifestó en 1996 que, entre 1990 y 1994, la exportación de diamantes de Liberia ascendió a 300 millones de dólares al año, la de madera a 53 millones de dólares, la de caucho a 27 millones y la de oro un millón de dólares. Él mismo estimaba que Taylor podía haber obtenido más de 75 millones de dólares al año por las tasas que impuso a esas exportaciones ³.

En estos años, Taylor era el tercer proveedor de madera noble tropical en Francia. También se alió con otras redes mundiales, por ejemplo una empresa ucraniana de armas que le suministraba el armamento ligero que necesitaba. Taylor ha sido el primero en utilizar compañías extranjeras como fuente de obtención de divisas, el primero en controlar un territorio físicamente y como consecuencia el primero en impedir a sus adversarios el acceso a los recursos naturales. Como sistema no estatal, el territorio controlado por Taylor no está sujeto a demandas de acreedores ni a la burocracia pública. Personajes como Taylor representan el vínculo entre el mercado local y global.

Otro aspecto diferente que querría señalar es el hecho de que en muchos de estos conflictos, la ayuda humanitaria ha sido moneda de cambio. En el caso de muchos países de África, al igual que en Bosnia o en Colombia, los grupos armados que controlaban una zona geográfica, ejercían la vigilancia y control sobre las carreteras, lo cual comporta el control del comercio y la economía local. El control del tráfico comercial conlleva que se apliquen derechos de cobro de impuestos sobre la materia que se transporta, generalmente este impuesto se hace efectivo con una parte de la carga; si la mercancía que se transporta son alimentos, éstos con posterioridad pasan a ser vendidos a la población local. En el caso de la ayuda humanitaria, los diversos grupos armados cobran un peaje para permitir que esta ayuda llegue a la población de la zona; durante el conflicto en Bosnia las ONG pagaban un 5% del cargamento, en algunos casos, los croata-bosnios, llegaron a pedir el 27% del cargamento. También podemos mencionar otras formas de obtener ingresos como el alquiler a un precio desorbitado de vehículos, locales o viviendas del personal internacional desplazado o la recaudación de impuestos de guerra como el pago de protección personal, en instalaciones, en la producción o comercialización tanto de productos lega-

³/ Ruiz Giménez, I. (2003), p. 41.

les como ilegales. Según Mary Kaldor la guerrilla de Colombia ingresa 800 millones de dólares por estos procedimientos respecto de la droga; el 70% de los ingresos económicos de la oposición de Tayikistán provienen de la droga, lo mismo que en Perú o Afganistán. El tráfico de armas, el blanqueo de dinero, ayudas procedentes del exterior, expatriados adinerados que hacen donaciones a la causa o ayudas de gobiernos exteriores preocupados por la inestabilidad del país, son formas de financiación del conflicto y configuran una nueva forma de economía de guerra.

Características de los Estados. Un problema importante en casi todas las zonas en conflicto del mundo, posterior a la Guerra Fría, es la desintegración de los Estados. En todos ellos encontraremos que impera una economía clientelar, con predominio de la corrupción de los funcionarios del Estado, con una mala gestión económica, con un aumento de los delitos comunes, con la ineficacia de la administración del Estado que apenas presta servicios en la población, con una desigual distribución de la riqueza, con un fácil acceso a las armas, etc. Gobiernos que reprimen la disidencia política, que presentan poco respecto a los derechos humanos, poca sensibilidad hacia las minorías y con un tejido social desmembrado.

Solamente querría destacar que, en los países en conflicto, el aparato del Estado es lo suficientemente débil como para que no llegue a controlar todo el territorio. En esta situación surgen los *señores de la guerra* o un grupo armado que ejerce su poder y control en una zona o territorio, a pesar de la existencia de algunos grupos de jóvenes armados dedicados al saqueo y al vandalismo. Estos señores de la guerra llegan a constituirse como autoridades que controlan la explotación de recursos y el comercio local. Estos señores de la guerra viven al margen del Estado, se enfrentan al Estado pero pueden crear una especie de híbrido de Estado.

En este punto no se puede eludir comentar algunos cambios importantes que la globalización comporta sobre los Estados-nación. Tanto en el Norte como en el Sur la globalización está forzando a los Estados a hacerse más delgados, a privatizar muchos de los servicios básicos para las personas y a reducir gastos internos de bienestar. La importancia del Estado-nación radica en la eficacia para planificar y redistribuir la riqueza y los bienes públicos dentro de las fronteras. La globalización está minando esta función de los Estados-nación occidental, pero también lo ha estado haciendo en los Estados africanos.

Dicho esto, habría que destacar la importancia de la economía informal en el Sur. Por ejemplo, en Angola solamente el 10% del PIB se produce a través de prácticas económicas convencionales (legalmente establecidas y reglamentadas públicamente). En Mozambique se estima que la economía formal solamente representa el 50% del PIB, mientras que en Kenia o Rusia no pasa del 40%. De hecho en casi todo el Sur se estima que la economía formal solamente constituye la mitad de la economía total. En Somalia por ejemplo, no existe economía formal.

El comercio informal de todo tipo de bienes y servicios es el cordón umbilical para millones de habitantes del Sur. Esta economía se ha expandido y ha integrado

el Sur en el sistema económico liberal mundial, después de haber expulsado a los países más pobres de las redes oficiales de la economía internacional.

La aparición de los señores de la guerra no se puede explicar como un producto irracional de un tribalismo africano, sino más bien como una respuesta de determinadas élites a la crisis del Estado y a la creciente marginalidad de sus países en la economía mundial. Al perder el Estado su principal apoyo y sustento procedente de los países líderes de cada bloque, el Estado pierde su principal utilidad para las élites (fuente principal de suministro de privilegios y recursos) y pierde capacidad de reparto de privilegios, cada vez resulta más reducido el grupo o familia beneficiaria de los privilegios del Estado. Es en este contexto, donde algunas élites del país reclaman entrar en el reparto de privilegios y acceso al control de los recursos, es en este contexto que surge el llamado *señor de la guerra*. Para él y su grupo o clan, la guerra y la violencia les reportaran grandes beneficios y les dará la oportunidad de reincorporar las viejas clientelas o extender su control sobre nuevos grupos sociales, en especial, sobre una juventud frustrada por ausencia de futuro, y por condiciones de extrema pobreza y años de represión.

Causas. Durante el período de Guerra Fría, el mundo estaba dividido en dos bloques. El Occidental que defiende las libertades individuales y del libre mercado, que propugna el capitalismo como modelo económico y la democracia parlamentaria como modelo de organización social, y el bloque del Este o comunista que ha defendido el socialismo, una economía planificada y una forma de gobierno basada en el partido único. En ese periodo, EE UU y la URSS, como líderes de cada bloque, se han enfrentado de forma indirecta, nunca se han atacado mutuamente; la guerra ha tenido lugar a través de conflictos en la periferia, en terceros países, con la intención de desestabilizar a la otra potencia y mediante conflictos de baja intensidad o guerras de guerrillas. Debido a la existencia de armas de destrucción masiva, que hubieran permitido la destrucción de las dos potencias, éstas nunca se enfrentaron directamente. Fruto de este enfrentamiento es un puñado de países altamente militarizados, rearmados, descompuestos socialmente, económicamente y debilitados políticamente como Afganistán, Angola, Mozambique, Somalia y Sudán.

El final de la Guerra Fría ha comportado el final del enfrentamiento bipolar, a partir de este momento el comunismo y su modelo económico deja de ser el enemigo del bando occidental. Durante este periodo, la mayoría de guerrillas se declaraban revolucionarias y defendían un modelo de sociedad socialista, pretendían la liberación de los oprimidos o de los obreros, defendían la construcción de una sociedad más igualitaria; otros, en cambio se declaraban contra-revolucionarios. En definitiva el que estaba en litigio era el modelo de relaciones sociales, políticas y económicas. Por esta razón, acabada la Guerra Fría, las guerras dejarán de ser guerras de liberación, dejarán de ser ideológicas, dejarán de ser guerras que quieren cambiar el modelo de sociedad imperante.

Pero el final de la Guerra Fría no ha comportado el final de muchas de estas guerras. Si durante este periodo el elemento aglutinador o que daba identidad al grupo que utili-

za la violencia era la ideología o el modelo de sociedad a construir; acabada la Guerra Fría el elemento aglutinador o identitario de los que utilizan la violencia será la pertenencia a una etnia, a un clan, a una minoría o a un grupo religioso. Pero, como se acaba de decir anteriormente, detrás de cada conflicto étnico se esconde una lucha por el poder y el control de las riquezas naturales, y se esconde una confrontación en la que se manipulan identidades étnico-culturales para movilizar a la población.

En la literatura del periodo de Guerra Fría encontramos que todos los conflictos se clasifican en luchas o bien para conseguir el poder del Estado, es decir luchas que pretenden cambiar el modelo político, económico y social que rige en aquel Estado, o bien en luchas por la independencia o autonomía, en este caso no se pretende acceder al control del aparato del Estado, sino que lo que se pretende es segregarse territorialmente y formar un Estado nuevo o las reivindicaciones pasan para conseguir, dentro del mismo estado, unas ciertas cotas de autogobierno político.

Los conflictos actuales son consecuencia de la combinación de diversos factores internos ampliamente conocidos, que incluyen problemas derivados de la transición política en un contexto de pobreza, escasez, fácil acceso a las armas y unas instituciones gubernamentales débiles, pero también de factores externos.

En una buena parte de la literatura que narra los conflictos de la década de los 90, la etnicidad se nos presenta como causa y origen del conflicto en el África subsahariana. Pero para entender el proceso que conduce a la movilización de los clanes o grupos étnicos es necesario repolitizar el proceso y acudir a dinámicas sociales, políticas y económicas. La mayoría de los conflictos son complejos e intervienen muchos factores, tanto externos como internos, determinantes en el desarrollo de la violencia.

Las fracciones armadas parecen fragmentarse y multiplicarse, aparentemente sobre linajes étnicos; sin embargo estas divisiones no tenían un origen en odios étnicos generalizados, sino en políticos ambiciosos que buscan obtener seguidores; los conflictos étnicos empiezan en lo alto y se extienden hacia abajo. En gran medida, son fabricados por personas ávidas de poder que usan la violencia como medio de reclutamiento político. Con ello no se quiere decir que la etnicidad no juegue un papel importante en el conflicto, ni que sea únicamente un instrumento manipulable por parte de unas élites; la lealtad a la familia (en un sentido muy amplio) pesaba y pesa en los señores de la guerra así como otras variables como la cultura o la religión.

No es posible explicar la duración y desarrollo de los conflictos aludiendo a odios atávicos irracionales. Hemos visto como el comportamiento de los *señores de la guerra* parecía responder en gran parte a una racionalidad económica: la de obtener nuevos recursos, privilegios o estatus. Algo que, desgraciadamente para la población civil, encontraron en la economía de la guerra: control de recursos naturales, contrabando de diamantes, armas o drogas, blanqueo de dinero, saqueo a la propia población y la instrumentalización del desorden.

Pero la guerra no puede explicarse sólo por la racionalidad económica de algunos actores. Los *señores de la guerra* no sólo buscan explotar o saquear los recursos

del país, sino que buscan reconstruir redes clientelares y obtener legitimidad política recurriendo a diferentes lealtades, a veces étnicas, a veces religiosas.

Pero hay que tener presente que en la medida que el Estado pierde el control de un territorio, la población se refugia en la seguridad y protección de sus propios linajes y clanes o subclanes.

A partir de la década de los años 90, los viejos y nuevos conflictos serán tratados por los medios de comunicación como conflictos que enfrentan a comunidades: hutus contra tutsis, bosnios contra serbios o contra croatas, etc. Ahora bien, eso no nos tiene que hacer pensar que los conflictos actuales son conflictos étnicos, religiosos o culturales; la etnicidad o la religión ha pasado a ser el elemento aglutinador de las partes enfrentadas violentamente, pero no son la causa del enfrentamiento. A mi parecer, lo que mantiene o ha de mantener unida a una sociedad no es la religión, la raza, la etnia, la lengua o la cultura, sino un acuerdo normativo con respecto al imperio del derecho y la creencia de que todos somos individuos iguales y portadores de los mismos derechos.

Para otros autores, como R. Kaplan, los nuevos conflictos son guerras tan caóticas que nombrarlas civiles representa dignificarlas. Para él estas guerras son guerras de desintegración entre bandos o fracciones sin finalidad política, en las que simplemente se lucha por las drogas, el territorio o la supervivencia, y de su lucha solamente puede salir el caos.

En algún documento de la OCDE (1998) podemos encontrar la visión que se tiene desde los países industrializados sobre la causa de los conflictos. *“Como norma general, una sociedad dotada con un buen equilibrio, una distribución social sólida y recursos económicos, cómo evidencian los altos indicadores de desarrollo humano, es capaz de resolver las tensiones con un menor riesgo de crisis institucional y social que una sociedad marcada por condiciones desestabilizadoras, como pobreza pertinaz, desigualdades socioeconómicas extremas, falta de oportunidades sistemáticas y la ausencia de posibilidad de recurrir a instituciones creíbles para resolver las quejas”*.

En un documento de la CE (1996) podemos leer *“El conflicto la mayoría de veces es consecuencia de la interacción entre inestabilidad política, económica y social, a menudo resultando de una mala gobernación, las políticas económicas fallidas y programas de desarrollo inadecuados que han exacerbado diferencias étnicas o religiosas”*.

Todos los discursos que aquí podamos hacer o recoger tendrán una parte de verdad. El discurso liberal, como éste de la OCDE, problematiza el subdesarrollo, lo califica de peligroso, nos está poniendo las causas del conflicto en el interior, internaliza las causas del conflicto y no tiene presente que las desigualdades y la explotación dentro del sistema mundial y la manera en que se distribuye la riqueza tiene un impacto directo en la naturaleza de la pobreza. Al definir el conflicto como un problema social, es decir, al convertir el subdesarrollo en un peligro, permite que se movilen nuevas redes en nombre de la seguridad. La guerra ya no es un asunto de Estado, es un problema de subdesarrollo y de crisis política. De esta manera la

principal carga de responsabilidad para resolver éstos problemas se hace recaer sobre los mismos actores del Sur, al mismo tiempo que se eluden responsabilidades del Norte en las situaciones del Sur. También hay que resaltar que convertir el subdesarrollo y la pobreza en un peligro para las sociedades del Norte legitima las políticas de seguridad de nuestros países ricos. Si la violencia y el conflicto están íntimamente relacionados con el subdesarrollo, prevenir curar o evitar el conflicto, pasa por aplicar políticas de desarrollo y de ayuda; de esta manera el desarrollo no es un fin en sí mismo sino un instrumento para evitar el conflicto.

Como anteriormente se ha mencionado, todos los discursos tienen una parte de verdad. No podemos afirmar que sean falsos o incorrectos. Simplemente que cada narrador selecciona los aspectos de la realidad, ocultando otros, que reafirmen, legitimen o justifiquen las acciones políticas que quieren llevar a cabo.

Particularmente me sumo al grupo de los que miran los conflictos desde una perspectiva de economía política de guerra, que aunque contempla otros aspectos, hace un énfasis especial en ver las guerras africanas como una respuesta de unas élites políticas y económicas delante de la crisis de legitimidad del Estado y de legitimidad del clan que ostenta el poder. Ciertas élites buscaran nuevas formas de financiación para reconstruir antiguas o nuevas clientelas. Estas fuentes de financiación las encontraran en el control de los recursos naturales, en el tráfico ilegal de maderas, diamantes, petróleo, drogas, armas... o cualquier otra actividad ilegal.

Este discurso en el que se hace prevalecer la economía política de guerra pondrá de manifiesto el papel que juega África en la economía informal mundial y su relación con las redes internacionales. Redes que vinculan a los *señores de la guerra* africanos con las mafias rusas o con los talibanes, y con multinacionales aparentemente respetables.

Tica Font es vicepresidenta de Justicia i Pau de Barcelona.

Bibliografía

- Duffield, M. (2004). *Las nuevas Guerras en el mundo global*. Madrid: Catarata.
- Howard, M. (2001). *La invención de la Paz. Reflexiones sobre la guerra y el orden internacional*. Barcelona: Salvat.
- Ignatieff, M. (1999). *El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna*. Madrid: Taurus.
- Kaldor, M. (2001). *Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Ruiz-Giménez, I. (2003). *Las buenas intenciones. Intervención humanitaria en África*. Barcelona: Icaria.
- Ruiz-Giménez, I. (2005). *Las historia de la intervención humanitaria. El imperialismo altruista*. Madrid: Catarata.
- San Juan, C. (2001). *Catástrofes y ayuda de emergencia*. Barcelona: Icaria.



5.- Movimientos por la paz: el resurgimiento

Militarismo e imperialismo: su actualidad en el siglo XXI

Claude Serfati

Las relaciones entre el militarismo, la guerra y el capitalismo se vuelven a poner de actualidad en este comienzo del siglo XXI. La “guerra sin límites”, el nuevo programa político lanzado por la Administración Bush, marca un cambio de escala en el militarismo del capitalismo americano y advierte: hoy más que nunca, mundialización del capital y militarismo aparecen como dos aspectos de la dominación imperialista.

Rosa Luxemburgo recuerda que *“el militarismo tiene una función determinada en la historia del capital. Acompaña a todas las fases históricas de la acumulación”*.

Sus análisis resaltan lo que se llamaría hoy la “historicidad” de la relación del militarismo con el capital y conservan su pertinencia. Definió la *“fase imperialista de la acumulación [como] fase de la competencia mundial del capital con el mundo entero como teatro. Los métodos empleados son la política colonial, el sistema de préstamos internacionales, la política de esferas de intereses, la guerra. La violencia, la estafa, el pillaje se despliegan abiertamente y sin máscara”*. Al contrario que la *“teoría liberal burguesa [que] separa el dominio económico del capital de los abusos de autoridad, considerados como incidentes más o menos fortuitos de la política exterior”*, Rosa Luxemburgo subraya de manera muy actual que *“la violencia política es el instrumento y el vehículo del proceso económico: la dualidad de los aspectos de la acumulación recubre un mismo fenómeno orgánico, surgido de las condiciones de la reproducción capitalista”*.

En su polémica contra Duhring, Engels analiza las relaciones entre el militarismo y el desarrollo tecnológico del capitalismo. La historia demuestra que la conducción de las guerras se basa en la producción de armas que a su vez depende del estado de la economía y más concretamente del desarrollo industrial y tecnológico, porque *“la industria sigue siendo industria, ya se oriente a la producción o a la destrucción de objetos”*.

Engels explica los cambios radicales que se producen cuando el capitalismo se vuelve dominante en todo el mundo. *“El navío de guerra no es sólo un producto, es al mismo tiempo un espécimen de la gran industria moderna, una fábrica flotante”*. En su opinión, *“el militarismo domina y devora a Europa”*, y esta fórmula tendrá una confirmación trágica en la guerra a la que se libraron los imperialismos europeos desde 1914.

La producción de armas no es sólo una “rama de la industria moderna”. Desde la Segunda Guerra Mundial se encuentra en el corazón de trayectorias tecnológicas esenciales para el modo de producción (aeronáutica y espacio, electrónica, nuclear). En las siguientes cinco décadas, los gastos militares de Estados Unidos, y de los otros países imperialistas, se han mantenido a unos niveles extraordinariamente elevados, en nombre de la amenaza que suponía la URSS. Las gigantescas sumas consagradas en este país a la defensa consolidaron a la casta dirigente y su existencia parasitaria, al tiempo que contribuyeron a la sangría de recursos productivos y financieros. El hecho más destacado después de la Segunda Guerra Mundial es el enraizamiento del sistema militar-industrial en la economía y en la sociedad de Estados Unidos, que no se ha debilitado con la desaparición de la URSS, sino todo lo contrario, y aborda, en este comienzo de siglo, una nueva etapa de consolidación.

El reforzamiento del sistema militar-industrial se basa en una conjunción de factores: la concentración industrial y la vinculación aún más estrecha de los grupos de armamento con el capital financiero, la subida del presupuesto militar comprometido por Clinton en 1999 y considerablemente ampliado por Bush, y una presencia reforzada en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Estas tecnologías se han beneficiado de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan (la “guerra de las estrellas”) y han jugado un papel determinante en la “dominación informacional” y la “guerra centrada en las redes”, temas favoritos de los estrategas del Pentágono en los años noventa.

El sistema “militar-securitario”

La supremacía militar y el control de la seguridad permiten a los grupos de armamento americanos conquistar una posición central en el desarrollo de las TIC, dominado en los años noventa por empresas civiles (la pretendida “nueva economía” y su cortejo de *start-ups*). Los grupos de armamento también deben desarrollar nuevos sistemas de armas para los ejércitos de tierra. La preparación de “guerras urbanas” (expresión empleada por los expertos del Pentágono), llevadas a cabo por soldados equipados con armas hipersofisticadas, continuando en tierra la acción de la aviación, ocupa un lugar importante en los presupuestos militares. Se trata de llevar a cabo guerras contra las poblaciones de las inmensas aglomeraciones de los países del Sur (las de Sudamérica obsesionan a los estrategas americanos), y eventualmente contra las “clases peligrosas” de las ciudades del Norte. Es de prever, por tanto, que la enorme influencia que han adquirido los grupos de armamento en el seno de las instituciones federales y estatales desde la Segunda Guerra Mundial, y la ampliación de la “agenda de seguridad nacional” a objetivos no militares que afectan cada vez más a aspectos de la vida social y probada, aceleran la formación de un “sistema militar-securitario”.

En los próximos años, este sistema ocupará un papel mucho más importante que el del “complejo militar-industrial” durante la Guerra Fría.

La formación del sistema militar-securitario da al Estado americano una considerable potencia. Estamos lejos del declive de la *“forma Estado”* de dominación del capital que, según Hardt y Negri, daría lugar a un *“Imperio”* en el seno del cual capital y trabajo se enfrentarían sin mediación.

Para mantener su dominación, el capital no puede prescindir de un aparato político, cuyas instituciones (judiciales, militares, etc.) se han constituido, reforzado y mejorado desde hace dos siglos en el marco de los Estados de los países capitalistas dominantes. El “capitalismo mundial”, en el sentido que dan estos autores, no existe. El capital, en tanto relación social, tiene ciertamente una tendencia a transceder las fronteras nacionales y las otras barreras (formas de organización socio-políticas, por ejemplo). *“El mercado mundial está contenido en la misma noción de capital”*, decía Marx, pero se trata de un proceso marcado por contradicciones que se expresan en las rivalidades intercapitalistas e interimperialistas, así como en las crisis. Por ello, la extensión mundial del capital siempre ha tomado, y lo sigue haciendo, una fisonomía indisolublemente ligada a las relaciones de fuerzas inter-estatales y a su cortejo de violencias.

La dominación de Estados Unidos sobre los otros países imperialistas es evidente. Es una razón que hace improbable el desencadenamiento de guerras interimperialistas como las que tuvieron lugar en el siglo veinte. La integración de los capitales transatlánticos, entre Estados Unidos y una parte de la Unión Europea, continúa y constituye uno de los rasgos distintivos de la “mundialización” de final del siglo veinte. Las clases dominantes de Estados Unidos y de la Unión Europea están, en cierto modo, en la situación descrita por Marx a propósito de la competencia entre capitalistas: se comportan como *“falsos hermanos en la competencia”*, pero como una auténtica *“francmasonería”* frente a los obreros (y también frente a los pueblos de los países sometidos a su dominación, habría que añadir). La improbabilidad de guerras entre las potencias capitalistas dominantes no vuelve caduca la relación entre guerra e imperialismo establecida por el marxismo de comienzos del siglo veinte. Basta con pensar, por ejemplo, en qué pasaría si la transformación capitalista de China bajo el control de la burocracia del PC chino, en lugar de acelerar las tendencias centrífugas en este país, amenazase la economía de Estados Unidos.

Desde luego, el ultra-imperialismo que permitiría superar las contradicciones del capital, tal como fue imaginado por Kautsky, no está a la orden del día. La guerra conserva y acrecienta su papel en la fase actual de mundialización del capital.

Mundialización del capital y militarismo

La mundialización del capital no implica una expansión del capitalismo en el sentido de una ampliación de la reproducción del valor a escala planetaria. Más bien lleva a un aumento de las depredaciones operadas por el capital, cuyos “derechos de propiedad” (sobre activos financieros) le permiten percibir rentas financieras y apropiarse de los procesos de la vida. *“No se produce demasiados medios de subsistencia para la población existente. Se produce demasiado poca para satisfacer decente y humanamente a la masa de población”*.

Esta es la contradicción que la mundialización del capital ha llevado hasta un nivel antes inalcanzado, aplastando a la mayor parte de los países de África y conduciendo a los países “emergentes” de Asia y América a la crisis, durante la década de los noventa.

El Estado siempre ha jugado un papel central en este proceso de expropiación de los productores por el capital, no sólo en la llamada fase “de acumulación primitiva” sino también durante las conquistas coloniales, cuyo objetivo era someter a los pueblos y los territorios del planeta a la dominación del capital. La violencia de los Estados es hoy día más necesaria que nunca, justo lo contrario de las mixtificaciones que asocian los “mercados” y el libre cambio con la paz y la democracia. La mundialización del capital se acompaña de un proceso de mercantilización que se puede definir como una extensión de los espacios donde el capital ejerce sus derechos de propiedad.

“Un mismo fenómeno orgánico”

Esta es la condición previa a la existencia de “mercados”, cuyo objetivos y efectos son, por una parte, aumentar la dependencia de los productores y hacerlos más “libres”, esto es, más obligados a trabajar para el capital, y por otra, dominar nuevos grupos sociales, en particular en los países dependientes. Estos espacios no son sólo territorios geográficos, son también nuevos terrenos de apropiación privada, como la biosfera (mercados de permisos de derechos de polución), los procesos de la vida (patentes sobre semillas, etc.) y cada vez más los derechos de propiedad intelectual cuya continua extensión por parte de los tribunales significa un serio atentado a la libertad de las poblaciones. Todos estos objetivos no pueden ser alcanzados sin el uso de la violencia.

Estados Unidos se encuentran en el centro de la mundialización del capital. El reforzamiento del militarismo observado durante los años noventa no fue un “suplemento” añadido a un funcionamiento económico en sí “próspero”. Mundialización de capital y militarismo son dos aspectos de “*un mismo fenómeno orgánico*”, como dijo Rosa Luxemburgo, y en Estados Unidos son más interdependientes. La potencia político-militar ha sido un factor determinante en los procesos que han permitido a los Estados Unidos, durante los años noventa y a un ritmo acelerado después de la crisis de los países asiáticos (1997), drenar hacia sus plazas financieras el capital dinero en busca de emplazamientos de mucha “seguridad”.

Al final, la economía americana fue alcanzada por la recesión en el 2000. No es posible analizar aquí los mecanismos, pero lo importante es comprender que si Estados Unidos están en el centro de la mundialización del capital, están también en el centro de sus contradicciones, mucho más profundas de lo que dan a entender los indicadores utilizados para calificar una recesión. El rápido desarrollo de estas contradicciones desmiente a quienes pensaban que los Estados Unidos eran un “islote de prosperidad” en el océano de devastaciones mundiales producidas por la dominación del capital financiero (la “nueva economía”). Las contradicciones económi-

cas se han ampliado, no reducido, con la puesta en marcha de los programas presupuestarios decididos después del 11 de setiembre de 2001, para los que se ha utilizado el término de “guerra de clases”.

En este contexto, hay que situar la “guerra sin límites” emprendida por la Administración Bush en relación con la trayectoria del capitalismo de los últimos veinte años. Esta política expresa los intereses de una oligarquía financiera cuyas bases materiales son el saqueo de los recursos naturales (ante todo el petróleo) y el pago de la “deuda eterna”, aún al precio de poner en peligro físico y la propia existencia de las clases sociales y de las poblaciones más vulnerables. El control que Estados Unidos y otros países dominantes -la “comunidad internacional”- ejercen a través de formas de gestión directa, de mandato o de protectorado tiene hoy aún menos posibilidades de estimular el desarrollo económico de los países dominados, que cuando las conquistas coloniales de los imperialismos de comienzos del siglo veinte. Es el momento, como lo muestra el ejemplo trágico del continente africano desde hace veinte años, del desmembramiento de los Estados de los países del Sur, que no pueden resistir a las consecuencias de la dominación de los imperialismos.

Las clases sociales cuya existencia reposan en un modo de dominación social que privilegia la apropiación del valor creado por los productores, y estimula cada vez más la depredación rentista, sólo pueden tener preocupaciones a muy corto plazo, sin mirar las consecuencias sociales y medioambientales catastróficas para la humanidad. Necesitan gobiernos e instituciones estatales que les aseguren el pleno goce y la seguridad de sus derechos de propiedad. Cuanto más extienda su lógica el capital financiero, más necesidad tendrá de aumentar su fuerza armada.

Claude Serfati es economista. Forma parte de la redacción de la revista *Carré Rouge*, www.carre-rouge.org.

4 futuro anterior

Polonia

1956. Poznan. Estalla la crisis del estalinismo

Zbigniew Kowalewski

El levantamiento insurreccional de la ciudad polaca de Poznan, en junio de 1956, fue un revelador de la crisis del estalinismo. Precedido por un acontecimiento similar en Berlín Este y seguido, cuatro meses después, por la insurrección húngara, abre el gran ciclo polaco de las luchas obreras contra la dictadura burocrática (1970, 1976, 1980-1981).

En Polonia, el derrocamiento del régimen burgués, tras la Segunda Guerra Mundial, y la incorporación del país al *glacis* europeo de la Unión Soviética fueron seguidos por una verdadera revolución industrial que, en el marco del desarrollo capitalista retardado y dependiente, la burguesía polaca no había sido capaz de llevar a cabo. En seis años, el gigantesco esfuerzo voluntarista del "poder popular" y de las masas movilizadas había cambiado la sociedad de arriba a abajo.

Un nuevo y poderoso proletariado industrial surgió como fuerza social decisiva. El avance social y cultural de amplias capas trabajadoras, aportado por el régimen de "democracia popular" y por la industrialización, no tenía precedentes en la historia del país. Hizo nacer grandes aspiraciones obreras a una vida mejor en el plano material, moral y cultural, pero también a un papel en la gestión de las empresas y en la dirección del conjunto de la economía, de la sociedad y del Estado.

El régimen estalinista, por su parte, entraba en crisis. A finales de los años 1940, dos acontecimientos habían marcado su consolidación. El primero concernía a la supresión por la policía de la corriente que pretendía seguir una "vía polaca al socialismo", "nacionalista de derechas", según la terminología estalinista, es decir autónoma respecto a la URSS. Wladyslaw Gomulka, gran dirigente comunista de esta corriente, fue detenido en 1947. El segundo consistía en una pretendida "unificación del movimiento obrero", en realidad la liquidación de los partidos obreros, comunista y socialista, "unificados" en un único partido burocrático, el Partido Obrero Unificado Polaco (POUP), en 1948.

La dictadura terrorista, situándose incluso por encima de la dirección del POUP y concentrada en el siniestro 10º Departamento del Ministerio de la Seguridad Pública y de la Información Militar, prolongación de la policía política soviética, había sido desmantelada tras la muerte de Stalin, en marzo de 1953. En el proceso de "deshielo" y en el ambiente de luchas de fracciones en el seno de la burocracia, el régimen se abría un poco y se liberalizaba muy tímidamente.

Pero, al mismo tiempo, las tensiones y las contradicciones de la gestión burocrática de la economía, de la revolución industrial y del Estado, comienzan a estallar. Las promesas de una elevación sustancial del nivel de vida, tras el gran esfuerzo de reconstrucción y de industrialización, se evaporan.

Enfrentamientos armados. La burocracia en el poder, incapaz de aumentar la productividad vía el progreso técnico, intensifica la explotación elevando las normas de rendimiento, baja de los salarios reales pagándolos por debajo del valor de la fuerza de trabajo, devenga impuestos de los salarios, disminuye la remuneración de las horas extraordinarias y de las primas, etc. Es justamente la resistencia a la sobreexplotación lo que desencadena el movimiento de protesta de los metalúrgicos de la enorme fábrica Stalin de Poznan. Mientras las negociaciones de la delegación obrera con los representantes del gobierno se perpetúan, los mítines de masa, las elecciones de delegados, la elaboración de plataformas reivindicativas, la construcción de coordinadoras interempresas y la naciente democracia obrera hacen la situación explosiva. El levantamiento se produjo el 28 de junio a las 6 de la mañana, con el desencadenamiento de la huelga general en la ciudad, que gana en primer lugar a las empresas más grandes, suscita la salida en masa para la manifestación y la concentración de 100.000 trabajadores en la plaza del Ayuntamiento, a fin de obtener la supresión de las nuevas normas de rendimiento, la subida salarial y la bajada de los precios.

A las 10 horas, el movimiento toma la forma de una insurrección: la toma por asalto de la prisión, la liberación de 257 presos políticos y de derecho común, la destrucción de la documentación penal, la toma y el incendio de los edificios del tribunal y el juzgado de la ciudad, los asaltos sucesivos, durante toda la jornada, contra los diez depósitos de armas. La violencia obrera golpea casi exclusivamente al conjunto de las instituciones represivas.

Hacia mediodía, los manifestantes asedian y atacan al núcleo del sistema represivo: el edificio central de la Seguridad del Estado, institución criminal, la más odiada del régimen burocrático. Se dispara contra este edificio desde una veintena de puntos diferentes. Las multitudes desarman a una parte de los alumnos de una escuela militar enviados en ayuda, con la prohibición de abrir fuego, y frenan el avance de una columna de dieciseis carros de combate. Los insurrectos se adueñan de dos carros e intentan lanzarlos contra el edificio de la Seguridad.

Burocracia reformada. A partir de las 16 h, la ciudad es invadida, poco a poco, por dos divisiones blindadas y dos divisiones de infantería, en total, 10.000 soldados con alrededor de 360 carros, bajo el mando del viceministro de Defensa Nacional, el general Stanislaw Poplawski, un militar soviético de origen polaco destacado para servir en el ejército polaco. La huelga general dura tres días, los enfrentamientos armados, cada vez más esporádicos, cuatro.

Balance: 57 muertos, de ellos 49 civiles, así como 8 militares y agentes de la Seguridad, alrededor de 600 heridos por ambos bandos, 746 detenidos (de ellos el 80% obreros), a menudo golpeados y torturados para declarar que el levantamiento era una obra de los servicios de información de Estados Unidos y de Alemania Occidental y de una organización clandestina anticomunista, en realidad inexistente.

Pero, en los tres procesos, sólo 22 personas fueron juzgadas. Diez fueron condenadas, por otra parte, a penas relativamente moderadas de dos a seis años de cárcel. Una paradoja: el último proceso, el de las diez personas acusadas de haber formado un grupo armado, termina... sin ninguna sanción para los acusados, defendidos muy valientemente por sus abogados que declararon culpables *"a los burócratas en el poder que habían dejado de ser una élite ideológica para convertirse en una élite consumidora"*.

El levantamiento de Poznan conmovió al poder burocrático y desencadenó una fuerte crisis política. Cuatro meses más tarde, en octubre, un gran movimiento antiburocrático de masas ganaba el país: los trabajadores formaban los consejos obreros en las empresas, el Parlamento votaba una ley que establecía que *"el consejo obrero gestiona la empresa en nombre de sus trabajadores"*, y Gomulka tomaba triunfalmente la dirección del POUP con un inmenso apoyo popular... para poner fin a la revolución política y restablecer un orden burocrático reformado y formalmente desestalinizado.

Sudáfrica

1976. Soweto

Bruce Jones

El 16 de junio de 1976, los estudiantes sudafricanos se manifestaron por las calles de Soweto, negándose a ser obligados a aprender la lengua de los opresores blancos, el *afrikaans*. Se enfrentaron con la policía, que intentó frenar la marcha; frente a su determinación, abrió fuego y mató a varios manifestantes. A partir de ahí, la protesta se transforma en revuelta. El régimen del apartheid se enfrentó a su crisis más profunda desde la masacre de Sharpeville, en 1961.

Los primeros signos de una renovación del militante negro aparecieron a comienzos de los años 1970, cuando unos estudiantes lanzaron el Movimiento de la Conciencia Negra. Las organizaciones que lo constituyen -la Convención de los Pueblos Negros (BPC) y la Organización de los Estudiantes (SASO)- insistieron en el orgullo negro y en la confianza de los negros en sí mismos. Rechazaban las alianzas con los blancos liberales. ¿Su eslogan?: *"Hombre negro, no puedes contar más que contigo mismo"*.

El primer signo real de la confianza negra, tras las terribles derrotas de comienzos de los años 1960, llegó en 1973, cuando 100.000 trabajadores negros se pusieron en huelga en Durban a fin de obtener mejores salarios. Esta explosión espontánea de huelgas de masa cogió a los patronos y al Estado por sorpresa. Retrocedieron: el derecho de huelga fue concedido a los negros en 1973 y se garantizaron aumentos salariales.

La revuelta de Soweto está también en relación directa con la guerra en Angola. El hundimiento del imperio colonial en África, consecutivo a la revolución portuguesa de 1974, hundió Angola y Mozambique en la guerra civil. A comienzos de 1976, el ejército sudafricano decidió invadir Angola, a fin de impedir el triunfo del ala izquierda del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA). Pero las tropas invasoras fueron derrotadas. Fue una humillación: la máquina de guerra africana más poderosa al sur del Sáhara había sido derrotada por combatientes negros. La noticia de la derrota de África del Sur se extendió como un reguero de pólvora.

Algunos testigos cuentan como, en El Cabo, multitudes negras invadieron los hoteles mixtos -únicos lugares en los que podían ver la televisión- para ver los noticieros y aplaudir los reportajes que relataban las pérdidas sudafricanas. La victoria del MPLA en Angola fortaleció entre la población negra sudafricana, la idea de que en adelante era posible derrotar a los dirigentes blancos.

Ghettos negros. Otras cuestiones llevaron a la revuelta de Soweto. En 1976, África del Sur tuvo un año de recesión. El paro aumentó, en particular entre los trabajadores negros de la industria. Soweto, ciudad negra de alrededor de dos millones de habitantes, carecía de las principales infraestructuras: el 86% de las viviendas no tenía electricidad, el 93% ni ducha, ni baño. A comienzos de 1976, el paro alcanzó el 56% en la ciudad. En 1973-1974, el gobierno gastaba diecisiete veces más dinero en la educación de un niño blanco que en la de un niño negro. Los jóvenes negros no tienen más perspectiva más que el paro o salarios de esclavo. La obligación de aprender la lengua de los opresores, el *afrikaans*, fue demasiado. A fines de 1975 y a comienzos de 1976, los estudiantes de las escuelas de Soweto se reunieron para organizar una acción contra la enseñanza del *afrikaans*.

La rebelión es obra de los jóvenes de estos ghettos negros. A finales de agosto y mediados de septiembre, convocaron y organizaron dos huelgas masivas de solidaridad en las regiones en las que el movimiento de la juventud era más fuerte. El movimiento rechazó la dirección de la clase media negra, en particular de que estaba implicada en la gestión de los ghettos negros, los bantustanes, corrupta y conocida por ser un importante colaborador del apartheid.

La cólera del movimiento no se dirige sólo contra la administración de los bantustanes, sino también contra los órganos de colaboración negros. El Parlamento fantoche del bantustán de Bophuthatswana fue quemado. Los fuegos de la revuelta arden durante más de un año. La juventud derrocó el consejo que dirigía Soweto en junio de 1977.

A pesar de ello, el régimen se recuperó y reprimió: 700 muertos, detenciones masivas y la eliminación en octubre de 1977 de la columna vertebral del movimiento de la Conciencia Negra. El dirigente del Movimiento, Steve Biko, fue asesinado por la policía. Los conflictos en el seno mismo del movimiento antiapartheid en los bantustanes acabó de derrotarle.

El levantamiento de Soweto puso al orden del día la destrucción del apartheid. Conmovió los fundamentos de uno de los regímenes más represivos del mundo. Pero la rebelión tenía sus límites. Los jóvenes negros en paro y los estudiantes no tenían el poder de destruir el apartheid. Este poder residía en la clase obrera negra, que no estuvo al frente del levantamiento de Soweto.

La revuelta de 1976 dejó una marca indeleble. La represión no proporcionó al régimen más que un respiro temporal. Dos años después, la clase obrera negra tomó un lugar central y, a finales de los años 1980, puso de rodillas al estado del apartheid, forzando la negociación de un acuerdo político con la mayoría negra. Soweto fue el comienzo del fin del apartheid.

Traducción: Alberto Nadal
Rouge, 30/06/2006

5 Voces miradas

Una mujer en una isla

Concha Mateos Martín (Plasencia, 1965)

Licenciada en Ciencias de la Información y Especialista en Comunicación y Gestión Política por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, Tenerife.

Ha sido jefa de prensa y ha asesorado a organizaciones políticas y sindicales en España, México y Venezuela. Profesora de Periodismo Audiovisual en España y México, ha sido jefa de informativos en cadenas regionales de televisión, en España. Actualmente es investigadora de CEPS, Centro de Estudios Políticos y Sociales, en Venezuela. Ha sido premiada en el I Concurso Taramela de Cuentos (Tenerife, 2004).

Concha Mateos dice “escribo como experimento” y hay en sus poemas un proceso de búsqueda, un intento, aún abierto, de encontrar una voz propia. Está bien que así sea, pues lo que uno encuentra es la certeza de la poesía: la verdad de una palabra que va abriéndose paso entre preguntas. Una lección: la belleza que llevamos en los ojos pero no nos pertenece, que hay que descubrir con lentitud, ir despacio a su encuentro, sabiendo que sólo nos espera en el tiempo lento en que el tiempo acaba. El amor que es libertad, mirada y palabra que nos refleja y construye: “Dime y dame la palabra / que retienes al pensarme./ Nómbrame./ Hazme.” Y el sufrimiento, el dolor, la injusticia, lo irreparable. La poesía, también, como denuncia. Grito, “¡LÁ de la casa”, en que la ternura no puede proteger del crimen; la poesía para decir la repetida “miseria la miseria”. Son poemas llenos de fuerza, con una gran capacidad narrativa (un relato se esconde en muchos de ellos), con un acusado sentido del ritmo, de la musicalidad.

Un cálido *VIENTO SUR* los acoge en esta su salida inicial. Ojalá sigan muchos más. Hay una mujer en una isla y sabe escuchar, reconocer la belleza, dejarse llevar por ella, nombrar el sufrimiento y acompañar la ternura, escribe poemas, es peligrosa (la poesía siempre lo es). Quedan ustedes avisados..

Antonio Crespo Massieu

Me gustan los hombres que cruzan

Me gustan los hombres que cruzan las piernas
cuando hablan en los bares.

Los hombres que cruzan las puertas corredizas de los supermercados
empujando carritos
vacíos cargados de expectativas
me deprimen.
No conozco ningún placer que se pueda adquirir empaquetado.

Los vividores a plazo
que antes de levantarse ya saben cuánto adeudarán mañana
y no pierden la esperanza de pagarlo a tiempo
me quitan las ganas de ir a la cama.

Los de futuro brillante y presente hipotecado
simplemente
no se cruzan en mi vida,
debo parecerles muy cara: existo ahora, respiro ahora, muerdo ahora
y ellos viven para el premio de mañana.

Ni sé si por culpa de ellos o suerte mía
me suelo tropezar con los que hablan poco.
Les adoro como a un fuego: mientras dura la llama
de su silencio y de mi lengua encendida.
Después, debo alejarme de ellos: me ahogo
si espero palabras que no llegan.

Me gustan los hombres
que sonríen cuando escuchan, que me llevan
la contraria y
a veces
me convencen.

Los hombres que aprecian la belleza de otros hombres
me gustan mucho.
Y los que aprecian la mía me gustan más.

Los hombres me gustan porque no me entienden
y porque me parece muy fácil entenderles
pero luego nunca lo hacemos, entendernos,
y tampoco nos cansamos de intentarlo.

Si lloran, me gustan los hombres.
Y me dan pena los que sólo han aprendido a obedecer o a mandar.

Lo hombres que juzgan no sé para qué sirven.
Los que aman me gustan si no me aman a mí.

De entre todos prefiero a los que ríen:
con una buena risa se llega al fin del mundo sin miedo
de tener que volver al inicio
en cualquier momento.

Dime

Dime con quien hablas
y con quien callas.
No hay otro viaje de ti que me interese.
El trayecto de tus huellas dactilares no me importa,
se borra. Es el eco
de tu verbo el que me asusta
y su forma de incendiarse en la conciencia.
Es el rastro de tu lengua sintáctica imborrable.
Porque clava los arpones en la carne
de la mente de tu amante
y, aún tú ausente,
te repone perenne
en su memoria.
Dime y dame la palabra
que retienes al pensarme.
Nómbrame.
Hazme.

Hay una mujer en una isla

Hay
una mujer en una isla.
Llegó ayer.
Hace
cien días que llegó
y aún no ha llegado.

Hay sus ojos, sus dedos, sus sandalias.
Dicen que va con un bolso a todos lados.
Y que de cerca
parece que sonrío cuando habla.

Compra el periódico y madruga.
Lleva un coche de alquiler.
Y en la tarde pasea por la playa.
Ni de prisa ni despacio.
Ni desnuda, ni vestida, ni habitada.
Parece no hablar sola,
aunque habla cuando nadie la acompaña.

Sale cada noche con bolígrafos.
Si se sienta, se descalza.
Sus vestidos tienen flores africanas.

Nadie sabe qué hace aquí, por qué vino,
quién
reclamó sus servicios de empleada.
No es turista, no descansa. Gasta poco
dinero y mucha calma. Se conforma.
Despista.
Nunca pregunta. Pero arranca
las palabras y todos le contestan.
Sabe escuchar: es peligrosa.
Quedan ustedes avisados.

Miseria la miseria

¡LÁ de la casa!
Qué risa, cómo habla.
Es extranjera.
Pasa.
Saida, es mi nombre.
Se dice “Ah”, Saida,
“Ah de la casa, no, Lá”.
Pero ya no se dice.
Puf, qué rara.

“La” de La niña, de La nueva, de La extraña.
“La”, dos letras:
casi nada, una palabra.
La ele y la a.
La sandalia, la cartera.

Otro idioma: *el, la, lo, los y las*, va estudiando
cuando vuelve de la escuela.
Este, ese, aquel. Y ella,
que es la otra.
La de fuera.

La que “aprende más deprisa que los nuestros”.
¿Quién? Aquella, la de atrás.
Mira tú, es mora, qué más da.
Ella: la, de Alá.
Ellos: la de Dios
es Cristo. Y se montó.
Otra historia, otro credo.
Precisaban entenderse, pero igual...

La, delante:
la-niña, la-ira, la-navaja.
Se encadenan las palabras.
Coge la
que quieras.
Y la coge.
A ella, que tiembla.
La, detrás:
aguánta-la.
Y calla la
boca, so gallina.
No te rajes ahora, supermán.

La que llora, la que grita, la que sangra.
¡Para ya, Miguel! ¡Para ya ¡
Mira tú, mora menos, mora más...

La, la, la: cantan
cuando vuelven.
La (que iba) con ellos
ya no está.
Eso había, eso queda:
una sola y la
misma miseria
aquí y allá.
Ná de ná.
La de la.

La lección

La llevamos en los ojos,
la belleza,
y el hilo invisible que conecta
la pupila con la idea. Creo.
La llevamos y nos lleva
hacia la fuga, hacia la hebra,
en un tranvía llamado sugerencia.

Se hace en el tiempo que tardamos en llegar a su presencia.
Merodeándola, la hallamos.
Presuponiéndola secreta, la encontramos
flotando sobre una nube de minutos inestables
en los que hierve la duda de tenerla.

La duda,
sin duda nuestra plaga

sin código pregunta que se amarra.
La impaciencia,
nuestra gana
de retener su clave, asegurarla.
Ni lo intentes, o la matas.

Por ejemplo: la miras, y...
¡Un momento, no corras!
Vuelve. Retorna. Detente a contemplarla.
Vaya...
se ha escapado.
Tendrás que volver
a empezar otra vez
a creerte que allí estaba.

Porque en realidad, no se fue, fuiste tú
quien no llegó a tiempo de atraparla.

Pequeño, mira: está ahí,
donde no la ves está,
móvil, se agazapa,
se extiende, se clava, salta,
se duerme, se derrama y nos hunde.
Pero nos rescata.

En la demora, mora.
En el reflejo, acampa.
Si no la ves, se escapa.
Si no sacas las uñas, resbala
su luz por ti. Aráñala
si quieres que te abra
su arca.

Tus garras han de ser de luces, soñar, de conceptos,
de experiencia, confiar, de templanza.
Se hizo la belleza para quien la anhelara.
Con prisas no hay partida: el juego empieza cuando el tiempo acaba.

Apréndete si quieres
que ella prenda en el patio de tu casa.
Destílate, desguaza
la retina del concepto heredado en las estampas.
Está
por todas partes.
La tienes
pero no te pertenece.
Cabalga, cabalga en tu mirada.

6 aquí y ahora

Una crítica feminista a la Ley de Dependencia

Ana Hernando

El 21 de abril de 2006, el Consejo de Ministros aprobó el *Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia*, cuyo objetivo es la creación de un “Sistema Nacional de Dependencia” (SND) con carácter universal no gratuito y configurado como red de utilización pública, integrando centros o servicios públicos y privados.

Este proyecto de ley ha generado una gran expectativa social y muy especialmente en las mujeres, ya que pretende aportar soluciones a un tema central que les afecta directamente como es el cuidado a personas dependientes. Por otro lado, este proyecto ha sido presentado como el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar y constituye sin duda una de las leyes “estrella” de la actual legislatura del gobierno socialista.

Sin embargo, como tendremos ocasión de contrastar a lo largo de este artículo, estas expectativas no se corresponden ni con el contenido de la ley, ni con las consecuencias que previsiblemente se van a derivar de su aplicación. Dentro del movimiento feminista son muchas las mujeres que ponen en cuestión la utilidad de este proyecto para dar respuesta a toda la complejidad que supone el trabajo de cuidados.

Consideraciones previas en torno al cuidado. La sociedad actual se configura en todos los aspectos de acuerdo al modelo capitalista. Este patrón social y económico potencia, entre otros, como valores máximos el individualismo y la autosuficiencia. Parece como si las personas fuesen capaces de desarrollar su vida de forma autónoma, independiente y ajena al resto de la sociedad. La organización social que se desprende de este modelo en el que vivimos, ignora formalmente las necesidades humanas básicas para sustentar la vida, sin embargo no por ello éstas dejan de existir y requerir ser atendidas de forma ineludible. La responsabilidad social de la realización de las tareas de cuidado en la sociedad recae casi exclusivamente sobre las mujeres, quienes de forma mayoritaria satisfacen estas necesidades dentro del ámbito familiar y privado.

Procurar los cuidados que todos y todas precisamos requiere un trabajo que incluye no sólo tareas materiales, como hacer la comida, la colada, limpiar la casa, llevar a las y los hijos al colegio, cuidar a quien está enfermo, y un largo etcétera. También presenta todo un componente inmaterial difícilmente cuantificable, pero indispensable para el bienestar emocional, como es el afecto que damos y recibimos, el cariño, la atención cuando estamos enfermos, cuando necesitamos que nos acompañen al

médico, ayudar en las tareas escolares a tu hijo o hija, atender a tu pareja cuando te necesita, y muchos otros aspectos relacionales de la vida cotidiana.

Desde el movimiento feminista se ha cuestionado el concepto tradicional de trabajo, por su exclusiva identificación con empleo y por tanto con el trabajo remunerado. El feminismo ha conseguido ampliar esta definición a todo el conjunto de actividades que tienen como objetivo proporcionar bienestar físico, psíquico y emocional a terceros: niñas y niños, personas ancianas, enfermas o discapacitadas, además de la atención de las necesidades propias. Por otro lado también el feminismo ha puesto de manifiesto que este conjunto de trabajos, oculto e invisible socialmente, responde a un reparto interesado e injusto del trabajo en la del que no sólo se benefician los hombres, sino que es fundamental para la continuidad del modelo social y económico vigente.

Contexto en el que surge la ley. Históricamente las mujeres han realizado de forma invisible y sin reconocimiento público /1 el trabajo de cuidados que ha necesitado toda la sociedad, teniendo en cuenta toda su dimensión y complejidad. La realización de estas actividades bajo una división sexual del trabajo impuesta a las mujeres, ha permitido el funcionamiento del sistema social y económico en su conjunto.

En las últimas décadas esta realidad ha ido evolucionando progresivamente hacia escenarios más complejos provocando importantes cambios en la sociedad. El proyecto de ley surge en este contexto e intenta dar respuesta a la nueva situación. Hay dos factores fundamentales que pueden ayudar a explicar por qué surge esta Ley y a qué responde su contenido: la crisis de los cuidados y el agotamiento progresivo del modelo de la globalización capitalista.

La crisis de los cuidados. La incorporación masiva de las mujeres al empleo y su creciente participación en la vida pública, han generado situaciones nuevas en cuanto al reparto del trabajo y también grandes tensiones en cuanto a las relaciones patriarcales. Estas circunstancias, junto con la falta de corresponsabilidad social por parte de la mayoría de los hombres y de las instituciones públicas respecto a las tareas del cuidado, han desembocado en una crisis y un problema social de primera magnitud.

Otros elementos importantes a tener en cuenta en esta crisis son el aumento de la esperanza de vida, no tanto de su calidad, y el modelo territorial que rige el crecimiento de las ciudades donde se concentra la mayoría de la población. En muchos casos, la necesidad de desplazarse en el área urbana para poder atender diferentes necesidades de personas del entorno familiar, resulta una dificultad insalvable. A ésto se suma la atomización del tejido social que ha acompañado al progresivo deterioro del espacio público. Esta realidad no sólo dificulta el cuidado sino que en general nos hace a todos y a todas más dependientes y menos autónomas para satisfacer nuestras necesidades básicas. Es curioso comprobar como el mismo modelo social que valora como prototipo de persona al individuo autosuficiente, es sin embargo un generador permanente de dependencia.

1/ Actualmente, hablando en términos económicos, del total de horas de trabajo anuales realizadas en el Estado español, dos terceras partes se corresponden con trabajos no remunerados en el ámbito familiar, es decir todo el trabajo de cuidados que realizan las mujeres (en un 83%), y sólo un tercio es remunerado.

El progresivo agotamiento del modelo de la globalización. El ciclo de acumulación capitalista iniciado con la llamada globalización está empezando a dar señales de una posible e importante crisis. Ya nadie pone en duda que esta crisis tendría una dimensión mundial y que afectaría a grandes sectores de población, tanto en el corazón del sistema como en los lugares periféricos. Este nuevo escenario implicaría necesariamente importantes cambios en la gestión de los recursos sociales y previsiblemente se vea acompañado de un refuerzo ideológico reaccionario que justifique las medidas “duras” que fueran necesario aplicar.

En este sentido es lógico que los intereses del capital demanden, además de otras cuestiones, cada vez más dinero público para mantener en marcha la maquinaria económica que siga permitiendo el crecimiento. Por otro lado tampoco resulta extraño, en este contexto, la reafirmación del sistema patriarcal y los valores que sustentan el machismo.

Contenido de la ley. El proyecto de ley parte de un principio positivo como es el reconocimiento del derecho individual de todas las personas a recibir atención en situación de dependencia. Sin embargo este reconocimiento no inspira la redacción del proyecto tal y como sería lógico esperar, incurriendo en graves contradicciones.

En este artículo intentaremos explicar estas contradicciones y desarrollar los aspectos a nuestro entender más relevantes del proyecto de ley, ya que por razones de espacio resulta imposible hacer una exposición detallada de todo el contenido del texto /2. Estos aspectos son: el carácter universal, las modalidades de acceso a los servicios del SND y la financiación de la ley.

El carácter universal. Podemos hablar de tres aspectos que desmontan el pretendido carácter universal del SND: el concepto de dependencia, su valoración y el acceso a los servicios del Sistema.

En el proyecto aparece definida la dependencia como: “*El estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que por razones de falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen la necesidad de asistencia y/o ayudas importantes para realizar actos corrientes en la vida diaria*”.

Esta definición supone una visión muy restrictiva de la dependencia si tenemos en cuenta la variedad de circunstancias que generan falta de autonomía o incapacidad para desarrollar la propia vida en nuestra sociedad. Por ejemplo, la falta de empleo, la precariedad laboral o el propio modelo territorial como ya se ha explicado, provocan situaciones que precisan de atención y cuidados a la vez que dificultan el desarrollo de la corresponsabilidad social para el ejercicio de estas tareas.

Tampoco esta definición reconoce algo fundamental y evidente como es la necesidad que todas las personas tenemos de recibir cuidados en diferentes momentos de nuestra vida o la variedad de situaciones que sin ser duraderas requieren de atenciones especiales. Concebir la dependencia sólo como una situación de carácter

2/ Para una lectura más detallada del Proyecto de Ley consultar *Amaranta* nº 2, publicación de la Asamblea Feminista de Madrid.

funcional y permanente, supone en la práctica considerar a la mayoría de la población “autónoma”, y en consecuencia fuera de la cobertura del SND.

El acceso a los servicios del Sistema requiere ser dependiente en alguno de los grados que estipula la ley, pero al mismo tiempo no se especifican los baremos que se aplicarían para valorar el nivel de dependencia de cada persona. Esta tarea se remite al *Consejo Territorial*, organismo señalado por la Ley para confeccionar dichos baremos entre otras funciones.

Según el Libro Blanco de la Dependencia /3, la población discapacitada para realizar actividades de la vida diaria es de 2.286.322. Sin embargo el proyecto prevé que el SND atenderá en 2015, cuando esté implantada la ley, a 1.657.400 personas. Es decir, la “universalidad” no alcanzaría al 40% de la población que el propio sistema reconoce como dependientes.

Por otro lado la cobertura del SND está limitada por la edad, la nacionalidad y el establecimiento del *sistema de copago*. La ley establece que una vez valorada la dependencia de una persona, ésta podrá acceder a los servicios del Sistema a través del *copago* en función de su renta y patrimonio incluida la vivienda. Esto supone en torno a un 33% del coste del servicio. La utilización de este criterio como fórmula supuestamente redistributiva para garantizar los servicios del SND, supondrá en la práctica que sólo las personas con unos ingresos nulos o muy escasos podrán tener un acceso real, mientras que una minoría con gran poder adquisitivo seguirá comprando los servicios que precise en el mercado y una gran mayoría con rentas medio-bajas deberá pagar un alto coste sea cual sea la opción elegida, pública o privada, para satisfacer sus necesidades.

Sin duda, esto no tiene nada que ver con un sistema de protección social que pretende ser universal, ya que restringe su aplicación por razón de edad, nivel de dependencia, nacionalidad o poder adquisitivo. Un derecho sólo será universal en la medida que sea *universalizable*, esto es sin ningún tipo de restricción o exclusión.

En este sentido, resulta especialmente llamativo el tratamiento que reciben las personas inmigrantes en el texto legal y muy específicamente las mujeres de este colectivo. No podemos olvidar que, actualmente, gran parte del trabajo de cuidados es realizado remuneradamente por ellas cuando, por diversas circunstancias, las mujeres del entorno familiar no pueden hacerse cargo de estas tareas. Ignorar en el desarrollo del proyecto de ley esta transferencia del cuidado entre mujeres, redundaría en la ocultación social de estas tareas y nos sitúa ante la injusta paradoja de constatar como quiénes están ejerciendo el cuidado no tendrán derecho a ser cuidadas.

El acceso a los servicios. La configuración de una red pública, independientemente de lo que pueda sugerir, no significa, en este caso, que los servicios que vaya a prestar el SND vayan a ser necesariamente públicos. De hecho en la redacción del proyecto se deja la puerta abierta para poder ceder presupuesto a la participación privada. Ésta

3/ Trabajo que sirvió de base para la elaboración de la Ley.

como sabemos se caracteriza por priorizar su propio beneficio frente a las necesidades sociales, tanto para crear servicios como para atender trabajos de cuidados.

Existe una modalidad de acceso especialmente preocupante por la repercusión que tendrá sobre las mujeres. Nos referimos a la posibilidad de solicitar una "ayuda" para la persona cuidadora que será percibida en función de la capacidad económica de la persona dependiente. Según se dice en el texto esta modalidad tendrá un carácter excepcional y la cuantía se recibirá en forma de prestación, no de salario. Para ello la persona cuidadora no debe estar trabajando remuneradamente, pero sí tendrá que darse de alta y cotizar a la Seguridad Social por el cobro de la prestación.

Esta modalidad pone en evidencia el talante con el que la futura ley aborda el trabajo de cuidados que realizan casi en exclusiva las mujeres y sobre las que recaerá mayoritariamente la aplicación de esta medida. Si se trata de una ayuda no debería cotizar a la Seguridad Social y si se trata de un salario ¿por qué no regularlo con todas sus consecuencias? Esta especie de "limbo jurídico" permitirá que las cuidadoras financien su propia pensión sin que puedan ejercer ningún derecho sobre su situación laboral como teóricamente puede hacerlo cualquier trabajadora.

El supuesto carácter excepcional de esta medida se contradice con los datos que el mismo proyecto aborda. En él se prevé que para 2015 haya unas 300.000 o 400.000 mujeres cuidadoras. Este número es mayor que el de plazas de residencias y centros de día (275.000 + 104.000) que también el proyecto estima. Nos encontramos con que una medida planteada como excepcional será probablemente la más aplicada, pues tampoco hay que olvidar que al establecer el sistema de *copago*, la tendencia social mayoritaria sea probablemente la de solicitar una ayuda antes que "copagar" por un servicio.

Desde un punto de vista feminista crítico resulta totalmente inadmisibles que por un lado, en la declaración de principios del proyecto de ley, se reconozca el injusto reparto del trabajo de cuidados que realizan las mujeres en la sociedad, y por otro se legisle potenciando la continuidad de esta situación.

Dentro del movimiento feminista se ha criticado el pago de un salario al ama de casa o mujer cuidadora por entender que esto refuerza el confinamiento de las mujeres al ámbito privado. Al mismo tiempo también se ha reivindicado el reconocimiento del trabajo de cuidados. En este sentido resulta muy positivo que las mujeres que están realizando estas tareas a costa de su propio deterioro personal y profesional, obtengan los mismos beneficios sociales que cualquier persona empleada. Sin embargo esta situación debe ser transitoria y realmente excepcional, pues en caso contrario nos encontraremos con la reafirmación social del modelo de mujer cuidadora, en vez de avanzar hacia el reconocimiento y la corresponsabilidad social del cuidado.

La financiación. Se estima que la implantación total del sistema costará hasta 2015 unos 9.355 millones de euros. Un 19% de esta cantidad (1.777 millones) corresponde a lo que las Administraciones ya invierten en servicios sociales. Un 33,7% lo pagarán las y los usuarios del sistema (3.152 millones) y el 47% restante (4.425 millones) lo aportarán la Administración del Estado y las Comunidades a un 50% (23,5% cada

una). Esto significa, según los datos técnicos de la Memoria Económica, que el coste medio por beneficiario, cuando esté totalmente implantado el sistema, será de unos 375 €. De éstos 126,3 (el 33,7% del total) serán abonados por el usuario(a) del SND, como término medio, respetando el criterio de los porcentajes y por la vía del *copago*.

Según declaraciones del propio Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, *“la financiación del SND es una inversión productiva, que genera empleo y mejora la productividad y la tasa de crecimiento. En consecuencia esta inversión tiene una tasa de retorno importante: por cada euro que inviertes puedes recuperar entre 0,3 y 0,7% €”*.

Resulta evidente la importancia del montante económico (9.355 millones de euros) que va a financiar la puesta en marcha del SND. Esta cantidad supone un 1% del PIB y va a tener una trascendencia de gran magnitud para la economía nacional. Por un lado el mercado se verá beneficiado con una gran inyección de dinero público con el que se acometerán las inversiones necesarias, fundamentalmente por la iniciativa privada, para poner en funcionamiento el SND. Por otro, la creación de los al menos 300.000 puestos de trabajo previstos, ayudará a maquillar las cifras macroeconómicas independientemente de que estos empleos no sean de creación pública y además estén sometidos, como lo están ahora en el sector servicios, a condiciones de notable precariedad.

El impacto económico previsto para la puesta en marcha del SND, supondrá que de la inversión inicial del 47% que deben aportar el Estado y las Comunidades, se podrá recuperar una parte importante. Esto se debe a los ingresos que obtendrán las Administraciones a través de los impuestos generados por las inversiones en infraestructuras y la creación de empleo que se espera. Sólo hay que pensar en las trescientas ó cuatrocientas mil mujeres que se estima recurrirán a la modalidad de ayuda económica para el cuidado del dependiente en casa. Estas mujeres cotizarán a la Seguridad Social figurando como empleadas, disminuyendo así la gran tasa de paro femenino, aunque en realidad continúen realizando las mismas tareas y en las mismas condiciones, eso sí, recibiendo una pequeña ayuda.

Se renuncia claramente a una gestión pública de los recursos y a una financiación realmente redistributiva como lo sería un sistema fiscal progresivo, en el que se impidiera el fraude y se garantizara un servicio universal por el que pagarían más los que más tienen. Frente a esto, lo que la ley dispone son beneficios fiscales para quienes puedan permitirse suscribir un seguro privado de dependencia.

En lo relativo a la financiación del Sistema por las Administraciones Públicas se afirma que la previsión de *“la financiación del Sistema será la que se determine en los presupuestos de las Administraciones Públicas competentes”*. Es preocupante que tampoco esta redacción incluya la garantía de que los recursos siempre deberán ser suficientes para preservar los derechos que la Ley dice reconocer. Es decir, el derecho de toda persona dependiente a ser atendida en condiciones dignas.

Algunas conclusiones. El Proyecto de Ley de Autonomía Personal y atención a la Dependencia resulta decepcionante en cuanto a la expectativa social que ha generado ya que las soluciones que aporta en torno al cuidado no garantiza el derecho

de todas las personas a recibir las atenciones que precisen en condiciones dignas, y potencia la continuidad de la asignación del trabajo de cuidados a las mujeres.

Un análisis detallado del texto permite afirmar que la crisis de los cuidados instalada en la sociedad no se resolverá positivamente para las mujeres. Reconocer el trabajo de cuidados que éstas realizan tiene un importante valor simbólico, pero ninguna capacidad transformadora, si no se acompaña de medidas concretas encaminadas a poner fin al injusto reparto del trabajo entre hombres y mujeres, a terminar con el modelo que permite descargar sobre ellas una responsabilidad que es de toda la sociedad, y a establecer mecanismos de participación social además de la implicación de las Instituciones en las tareas de cuidados.

Denominar a este proyecto de ley “el cuarto pilar del Estado del Bienestar”, situándolo al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones, no sólo resulta pretencioso sino que además no se ajusta a la verdad tal y como se desprende del texto. Todos los servicios derivados del Estado Social en nuestro país responden a criterios de universalidad, es decir son servicios a los que accede gratuitamente toda la población sin restricciones, y que se financian a través de la recaudación de impuestos por el sistema fiscal. Además estos servicios, independientemente de las deficiencias en su funcionamiento, responden a necesidades sociales sin que el mercado participe directamente en su gestión. Desde este punto de vista, la estructura del SND más bien contribuye a dismantelar el Estado del Bienestar que a desarrollarlo, ya que se renuncia claramente a desarrollar un sistema redistributivo cuyo objetivo prioritario sea garantizar servicios de protección social.

Es cierto que la puesta en marcha de la ley supondrá para las personas más afectadas por su discapacidad una mejora de su situación. Sin embargo tampoco hay que olvidar que también van a beneficiarse y mucho otros sectores que nada tienen que ver con la dependencia. La gran inversión de dinero público prevista y la gestión de este dinero en manos privadas será un factor nada despreciable para dinamizar la economía, sobre todo ante un posible escenario de crisis. Por otro lado, esta futura ley también resultará electoralmente rentable ya que se presenta como una solución, aunque de forma engañosa, a una problemática a la que es sensible una parte importante de la población como son las mujeres en su calidad de cuidadoras y personas en situación de dependencia como las y los ancianos, discapacitados y enfermos.

Es indiscutible la necesidad de regular y afrontar las tareas de cuidado, pero esto debe hacerse desde la corresponsabilidad social de todos y todas para lo cual es determinante la implicación de las Administraciones Públicas. Desde esta perspectiva es fundamental caminar hacia modelos alternativos basados en principios de igualdad que permitan sacar del ámbito familiar la obligación de cuidar y la puesta en marcha de iniciativas públicas que pongan los recursos sociales en función de estas necesidades en vez de en función del beneficio, rentabilidad o dinamización del mercado. El cuidado a personas dependientes es una responsabilidad social prioritaria que debe ser asumida como tal de forma justa, equitativa y no discriminatoria.

Ana Hernando es miembro de la Asamblea Feminista de Madrid.

Coincidiendo con el crecimiento del número de inmigrantes llegados a las costas canarias, efecto directo del cierre de la frontera con Marruecos, hemos conocido una verdadera avalancha de manifestaciones y pronunciamientos de nuestros políticos.

Desde el gobierno canario y el partido que lo sustenta, Coalición Canaria (CC), arreciaron las críticas al gobierno central por su dejadez y falta de previsión. Así el portavoz del gobierno canario, Miguel Becerra, aprovechando el impacto mediático de un fin de semana en el que se alcanzaban las cifras récord de llegada de inmigrantes, mezclando churras con merinas, declaraba que al gobierno de Zapatero le preocupaba Bolivia, pero no Canarias, añadiendo a continuación que la situación era “*gravísima*”. Pero quizás la manifestación más reveladora del citado portavoz fuera la frase: “*Da la sensación de que se da más importancia a las inversiones económicas*”. ¿Se trató de un desliz del señor Becerra achacable a la tensión del momento o fue más bien que le traicionó el subconsciente? Y es que justo al día siguiente el consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, encabezaba la delegación de una treintena de empresas canarias que asistiría durante cinco días a un encuentro empresarial en Nouakchott (Mauritania).

Al calor del mismo evento, el secretario general de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, afirmaba que las inversiones canarias en Mauritania ayudarían a fortalecer su desarrollo y, de esta forma, colaboraría a frenar el fenómeno de la inmigración. Objetivos más que loables a los que contribuirían también los proyectos ya en curso en infraestructuras portuarias, aeroportuarias y terrestres para mejorar la conectividad regional. La importancia de estos objetivos, la gravedad del problema de la inmigración y la inactividad del gobierno central bien justificaban el trabajo sin descanso de los responsables de la Consejería de Economía y Hacienda en esos días. Aunque su titular se encontrase en Mauritania, esa misma semana la citada Consejería organizaba un seminario para diseñar acciones incluidas en el denominado Plan de Gran Vecindad. Plan que permitirá destinar un 10% de los Fondos Europeos de Desarrollo a la cooperación comercial con Marruecos. Además, el ejecutivo canario, ya está buscando instrumentos similares para impulsar las relaciones con Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Noticias como éstas compartían página, bajo el mismo titular general de “*El drama de la inmigración*”, con el recuento diario de los cayucos llegados a nuestras costas.

La ayuda al desarrollo como solución. Entre las alternativas barajadas para frenar la llegada de inmigrantes del continente africano a las Islas Canarias, además del control y la vigilancia exterior, ha tenido especial relevancia la ayuda al desarrollo a los países emisores.

Hace ya algunos años, coincidiendo con su inesperada dimisión como director general del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, concedía una entrevista

al diario *El País* en la que la periodista se hacía eco de las críticas que arreciaban sobre la citada institución financiera, desde un organismo hermano como el Banco Mundial y desde el mismísimo Congreso norteamericano. En ambos foros, por otra parte nada sospechosos de estar movidos por intereses filantrópicos, recriminaban al equipo dirigente del FMI que se hubiera producido un crecimiento sin precedentes de las desigualdades entre ricos y pobres, así como un gran descenso de la calidad y esperanza de vida, precisamente en lugares donde más dinero había inyectado el FMI durante los trece años de mandato de Camdessus, entre ellos el continente africano.

En los últimos cuatro años, África subsahariana (700 millones de habitantes) recibió 15 veces más ayuda que India (algo más de 1.000 millones de habitantes). En cerca de 22 países africanos la ayuda internacional llega a suponer más del 10% del PIB nacional; y en 18, la ayuda supone más del 50% de los recursos totales del Estado /1. Muestras todas muy elocuentes, no sólo de que el dinero no trae la felicidad, sino de que, según parece, tampoco el desarrollo. A pesar de los fondos destinados a ayuda al desarrollo, la gran mayoría de la población africana sigue sumida en la pobreza. Así lo reconocía el que ya en esas fechas era ex director del FMI: “*en África se ha producido un retroceso constante en los últimos veinte años*”. Pese a ello cada vez se recurre con mayor insistencia a la más retórica compasiva con la que se pretende compensar los “fallos del mercado”.

Como quiera que un análisis en profundidad sobre el impacto de la cooperación al desarrollo en la lucha contra la pobreza desborda los límites de este artículo, nos limitaremos a recordar que tanto las distintas escuelas económicas, como los estudios empíricos realizados, señalan que hasta la fecha la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no ha registrado logros notables en la reducción de la pobreza y la desigualdad /2. Esto cuando menos debería recomendar prudencia a quienes se apresuran a ejercer de asesores económicos, ya que es poco lo que se conoce sobre los factores que garantizan el desarrollo. Sin embargo, sí que están demostrados los perjuicios que causa el predominio de los intereses del donante en la cooperación al desarrollo. Llegando a identificarse como una de las principales fuentes de incoherencia en las políticas que tienen por objeto el desarrollo. Particularmente cuando prevalecen objetivos como conseguir la apertura —o un tratamiento favorable— a las inversiones de los operadores económicos del país donante, o cuando éste último pretende simplemente garantizarse mercados de exportación. Por eso, cuando a raíz de la llegada de inmigrantes a nuestras costas se invoca la milagrosa intervención de la ayuda al desarrollo, nos parece oportuno hacer memoria y recordar la orientación política que ha marcado las actuaciones en materia de cooperación al desarrollo durante las dos últimas legislaturas en Canarias y su absoluta subordinación a la internacionalización de su economía.

“Nosotros los africanos”. Con estas palabras comenzaba el pasado mes de mayo su ponencia sobre “*conectividad*” José Carlos Mauricio, consejero de Econo-

1/ Iglesia-Caruncho, M. (2005): *El impacto económico y social de la cooperación para el desarrollo*. Madrid: Catarata, p. 161.

2/ Alonso, J.A. “Promesa incumplida”. *El País*, 26/03/2006.

mía y Hacienda, ante un nutrido grupo de autoridades mauritanas y empresarios de las islas. Esta nueva argucia dialéctica no será más que una de las últimas puestas en escena de una supuesta vocación africanista decidida con varios años antelación.

Al iniciarse la década actual, comienza a publicitarse, tanto por parte de los responsables gubernamentales como por parte de los representantes de las Cámaras de Comercio provinciales, la estrategia de internacionalización de las empresas canarias. Ya entonces las cifras de las exportaciones comerciales al continente se presentaban como prueba irrefutable del interés del empresariado canario por la costa occidental africana. Al tiempo que los responsables de la administración autonómica aclaraban que su punto de mira estaba centrado en el sector servicios. Revelando al mismo tiempo la razón principal de esta elección; se trataba de una actividad que contaba con financiación internacional y particularmente de la UE. Desde entonces una de las frases más repetida ha sido que nuestro archipiélago debe aprovechar su privilegiada situación geoestratégica para canalizar fondos de inversión hacia el África próxima. Con el objetivo declarado de convertir al archipiélago en una plataforma de conexión y logística comercial entre América, África occidental y Europa. Emulando así, ejemplos como los de Miami, Hong Kong o Dubai en otras zonas del planeta.

Comenzaba su andadura lo que algunos denominaron una política integral de Canarias hacia África occidental. Una política que en palabras del Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, pretendía integrar *“promoción comercial, acceso a fondos internacionales, cooperación al desarrollo, proyectos humanitarios, programas formativos, nuevas tecnologías, etcétera”* /3. Se trataba de convertir *“Canarias en interlocutor de cualquier iniciativa que parta de la Unión Europea o, incluso, de América hacia los países que conforman la costa occidental de África”*, declaraban al unísono los presidentes de las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Con objeto de *“diversificar la economía canaria más allá del monocultivo del turismo e incrementar la oferta de las empresas, apoyando la internacionalización de nuevos sectores, sobre todo, del área de servicios”*. La utilización prácticamente unánime de los mismos términos por parte de nuestros políticos en las últimas semanas seguramente es algo más que una simple casualidad.

Sin embargo las coincidencias entre la clase empresarial canaria y los rectores de la consejería de economía en nuestras islas no es algo de última hora. En las fechas en que Adán Martín era vicepresidente del Gobierno y consejero de economía, sentenciaba ante una asamblea de las cámaras de comercio: *“la vocación de liderazgo de nuestro archipiélago es un objetivo irrenunciable avalado por el privilegiado enclave geográfico de nuestras islas unido a la experiencia en materia turística y al dominio del área de servicios”*. Para continuar con la aclaración sobre las líneas de actuación de su gobierno: *“no sólo estamos propulsando la emprendeduría y la participación de las empresas canarias (...), sino que estamos desarrollando nu-*

3/ González Santiago, P. “África por encima de rivalidades”. *La Gaceta de Canarias*, 30/08/2001.

meras campañas de cooperación en ámbitos como la sanidad, formación, medio ambiente y energías renovables y desalinización de agua de mar”.

También ya por entonces se aseguraba *“la mejor forma de evitar que los africanos emigren es creando riqueza y desarrollo en sus países de origen”.* Y como esto podía ir para largo pronto surgirá otro de los objetivos más repetidos, entre tópicos sobre la inmigración, por los dirigentes políticos y la clase empresarial canaria: *“convertir el archipiélago en centro canalizador de la cooperación europea al desarrollo en África occidental”.*

De este modo la internacionalización de la economía canaria y la cooperación al desarrollo quedarán indisolublemente unidas como líneas de actuación complementarias en la acción exterior del gobierno regional. Así lo expresaba Luis Padilla, director General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, al anunciar que el Plan Director de Cooperación al Desarrollo *“se centrará en proyectos que complementen las acciones promocionales de las Cámaras de Comercio canarias. Comercio más ayudas (a la cooperación), ése es el binomio que queremos reforzar”.* De lo cual no quedaba ninguna duda con las cifras aportadas por este mismo responsable, ya que en el periodo 2001-2003 mientras los proyectos de desarrollo realizados en África alcanzaron una cifra próxima a los ocho millones de euros, los desarrollados en América sumaron algo más de los cuatro millones. Invirtiéndose en apenas dos años lo que había sido la orientación prioritaria de la cooperación canaria, más centrada tradicionalmente en el continente americano.

Tampoco la actuación de las ONGD podía escapar al cambio decretado en lo referente a las prioridades geográficas. Tal como recoge el estudio elaborado por la Confederación de ONGD de Canarias /4, mientras en la convocatoria de 1995 apenas un 20% de los fondos gestionados por las ONGD fueron a parar a proyectos realizados en el continente africano, en 2002 se llegó al 43%. Transformación claramente inducida desde la Viceconsejería de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la época, a través de los baremos utilizados para puntuar los proyectos. De tal modo que en la convocatoria del año 2000, los proyectos para los países priorizados se premiaban con 62 puntos y sin embargo el hecho de que se tratase de un proyecto orientado a combatir la pobreza tan solo se valoraba con 16 puntos. Igualmente, al año siguiente los proyectos que tomaran en cuenta los indicadores básicos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, obtenían 10 puntos, mientras que los presentados para algunos de los 11 países elegidos por el Gobierno de Canarias (de África serían Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Marruecos) se les otorgaba 50.

“El negocio del desarrollo”. La autoría de esta expresión corresponde a James D. Wolfensonhn, para quien el Banco Mundial debía liderar el negocio del desarro-

4/ Confederación de ONGD de Canarias (2003): *La Cooperación Oficial Descentralizada en la Comunidad Autónoma de Canarias: Análisis y Propuestas.* La Laguna (Tenerife).

llo. El mismo objetivo persiguen hoy en Canarias quienes, al calor de la llegada de inmigrantes, pretenden sacar partido a la “ventaja de situación” del archipiélago.

A través de la promoción exterior de las empresas, del desarrollismo en infraestructuras de transporte, de las Zonas Francas, de la UE con su programa INTE-RREG y de instrumentos de acción exterior, como los de Vecindad y Partenariado, mediante la cooperación al desarrollo o la cooperación económica, donde además las Regiones Ultraperiféricas (RUP) tendrán un papel especial, se pretende consolidar el papel de Canarias como plataforma de servicios y cooperación hacia África. En este ambiente de euforia mercantilista cada vez se escuchan más voces que reclaman incluso la posibilidad de disponer de los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para invertir en África ⁵. El objetivo es bien claro, seguir utilizando las subvenciones europeas y los beneficios fiscales que tan rentables han sido para los sectores político-empresariales hegemónicos en Canarias durante las últimas décadas, ahora para lo que ya se empieza a denominar la recolonización de África. Se trata de la estrategia de quienes apoyándose en los resortes del poder político persiguen integrar a Canarias en el proceso de globalización capitalista, al tiempo que pretenden perpetuarse en su histórico rol de intermediarios.

Esta apuesta de largo recorrido ha conocido en los dos últimos años un decidido impulso coincidiendo con la segunda parte de una legislatura en la que, curiosamente, CC ha gobernado con los apoyos puntuales de PSOE y/o PP. En el debate de la nación del pasado año el portavoz de CC, Paulino Rivero, citando al dirigente laboralista británico Gordon Brown, quien dijera aquello de que “*África es la tierra de las oportunidades*”, lograba arrancar a Zapatero el compromiso para crear una comisión mixta Estado-Comunidad Autónoma para estudiar el papel de Canarias como plataforma logística tri-continental y su proyección económica en África. En las mismas fechas se celebraba en Tenerife un seminario sobre África Subsahariana en el que estuvieron presentes los embajadores españoles en la zona y miembros del gobierno regional, con el que se pretendía promocionar la proyección internacional de Canarias en el continente. En el mismo encuentro alguno de los embajadores presentes llegó a la conclusión de que la cooperación española en África debía “hablar con acento canario”. Sin embargo la decisión más publicitada fue la creación de la Casa de África en Las Palmas y que apenas un año más tarde ha sido inaugurada por el ministro Moratinos. Algunas de las frases de la editorial del periódico *El Día* para protestar contra una decisión que supuestamente, una vez más, marginaba a Tenerife son muy elocuentes: “*Son muchos millones de euros que se mueven en la ayuda española y canaria al desarrollo del Tercer Mundo (...). Eso se traduce en construcción de infraestructuras y servicios básicos en esos lugares, en otras palabras, en inversiones cuantiosas*”.

No era la primera vez que las pugnas entre diferentes sectores del empresariado canario por el reparto de prebendas salían a la luz pública. Algunos recordarán el conflicto que hace unos años se produjo entre las cámaras de comercio de las dos

⁵/ Este instrumento fiscal, aprobado con el acuerdo unánime de CC, PP y PSOE, permite a las empresas canarias destinar el 90% de sus beneficios a la RIC y tributar sólo por el 10% restante.

provincias a cuenta de un contrato para la fabricación de harinas para el Plan de Alimentación Mundial (PAM). En aquella ocasión dos empresas productoras de gofío, una de cada provincia, competían por un contrato de 300 millones de las antiguas pesetas al año. Mucho más sustanciosa (28 millones de euros) era la cifra que recientemente desataba el conflicto en el interior de la propia CC por el control de los fondos que la UE remitirá a Canarias para acciones de cooperación con Marruecos. Noticias todas bastante reveladoras sobre lo atractivo y sustancioso que puede resultar *“el negocio del desarrollo”*.

Otro de los grandes eventos en esta carrera para convertir a las islas en plataforma logística atlántica lo constituyó la visita, en julio del año pasado, de Bill Clinton a Tenerife. El ex mandatario de EE UU, haciendo gala de sus mejores dotes proféticas, vislumbró la capacidad de Canarias para erigirse como punto neurálgico de la cooperación norteamericana y europea. Pocos meses después el diario *El País* destacaba en su sección de economía *“Estados Unidos quiere convertir las islas en un centro de operaciones para sus inversiones en África”*. Una vez más el interés del asunto estará en la posibilidad de intermediar en los flujos de financiación internacional. Ahora con el aliciente añadido del acuerdo adoptado en la reunión del G-8 de Gleneagles (Escocia) que supondrá aumentar la ayuda al continente africano a 42.000 millones de euros anuales hasta 2010 y cancelar deuda por valor de 45.000 millones a cambio de que se transformen en inversión directa en infraestructuras, educación y modernización de las administraciones. Le faltó tiempo a Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife y anfitrión de Clinton, para postular: *“Nosotros (las islas) podemos canalizar esas ayudas para que lleguen a sus destinatarios con pocas fisuras, y estamos hablando de miles de millones de dólares”*. Al fin y al cabo, entre tantos millones unas “pocas fisuras” no se van a notar.

Cooperación de salón. La realización del I Salón de la Cooperación Internacional en Tenerife, a finales del mes de junio, ha sido el último acto de la permanente representación que supone la cooperación al desarrollo para los responsables políticos en Canarias. Ha sido un nuevo evento donde escenificar el supuesto “objetivo compartido” por las ONGD, las instituciones públicas, las empresas privadas y la “sociedad civil”, tanto del Norte como del Sur. Pero este episodio ni ha sido el primero ni será el último en la apuesta decidida por subordinar la cooperación al desarrollo a los intereses políticos y económicos. Por eso tiene su importancia pronunciamientos como el de la Confederación de ONGD de Canarias calificando de *“salón de negocios”* esta nueva iniciativa. En el mismo encuentro el presidente del gobierno canario, Adán Martín, reafirmó las aspiraciones del Archipiélago a convertirse en Frontera Sur de Europa y que la Comisión Europea dotase *“de suficiente músculo financiero al instrumento de Gran Vecindad”*. Así respondía el presidente regional a la invitación de Moratinos para convertir Canarias en *“eje de las políticas de desarrollo”* con África.

En esa representación permanente a la que estamos acostumbrados en Canarias, en ningún caso exclusiva del ámbito de la cooperación al desarrollo, las cifras tienen un

papel principal. Por eso Adán Martín aprovechó la ocasión que le brindaba el citado evento para informar que entre 1995 y 2005 Canarias había desarrollado más de 600 proyectos de cooperación, el 70% de ellos en el continente africano. Sin embargo muy poco, por no decir prácticamente nada, se conoce acerca del impacto alcanzado por esa ingente cantidad de proyectos. El documento publicado por el gobierno de Canarias, único en más de diez años, que más información ofrece se limita a presentar la recopilación de cantidades destinadas por proyectos y países de África /6. Sobre los resultados logrados en el mejor de los casos se limita a ofrecer cifras que confunden el número de mujeres participantes en un proyecto con cuantas de ellas alcanzan los beneficios previstos, o simplemente se presenta una relación de actividades sin aclarar su grado de contribución a los resultados esperados. De ese extenso listado de más de 600 proyectos, ni de uno solo se conoce en qué medida el objetivo propuesto se ha alcanzado, qué relación guardan los resultados logrados con el esfuerzo realizado, qué vinculación existe entre los proyectos y las prioridades de las comunidades de población con las que se ha trabajado, qué cambios y efectos se han generado y en qué medida continuarán finalizada la ayuda externa.

Sin embargo cada cierto tiempo se hacen declaraciones públicas en las que la cooperación al desarrollo realizada desde las islas parece gozar de un dinamismo y crecimiento sin precedente. Lástima que luego aparezcan documentos como el *Seguimiento del Plan Anual de Cooperación de 2004* y delate que en dicho año se produjo un descenso del 34% en las aportaciones de AOD de la Comunidad Autónoma Canaria. Más relevante que el dato porcentual, como siempre suele ocurrir, es la razón: *“Esta disminución se explica por haberse dejado de computar este año las ayudas de carácter multisectorial dirigidas a cubrir las necesidades sociales básicas de la población de origen canario residente en América Latina, que en 2003 supuso un desembolso de más de dos millones de euros”* /7. Sin embargo esto, que era un secreto a voces, venía produciéndose desde hace años tal como puede leerse en el estudio publicado por la Confederación de ONGD de Canarias: *“Son especialmente significativas las cantidades dedicadas, durante los años 1998, 2000 y 2001, a las ayudas a la comunidad canaria y a las entidades en el exterior. En las tres ocasiones superan el 40% del presupuesto total, llegando incluso a rozar el 50% en el último de los años citados”* /8.

Pero quizás lo que más pueda sorprender, pues contradice la práctica habitual a la hora de calcular los fondos destinados a AOD, es la inclusión en este rubro no sólo de los fondos propios, sino también de *“los recursos financieros externos captados por el gobierno de Canarias para la cooperación al desarrollo”* /9. Para que nos hagamos una idea de lo que esto puede significar, según recoge la citada memoria de la Dirección General de Relaciones con África, el total de proyectos financiados

6/ Dirección General de Relaciones con África (2005): *Memoria 1995-2004*.

7/ Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (2006): *Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional 2004*. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. p. 94.

8/ Op. Cit., p. 8.

9/ Op. Cit., p. 51.

por ella en Mauritania entre 1995 y 2004 representó prácticamente la misma cantidad en euros que la que gestionara en el mismo país en proyectos de INTERREG. La diferencia es que mientras en el primer caso hablamos de más de cincuenta proyectos en el segundo hablamos tan solo de dos. Igual tratamiento da la citada Dirección General a los fondos aportados por la Agencia Española de Cooperación (AECI) al Plan Operativo firmado entre ambas administraciones y que en 2004 supuso la nada despreciable cantidad de 1.215.842 de euros frente a los 470.000 aportados por el gobierno regional. Este recurso de ingeniería contable eleva artificialmente el esfuerzo presupuestario en materia de cooperación al desarrollo al computar como aportación propia lo que en realidad son recursos aportados por otras administraciones.

En este entramado de cifras maquilladas, medias verdades y declaraciones de salón no es de extrañar que desde las altas instancias del gobierno regional se insista desesperadamente en reclamar un premio Príncipe de Asturias para una de nuestras ONG *GRINGO* ¹⁰, única forma de avalar una política de cooperación al desarrollo que hasta la fecha no merece tal calificativo.

Enrique Venegas Sánchez participa en el movimiento de solidaridad en Canarias desde hace más de una década. Durante los últimos tres años ha sido cooperante en Mauritania.

^{10/} Roland Roth en su artículo “Las ONG y las políticas internacionales” en Vidal Beneyto, J. (dirección) (2003). *Hacia una sociedad civil global*. Madrid: Santillana Ediciones Generales, S.L., pp. 245-287, habla de diferentes tipos de ONG que por su acrónimos en inglés se conocen como: QUANGO (quasi ONG), GONGO (ONG organizadas por el gobierno), BONGO (ONG organizadas por las empresas) y GRINGO (ONG gestionadas/iniciadas por el gobierno).

Cambio de ciclo en Catalunya

Martí Caussa

El referéndum sobre el Estatut ha marcado el final de una etapa política en Catalunya, caracterizada por el intento de elevar el techo de autogobierno y de consolidar un gobierno de la izquierda parlamentaria formado por el tripartito entre el PSC, ERC y ICV. Paradójicamente el primer objetivo se ha cumplido parcialmente con la aprobación del Estatut, a costa de hundir al gobierno que lo había impulsado y de acelerar la vuelta al poder de CiU, la coalición que se había negado obstinadamente a reformar el viejo Estatut para no comprometer su alianza con el PP, partido que ha sido y es un feroz enemigo de cualquier aumento significativo del autogobierno catalán. El primer presidente socialista catalán, Pascual Maragall, ha visto como su cabeza y el nuevo Estatut eran ofrecidos en bandeja de plata a Artur Mas, su principal adversario político, por el presidente socialista español a quien había aupado a la presidencia del PSOE y del gobierno español y a quien había presentado como garante de la “España plural”.

Después del referéndum y de la forzada renuncia de Maragall a encabezar la lista del PSC, la consecuencia más probable es que no habrá nuevo gobierno tripartito en

Catalunya, ya sea porque los tres partidos no sumarán suficientes diputados (dado el previsible descenso de PSC y ERC), ya sea porque Montilla y el PSC/PSOE no querrán reeditararlo y, en caso de querer, no tendrán la capacidad para hacerlo.

Los cuatro pilares del tripartito. Es necesario recordar que la experiencia del tripartito en Catalunya fue posible gracias a una suma de factores difícilmente repetible:

1) En primer lugar, el desgaste y la impopularidad de CiU por su alianza con la política ultrareaccionaria del PP.

2) En segundo lugar, la lucidez política de Maragall al comprender que la hegemonía política en Catalunya sólo era posible en forma de coalición y encabezando la reivindicación nacional, rompiendo la vieja lógica del socialismo catalán que despreciaba la primera y cedía el protagonismo de la segunda al nacionalismo de derechas (primero a Tarradellas y luego a Pujol). A los que opinan que hacía falta más reivindicación social y menos Estatut, se les debe dar la razón en la primera parte, pero recordarles que sin la segunda no habría habido alianza con ERC ni gobierno de izquierdas.

3) En tercer lugar, el acierto de ERC en capitalizar el desgaste de CiU, abandonando la equidistancia y aceptando una coalición de izquierdas por un lado, y, por otro, apadrinando la reforma del Estatut sin renunciar al objetivo final de la independencia. Porque lo que estaba al orden del día en Catalunya no era la independencia o la autodeterminación (objetivos mayores para los que hace falta una relación de fuerzas mucho mayor) sino más autogobierno, especialmente más competencias y mejores garantías para las mismas, financiación suficiente y mayor reconocimiento de los símbolos nacionales.

4) En cuarto lugar, el acierto de Zapatero al recoger la idea de la España plural, desmarcándose del sector más centralista de su propio partido, que culminaría en su famosa frase de *“aceptar el Estatut que aprobaran los catalanes”*. Esta actitud entreabrió una puerta a la esperanza, que había permanecido cerrada desde el final de la transición.

Después del referéndum, los cuatro pilares del tripartito están en proceso de derrumbe. La consecuencia es que la hegemonía política en Catalunya retornará probablemente a manos de CiU, (aunque sea de forma precaria), más por falta de alternativa que por méritos propios, quien seguramente sabrá manejar la situación porque tiene una demostrada capacidad de maniobra y varias alternativas de gobierno: en minoría con el apoyo puntual de PSC y/o ERC, o en alianza con el PSC, o con ERC si ésta recupera la equidistancia, o de nuevo con el PP, por mucho que los *pinochos* de CiU juren ahora que no volverán a las andadas.

Las razones del cambio de ciclo. Para comprender el fracaso del tripartito hay que analizar tanto lo que ha ocurrido en Catalunya como en el conjunto del Estado.

En Catalunya merece la pena subrayar que el fracaso del tripartito no se debe a que haya optado por un proyecto demasiado moderado en el Parlament (al abandonar la autodeterminación y la independencia), como opina un sector del nacionalismo radical, o

por un proyecto demasiado radical e inconstitucional, como han afirmado el PP, un sector del PSOE y muchos medios de comunicación. La autodeterminación y la independencia estaban excluidas por la relación de fuerzas. La supuestas radicalidad e inconstitucionalidad han sido inventadas o exageradas por una campaña demagógica y sucia, aunque muy rentable. La voluntad política del Parlament fue hacer un Estatut que cupiera en la Constitución, que presionara en sus bordes pero no la desbordara. Es decir, apelar a una interpretación flexible de la Constitución, pero renunciar a cualquier reforma de la misma, porque no había ningún parlamentario tan iluso como para pensar que el PP consentiría en ello. Este proyecto es el que se ha frustrado.

En cambio sí ha sido un factor de debilidad que ni el gobierno ni los partidos que lo apoyaban hayan estimulado las simpatías sociales hacia su proyecto, ni recurrido a la movilización para defenderlo. Lo primero necesitaba integrar la defensa del nuevo Estatut con reivindicaciones sociales sentidas. Lo segundo recurrir a la movilización contra los recortes y la agresiva campaña del PP y la *Brunete mediática*. La única movilización social importante fue la gran manifestación del 18 de febrero, que fue organizada al margen del tripartito y a la que sólo se sumó, tardíamente, ERC; pero el objetivo explícito de esta manifestación no era la defensa del proyecto del Parlament, sino del derecho de Catalunya a decidir. Renunciando a la movilización social, el tripartito confió su proyecto de Estatut a la relación de fuerzas parlamentarias que, como veremos, era muy volátil.

Dentro del tripartito, sólo Maragall parece haber comprendido que el éxito del nuevo Estatut dependía no sólo de Catalunya, sino también del resto del Estado. En todo caso es el único que, a parte de confiar en Zapatero, ha tenido algunos gestos que buscaban la complicidad de la opinión pública española, mientras que ERC ha cometido varios errores que le han enemistado con esta opinión.

Reconocer que el éxito de la reivindicación nacional catalana depende tanto de lo que ocurra en el Estado español como de lo ocurra en Catalunya parece que debería ser una premisa política asumida, pero el único que ha jugado a fondo esta baza ha sido el PP. Las condiciones de partida en el conjunto del Estado no eran buenas para el nuevo Estatut. Desde hace años las simpatías de la opinión pública española hacia las reivindicaciones nacionales son muy débiles (en buena medida como reacción a las acciones de ETA) y el anticatalanismo latente (aunque no se exprese abiertamente) es muy fuerte y fácil de explotar. A ello se ha dedicado en cuerpo y alma el PP.

El partido de Rajoy ha organizado una gran movilización social de derechas, con objetivos diversificados y muy reaccionarios, pero relacionados entre sí y en los que la oposición al nuevo Estatut ocupaba un lugar central. El gran apoyo institucional y mediático que ha conseguido esta campaña no debe hacer olvidar su componente de movilización social, que es muy superior al de cualquier época pasada y, desde luego, al de todos los partidos de la izquierda parlamentaria. La contrapartida es que esta campaña ha debilitado al PP en Catalunya y lo ha aislado en el Parlamento de Madrid.

La campaña del PP, como efecto colateral, ha contribuido a desplazar la relación de fuerzas dentro de los demás partidos y, en consecuencia, a modificar la relación de fuerzas parlamentaria, la única en que confiaba el tripartito:

a) Ha estimulado al poderoso sector ultraespañolista del PSOE y al sector más dócil del PSC.

b) Ha reforzado al sector *realista* de CiU y ha permitido que la pirueta de Mas, al pasar de la puja soberanista en el Parlament a las rebajas previas a la foto con Zapatero, se saldara sin costes políticos.

c) Ha exacerbado las contradicciones en ERC, presionada para girar a la derecha para conservar el gobierno, y para hacerlo a la izquierda para conservar la dignidad soberanista ante sus bases. Incapaz de encontrar una línea clara ha mantenido activados los dos intermitentes y ha desconcertado a todo el mundo.

Al cambio de relaciones de fuerzas políticas y parlamentarias también han contribuido los errores propios de los socios del tripartito y sus teóricos garantes, así como los aciertos de sus adversarios:

a) En primerísimo plano, la falta de firmeza de Zapatero en sus promesas, que culminó en su pacto con Artur Mas. La credibilidad de la “España plural” pasaba, tal como había prometido, en apoyar el Estatut que había aprobado el Parlament con una amplísima mayoría, sin más modificaciones que las impuesta por una interpretación razonable y flexible de la Constitución. Debía haber mostrado el coraje y la voluntad política suficientes para aguantar la ofensiva del PP y de los ultraespañolistas de sus propias filas (Bono, Rodríguez Ibarra, Rosa Díez y compañía), con la tranquilidad de que ERC le garantizaba una mayoría parlamentaria suficiente y que CiU no podía oponerse al nuevo Estatut. Aguantar el envite merecía la pena: hubiera permitido consolidar al PSC como fuerza hegemónica en Catalunya, mantener la credibilidad de sus promesas en otras nacionalidades históricas y ampliar su capacidad de alianzas.

b) La debilidad crónica del sector maragalliano (que tenía su principal apoyo organizado en la plataforma Ciutadans pel Canvi) y su fracaso en la tarea de ganar autoridad dentro del PSC.

c) La capacidad de maniobra de CiU y su grado de control sobre la coalición y un núcleo duro muy amplio de su electorado, que no ven ninguna contradicción entre la proclamación de grandes ideales soberanistas y la venta a precio de saldo de los mismos cuando es la condición para regresar a los pesebres del poder.

d) Los errores de ERC han sido, sin ninguna duda, los más comentados y los más exagerados, porque ha sido la bestia negra del PP, del sector ultraespañolista del PSOE y de los medios de comunicación. Aunque ello no es razón para silenciarlos. Ha tenido actitudes que han debilitado gratuitamente al tripartito (entrevista de Carod con ETA, declaraciones de Carretero contra Zapatero, imposición de Vendrell como conseller, etc). No sólo no ha comprendido la necesidad de atraerse a una parte de la opinión pública española, sino que se la ha enajenado estúpidamente, por ejemplo con declaraciones contra la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos. Ha renun-

ciado prolongadamente a impulsar la movilización social en defensa de las reivindicaciones catalanes, actitud que sólo intentó rectificar tardíamente incorporándose a la gran manifestación del 18 de febrero, pero ya sin ninguna capacidad de protagonismo. Finalmente se equivocó también al defender el voto No en el Referéndum, infravalorando las consecuencias de coincidir con el PP en este tema.

El desenlace del referéndum. El acontecimiento más positivo del ciclo que ahora se cierra ha sido la constitución y la actividad de la *Plataforma pel Dret de Decidir*. Ha conseguido reunir más de 700 entidades y movimientos sociales, más de 4.000 adhesiones individuales, fue la organizadora de la gran manifestación del 18 de febrero, ha ofrecido la mejor explicación de los recortes sufridos por el proyecto d'Estatut en su paso por las Cortes y ha organizado un importante trabajo militante en su campaña por el No. Y aunque he afirmado que el voto No fue un error, hay que recordar que fue el resultado de un debate democrático en su interior, donde esta posición se impuso al voto nulo, que considero más adecuado.

En efecto, aunque desde la defensa del derecho a decidir era lógico rechazar el Estatut aprobado en Madrid, porque significaba un brutal recorte del proyecto aprobado por amplísima mayoría por el Parlament de Catalunya, ésta no podía ser la única consideración. Para expresar este rechazo eran posibles distintas propuestas de voto (igual que en el año 79, donde se decidió expresar a través de la abstención) y para elegir la más adecuada había que considerar otros factores:

a) El Estatut aprobado era, a pesar de los recortes, una mejora respecto del existente.

b) Si, contra todo pronóstico razonable, hubiera ganado el No, habría significado quedarse con el viejo Estatut y un envalentonamiento del PP y de todos los poderes que lo apoyan. Si ganaba el Sí, tal como era previsible, el envalentonamiento del PP en el conjunto del Estado y la suavización de su derrota en Catalunya serían proporcionales a los resultados del No.

c) Por eso se necesitaba una propuesta de voto que expresara el rechazo del nuevo Estatut en nombre del derecho a decidir, pero que se diferenciara nítidamente del No del PP.

Es difícil valorar las razones que pesaron más en la Plataforma a la hora de decidirse por el No. Pero creo que jugó un papel la sobrevaloración de la manifestación del 18 de febrero, que no fue la expresión de una conciencia soberanista masiva, sino la confluencia de muchas críticas diferentes: desde el simple rechazo a la catalanofobia galopante, a la defensa de la autodeterminación y la independencia, pasando por la protesta contra los recortes de Madrid.

El resultado ha sido probablemente que muchas posiciones críticas con el nuevo Estatut no han encontrado una vía adecuada de expresión y han ido a parar al Sí (Agustí Colomines uno de los portavoces de la plataforma *Estatut Jo Sí*, se presenta como independentista), la abstención, el voto nulo o el blanco. Lo cual no significa que sea correcto hacer una suma virtual de estos contenidos posibles y afirmar que existe una mayoría crítica hacia el nuevo Estatut. Y mucho menos afirmar que

la era del autonomismo haya llegado a su fin y que ahora empieza el avance de un movimiento soberanista masivo. Sería una confusión entre los deseos y la realidad.

Las consecuencias del cambio de ciclo. A pesar de la baja participación en la votación del Referéndum el nuevo Estatut se ha impuesto y tiene la suficiente legitimidad para durar años. Su implantación y desarrollo se hará probablemente bajo la dirección de la derecha nacionalista, tal como ya sucedió en el 79, aunque ahora sea de forma mucho más inestable. Esta sería la primera consecuencia del cambio de ciclo: Zapatero ha arruinado el proyecto de Maragall en Catalunya y ha regalado la posibilidad de un nuevo período de hegemonía política a CiU. A nivel de Estado también ha arruinado las tímidas esperanzas que había suscitado de avanzar hacia una España más plural, a cambio de una España supuestamente más gobernable, más aceptable para el poderoso sector ultraespañolista del PSOE y más dependiente de la derecha nacionalista. Ahora es el reto de conseguir la paz en Euskadi el que aparece en primer término Pero a pesar de que Zapatero ha prometido que respetará lo que decida el Parlamento vasco, las ilusiones ya no serán las mismas, porque no en vano el Estatut de Catalunya se había presentado y era realmente la prueba de las intenciones y las posibilidades reformistas de su gobierno en el terreno nacional. Las iniciativas gubernamentales y la aritmética parlamentaria difícilmente darán mejores frutos en Euskadi que en Catalunya. Los únicos factores que pueden mejorar las esperanzas son la movilización social en Euskadi y la solidaridad del resto del Estado, precisamente los factores que más han faltado en Catalunya.

Martí Caussa es miembro del Consejo Asesor de *VIENTO SUR*

Catalunya, ¿fin de ciclo?

Joan Fradera

En una jornada marcada por la fuerte abstención (más del 50%, superando en 14 puntos a la registrada en las últimas elecciones autonómicas), el nuevo Estatut de Catalunya quedó ratificado el 18 de junio por una amplia mayoría de electores. El cansancio por un proceso que se ha prolongado durante más de dos años, repleto de maniobras tácticas y de cambios de posición, dominado por la opacidad y la desunión en la fase de negociación en Madrid, ha sido, sin duda, una de las claves que explican la baja participación. Como lo ha sido también el escaso entusiasmo por un texto que se sabía recortado e insuficiente en muchos aspectos.

Se constata un alejamiento, posiblemente temporal, de la población respecto a la clase política catalana. Ni siquiera la decantación final de ERC hacia el voto negativo, la crisis del tripartito y el anuncio de elecciones anticipadas han contribuido a

animar una campaña electoral marcada por la frialdad, por la inhibición de muchas entidades y movimientos sociales y por la escasa participación en actos electorales.

El difícil camino del No. Todavía en abril, pocos signos presagiaban una campaña amplia contra la ratificación del Estatut. Era cuando Carod-Rovira preguntaba enfáticamente: “¿Alguien se imagina a Esquerra pidiendo el No en el referéndum?”.

Mientras tanto, el rechazo al Estatut se iba gestando en los debates de la *Plataforma pel Dret de Decidir*, manteniendo viva la antorcha de la manifestación multitudinaria del 18 de febrero, entre la *esquerra independentista* (espacio que comparten diferentes entidades independentistas extraparlamentarias), entre las juventudes y las bases de ERC.

Fue un debate difícil entre las diferentes opciones de voto (no, nulo y blanco) para definir la mejor forma de rechazo al proyecto de Estatut, en el que participaron muchos miles de personas, que se desarrolló en el movimiento asociativo y en la red (sólo en el portal *Vilaweb* hubo miles de pronunciamientos). La opción del voto nulo (a favor de la autodeterminación, la independencia, *Som una nació* y otros lemas) tuvo muchos partidarios en un primer momento, cuestionando la trampa de un referéndum en el que no se deja otra opción que la ratificación de un estatuto recortado, pero reflejando también la dificultad de coincidir en el voto con la derecha reaccionaria.

A finales de abril apareció la campaña *Diguem No*, impulsada por la mayoría de organizaciones de la izquierda independentista y algunas entidades adheridas a la *Plataforma pel Dret de Decidir*. Poco después, el pronunciamiento muy mayoritario de las asambleas territoriales de ERC a favor del No obligaba a la dirección a cambiar de posición. Finalmente la *Plataforma pel Dret de Decidir* se definió también a favor del No cuando la mayoría de asociaciones que habían planteado el voto nulo retiraron sus propuestas para permitir la actuación conjunta de la plataforma.

Rechazando el estatuto desde el catalanismo, con un perfil claramente progresista, se han desarrollado tres campañas independientes por el No. La primera la de ERC, limitada por sus incoherencias anteriores y con una dirección debilitada y desautorizada por las bases. Como era de esperar es la que ha acaparado la atención de los medios de comunicación. La segunda, la campaña cívica de la *Plataforma pel Dret de Decidir*, con el prestigio de la manifestación del 18-F pero escasa fuerza organizada a escala territorial. Por fin, la campaña *Diguem No*, de orientación más radical, con buena presencia en comarcas y pueblos, pero mínima incidencia en los medios de comunicación de ámbito nacional.

Se planteaba, así, una situación nueva en la historia de Catalunya. Desde una parte del catalanismo político, desde plataformas y fuerzas progresistas, movimientos sociales y entidades se rechazaba frontalmente una propuesta de estatuto avalado por las Cortes españolas. Incluso en sus expresiones más moderadas (como el respeto al proyecto del Parlament del 30 de septiembre) quedaba planteado el reconocimiento nacional de Catalunya y el derecho a decidir de sus habitantes.

Finalmente, han sido cerca de trescientas mil personas las que resistiendo todas las presiones y chantajes han expresado este rechazo, abriendo un pequeño hueco

para seguir avanzando hacia la plena soberanía y la autodeterminación. El tiempo dirá si este hueco sigue abriéndose o queda taponado.

Las claves del resultado. Resulta evidente que el voto negativo catalanista no ha conseguido aglutinar el amplio rechazo social existente y que ha quedado por debajo de las expectativas que solo un mes antes, le auguraban los analistas más serios y las encuestas. Diferentes factores, algunos previsibles, se han combinado para limitar el impacto del No defendido desde posiciones catalanistas y progresistas:

1. Desde el mismo momento de la expulsión de ERC del gobierno, la *sociovergencia* ha funcionado a la perfección, y los tres partidos del Sí han complementado sus mensajes, con la ayuda de todos los medios de comunicación, explotando al máximo el posibilismo (“más vale pájaro en mano”), el cansancio (“votamos Sí y pasamos a otra cosa”) y sobre todo, el miedo con diferentes variantes: al retorno al poder del PP, al vacío, a volver a empezar “todo” de nuevo, a perder una oportunidad histórica irrepetible...

2. De todos estos mensajes, el más reincidente y que seguramente más incidencia ha tenido sobre el electorado de izquierdas es la identificación del voto negativo con el PP, dando todo el protagonismo a esta fuerza. A ello ha contribuido la aparatosa presencia diaria de líderes estatales del PP, que de paso ha arruinado los esfuerzos del núcleo dirigente del PP en Catalunya, que había diseñado una campaña de perfil más bajo, centrada en la denuncia del pretendido intervencionismo del Estatut en la economía, buscando la complicidad de una parte del electorado de CIU.

3. La campaña realizada por ERC a favor del No ha sido víctima de sus propias contradicciones. Aparte de la escasa convicción en el No que ha sido evidente en buena parte de sus dirigentes, ha sido muy fácil para los partidos del Sí recordar sus posiciones anteriores para neutralizar sus argumentaciones. La campaña de ERC no ha convencido a la mayoría de sus votantes, en cambio ha limitado la incidencia del No en el electorado de los partidos del Sí y de sectores independientes /1.

4. Estas limitaciones sólo se podían superar con una presencia activa en la campaña de los movimientos cívicos e independientes, como la *Plataforma pel Dret de Decidir* y la campaña *Diguem No* entre otros. Pero estos movimientos apenas si han encontrado huecos en los medios de comunicación, no han conseguido revertir el ambiente de frialdad y desmovilización que han dominado toda la campaña y su influencia ha quedado básicamente limitada al mundo asociativo y a los sectores más activos y politizados de la sociedad.

5. Los sectores críticos con el Estatut no han confiado en la gestión del rechazo por parte de los mismos partidos que han protagonizado la claudicante negociación anterior. En particular, la improbable renegociación del Estatuto aprobado por el Parlament el 30 de setiembre propuesta por ERC no ha despertado ningún entusiasmo. En cambio, nadie ha propuesto actos concretos de ejercicio de la soberanía

1/ Sobre el comportamiento electoral en el referéndum de diferentes segmentos de la sociedad (por recuerdo de voto, grupos de edad...) resulta interesante consultar la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (IDESCAT, Baròmetre d'opinió política, juliol de 2006).

como podría ser la votación popular de aquel proyecto (como se contemplaba en el mismo Pacto del Tinell).

En resumen, los condicionantes y el desarrollo de la campaña han contribuido a una dispersión del potencial voto crítico entre el voto No, el voto en blanco (que crece claramente en las zonas con fuerte implantación electoral de ERC), el más testimonial voto nulo y la abstención, sin olvidar a toda la gente que compartiendo las críticas al Estatut han dado prioridad a votar contra el PP, eligiendo la papeleta del Sí.

¿Hacia un gobierno de *sociovergencia*? Con la ruptura del tripartito y la renuncia de Maragall (a pesar de todo, el líder político catalán mejor valorado por la ciudadanía del país) la pinza establecida por el pacto Mas-Zapatero se ha cerrado inexorablemente. CiU aparece como la principal triunfadora de la crisis, confirmando su tesis de que el tripartito es una fórmula intrínsecamente perversa e inviable. En la parrilla de salida de las próximas elecciones, Artur Mas parte con una ventaja significativa y acaricia ya el retorno al poder de la mano... de los socialistas catalanes.

Un gobierno de colaboración entre convergentes y socialistas es la fórmula deseada por los sectores empresariales de Catalunya y es la que reclaman un día sí y otro también los principales medios de comunicación. También es la que mejor responde a las necesidades de agenda (y de nuevas alianzas) de La Moncloa, donde las reformas de corte neoliberal (en temas como pensiones, mercado laboral y fiscalidad) son prioritarias.

Un gobierno de *sociovergencia* puede tomar diversas formas, desde la coalición hasta el apoyo parlamentario a las leyes básicas, como los presupuestos. Pero nadie concibe esta colaboración gubernamental sin la dirección de CiU. Por tanto, la condición indispensable para que pueda realizarse es que la coalición conservadora amplíe su ventaja sobre el PSC de forma significativa (una diferencia de diez escaños podría ser suficiente). Sólo en estas condiciones el PSC podría aceptar una situación de subordinación que podría hipotecar su futuro para varias legislaturas.

En cambio, el mantenimiento (aún con ligeras variaciones) de la relación de fuerzas actual conduciría a la reedición del tripartito. Ahora bien, que nadie se engañe: este nuevo tripartito representaría un cambio (a peor) respecto al que se formó con el pacto del Tinell. Con un PSC más sometido al PSOE, con una alianza preferente a nivel de Estado entre el PSOE y CiU en las políticas de corte neoliberal y con los socios menores en una posición más subordinada, el nuevo tripartito nacerá condenado a aplicar una política más conservadora en terrenos como el social, el nacional y el medioambiental.

Con el referéndum del 18-J, nos aproximamos al final del ciclo político que se abrió en Catalunya, al calor de las grandes movilizaciones contra la guerra, el trasvase del Ebro y el autoritarismo del PP, con las elecciones municipales de 2003. El crecimiento de las opciones de izquierda “menores” (ERC y ICV-EUIA) recogiendo las aspiraciones de emancipación social y nacional de nuevas generaciones dio paso a la formación del tripartito. Hoy, la adaptación institucional de estas fuerzas

y su supeditación al PSC-PSOE, las incapacita para hacer frente a las limitaciones de la reforma estatutaria y a los dictados de los sectores económicos y empresariales. Su única perspectiva es, si los resultados lo permiten, negociar a la baja su presencia en un tripartito de nuevo cuño.

El caso de ERC es muy ilustrativo. La dirección ha aprovechado con toda celeridad los resultados del referéndum para defender el retorno a la “centralidad política”, reivindicar la labor de gobierno realizada y presentarse como los mejores gestores del nuevo estatuto. Ni una palabra, en cambio, sobre como avanzar hacia la plena soberanía.

Por la continuidad y fortalecimiento de los movimientos cívicos.

Frente a la lógica de los partidos parlamentarios y su acatamiento acrítico de las reglas del juego y del orden constitucional, el proceso de negociación del estatuto ha mostrado la existencia de un sector amplio de la población dispuesto a avanzar hacia un proceso de autodeterminación. Lo mostró el 18 de febrero y lo ha mostrado en el referéndum, en las peores condiciones, donde el voto libre se encuentra encorsetado por unas opciones de sufragio más que limitadas.

Es pronto para valorar el impacto que la nueva situación (cierre del debate estatutario, resultado del referéndum) tendrá sobre los movimientos cívicos y sociales. En cualquier caso, el nuevo Estatut, que no resuelve ninguno de los temas de fondo del contencioso entre Catalunya y España, pronto mostrará sus limitaciones. También la evolución de la situación en Euskadi puede contribuir a reanimar la movilización nacional en Catalunya. Por todo lo anterior, movimientos como la *Plataforma pel Dret de Decidir* pueden jugar un importante papel, llenando el vacío político en el campo del soberanismo, siempre que sepan dotarse de estructuras autónomas, establecer lazos transversales entre entidades de signo muy diverso e impulsar iniciativas al margen de la lógica partidista; y, sobre todo, que sean capaces de mantener una coherencia con las posiciones mantenidas en el último período.

Joan Fradera es miembro de *Revolta Global* y de la *Plataforma pel Dret de Decidir*.

“Por una vivienda digna”: nace un nuevo movimiento

Miguel Urbán

En el momento álgido de las luchas de los jóvenes franceses contra la precariedad y la exclusión a las que les querían someter, por rango de ley, el gobierno neoliberal de Villepin, en el Estado español se convocaban, de forma anónima por internet, concentraciones a favor del derecho a realizar el famoso “botellón”. Se inició así un debate mediático entre los diferentes profesionales de la tertulia y la parodia, en los que se acusaba a la juventud de nuestro Estado, de estar dormida y de profesar un talante poco contestatario, en contraposición a la postura crítica y de lucha de

nuestros compañeros franceses. Paralelamente a este debate ficticio dentro de los *mass media*, un mensaje anónimo circulaba como la pólvora por internet; en él se hacía referencia a un tema tan importante como es la vivienda, bueno mas bien, a la imposibilidad, por gran parte de la población, de acceder a ella.

“Sé que este correo electrónico se puede parecer a muchos de los que circulan por la red pero no es cierto. Este correo está siendo enviado por toda España para reivindicar nuestros derechos. Hemos asistido durante el mes de marzo a la convocatoria de multitudinarios macrobotellones, esta convocatoria es diferente. En Francia, los jóvenes protestan por la modificación de los contratos basura. Muchas voces han sido las que se han quejado en este país porque los jóvenes no hacían nada. Pues bien ¿se lo vamos a demostrar? Queremos todos una vivienda digna en la que podamos vivir sin estar destinando más del 50% de nuestro sueldo para pagarla. Si de verdad te importa tu futuro... ¿estarás allí sentado con tus colegas? Esta convocatoria no ha sido convocada por ningún partido político. Simplemente es la demostración de cómo la juventud española puede unirse para conseguir sus propósitos. Por eso se aconseja que no se lleven banderas que representen territorios o ideologías. Por una vivienda digna, difunde este mensaje. ¡¡Pásalo!!”

Con un tono manifiestamente apolítico, este mensaje convocaba a la gente a realizar sentadas por el derecho a la vivienda en las plazas principales de cada ciudad, convirtiéndose en una bola de nieve que acumulaba, en su lista, cada vez más ciudades. La difusión de la convocatoria alcanzó tanta dimensión que algunos de los medios de (des)comunicación de masas se hicieron eco de la convocatoria la semana justamente anterior a la celebración de la misma. La ambigüedad de la convocatoria, generó cierto escepticismo entre las (os) militantes sociales porque no sabíamos que nos podíamos encontrar en las diferentes sentadas convocadas por todo el estado. El resultado fue sorprendente. Las sentadas se realizaron en mas de 60 ciudades con un seguimiento dispar, destacando Madrid, Barcelona y Sevilla donde la asistencia fue masiva, en especial en la primera donde se concentraron mas de 6.000 personas, que una vez realizada la sentada decidieron comenzar un *reclama las calles* por todo el centro, que colapsó la ciudad durante cinco horas.

El ambiente que se respiraba, en esta manifestación improvisada, recordaba a las marchas estudiantiles que cortaron las autopistas cuando estalló la guerra de Irak y a la concentración del 14 de marzo frente a la sede del PP. Las consignas eran en cierta manera similares, salvando las distancias (*“que no, que no, nos representan”*; *“lo llaman democracia y no lo es”* esta vez se sumaban otras como, *“qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”*; *“tu también estas hipotecado”*). Las diferentes prácticas de lucha ensayadas durante el gobierno del PP se volvían ahora contra el gobierno del PSOE que, una vez más, incumple sus promesas y rompe las ilusiones de gran parte de la población. Esto era lo más interesante: miles de jóvenes que alcanzaron un cierto grado de concienciación social al calor de las luchas contra la LOU, el *Prestige* y la guerra, y que actualmente no militan en ningún movimiento social u organización política, volvían a hacer suya la calle para reclamar, esta vez, el derecho a

una vivienda digna, como antes lo hicieron contra la guerra o las mentiras del gobierno de Aznar, mostrando la existencia de una inteligencia colectiva que se articula en momentos puntuales retomando las calles rompiendo el silencio.

El urbanismo depredador. El Estado español es uno de los países que más viviendas tienen por 1.000 habitantes-año y el que más construye, con 18,1 nuevas viviendas por mil habitantes/año, frente al ratio europeo de 5,7. Durante el periodo 2000/2005 el ritmo de la construcción de la vivienda se ha acelerado hasta llegar a un promedio de una vivienda por cada dos habitantes /1. El resultado es que el Estado español tiene el mayor parque inmobiliario de la UE, el país con un ritmo constructor más alto y donde más difícil es el acceso a la vivienda. Según el Censo de 2001 existían en el Estado 3,1 millones de viviendas vacías, el 81% en buen estado de conservación (todo esto sin contar los millones de nuevas viviendas construidas durante el presente *boom*).

La liberalización del suelo impulsada por la administración del PP en su primera legislatura, consagrada en la Ley del Suelo estatal de 1998 (la del “todo urbanizable”), prometía bajar los precios a través de la “ley de la oferta y la demanda”. El objetivo fundamental de la reforma, después de la fallida reforma socialista del 92, fue reactivar el mercado inmobiliario como piedra angular del crecimiento económico.

Casi una década después los resultados son palpables: la burbuja inmobiliaria no para de crecer sustentando, en gran parte, el crecimiento de la economía, favoreciendo la compra de vivienda como inversión en lugar de como bien de uso, un modelo económico cuestionado por insostenible, incluso, por organismos internacionales como el BM o la OCDE; mientras que por un lado los sectores excluidos del acceso a la vivienda no paran de crecer (jóvenes principalmente, pero no sólo), y por el otro ha supuesto una masiva destrucción del medio ambiente (costas, sierras y vegas caen bajo las excavadoras) con la degradación de importantes activos naturales y sociales, a la vez que origina fuertes presiones, a corto y, sobre todo, a largo plazo, sobre el medio ambiente y sus recursos, además de suponer un importantísimo despilfarro energético. Desde luego lo que se está demostrando con la prueba de los hechos, es la falacia que supone la máxima neoliberal de que la necesidad de vivienda se arregla construyendo más viviendas, al poderse comprobar que las mayores tasas de construcción de la historia de España vienen acompañadas de los mayores precios y de los índices más altos de inaccesibilidad de nuestra historia reciente /2.

¿Por qué la vivienda como detonante de la protesta? En la sociedad occidental, regida por la ficticia opulencia del despilfarro consumista, parecía que los problemas materiales habían pasado al baúl de los recuerdos como una reminis-

1/ Observatorio de la Sostenibilidad en España: www.sostenibilidad-es.org, consultada 8/07/06.

2/ Conclusiones del taller de precariedad en la vivienda. Encuentro de movimientos sociales de Madrid abril 2006.

cencia de otras épocas, sus tensiones y contradicciones de clase habían sido superadas por el capitalismo de la “nueva economía” que sentenciaba el final de la historia. Pero nada más lejos de la realidad, la fractura económica se amplía como una losa inexorable entre el norte y el sur e incluso dentro de los países “ricos” las diferencias son cada vez más amplias, no sólo por la aparición de importantes bolsas de pobreza y marginación, sino también por el endeudamiento cada vez más importante entre las clases populares y medias.

El acceso a la vivienda, en nuestro Estado, es uno de los principales problemas materiales para la mayoría de la población entre 18 y 35 años, de hecho un estudio muestra que la vivienda es la principal preocupación entre la juventud, señalándolo como “muy o bastante importante” en su vida para un 97% de los entrevistados; cuando se les pidió que puntuaran la vivienda como “más o menos necesaria” en una escala de 1 a 10 (desde “totalmente innecesaria” a “totalmente necesaria”), el promedio que se obtuvo fue un 8,4, y un 8,5 /3.

Un estudio realizado por el Consejo Económico y Social /4 con relación a la emancipación de los jóvenes, señala como problema principal el acceso a la vivienda, en el retraso de edad que se está produciendo a la hora de emanciparse, fundamentalmente por dos razones; el alto precio de la vivienda debido a la especulación de la burbuja inmobiliaria, que ha propiciado el aumento de los precios hasta en un 180% desde 1990 a 2004 y una media estatal del 73,40% entre 1999 y 2004, según fuentes del Banco de España. Lo que supone que un joven tiene que invertir, como media estatal, el 53,7% de su salario para comprar una vivienda, cifra que se dispara en el caso de la comunidad de Madrid con un 70,06% /5, produciendo un endeudamiento atroz entre capas muy amplias de la población. La otra razón es la tendencia española a la compra en detrimento del alquiler, debido a una política fiscal favorable y una cultura tradicionalmente propicia a esta práctica, favoreciendo que el 85 por ciento de las viviendas en España sean de propiedad, y sólo un 15% estén en régimen de alquiler.

Estos datos nos permiten afirmar que el acceso a la vivienda, en nuestro Estado, es uno de los principales problemas materiales a los que se enfrenta la juventud, un problema que debe de ser considerado de clase, al estar fundamentado en una desigualdad que tiene sus raíces en la estructura y el funcionamiento normal de la vida económica, que se sustenta en la expansión urbanística y sus sectores dependientes. Por lo tanto, es indudable que el problema principal es la estructura económica, que imposibilita que gran parte de la población acceda una vivienda digna.

El movimiento espontáneo, que surge a partir de las primeras sentadas de mayo, es la expresión de un malestar latente que se concentra fundamentalmente en las grandes urbes en donde las contradicciones materiales se hacen cada vez más pro-

3/ Centro de Investigaciones Sociológicas: Datos de opinión nº 19, enero-marzo 1999.

4/ Comisión Específica del Consejo Económico y Social (CES) “Estudio de emancipación de los jóvenes. La situación de la vivienda en España” 2002.

5/ Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI) correspondiente al tercer trimestre de 2005, editado por el Consejo de la Juventud de España.

fundas y los conflictos de clase más agudos. Una clase desfragada y difusa en donde encontramos trabajadores precarios y trabajadores en formación (estudiantes) que son relegados a la incertidumbre de una juventud perpetua, mediante la imposibilidad material de emancipación de sus núcleos familiares directos o una emancipación en precario, atezados por un mercado laboral flexible y esquizofrénico que no les permite adquirir la seguridad necesaria para afrontar, en solitario, un alquiler y aún menos una hipoteca.

La vivienda supone a día de hoy, por la particularidad concreta de la fundamentación económica de nuestro Estado, una de las muestras más visibles de la contradicción de clase, lo que la configura como un detonante perfecto a la hora de expresar un malestar latente entre amplias capas de nuestra sociedad, que se engloba, en el ámbito europeo, dentro de la precariedad, en su sentido más amplio /6. Esto nos permite realizar un análisis de conjunto de los problemas materiales y de las respuestas que se están articulando, construyendo un hilo rojo entre las protestas, esencialmente juveniles, que están surgiendo en Europa al calor de la lucha contra la precariedad, ya sea contra el contrato del primer empleo en Francia, las reformas universitarias /7 en Italia y Grecia o la lucha por una vivienda digna en el Estado español.

Los primeros pasos para organizar la respuesta... Si la primera sentada fue un éxito que nos sorprendió a todos, no lo fue menos que de forma casi automática se volvieron a convocar nuevas concentraciones a la semana siguiente, donde la participación, aunque menor que la anterior, siguió siendo importante. La consolidación de una cierta dinámica de concentraciones todos los domingos propició la construcción de un cierto lugar común en donde los nuevos activistas socializaban sus propuestas e iniciativas, creando una complicidad compartida que derivó en la convocatoria de diversas asambleas en Madrid, Barcelona y Sevilla.

Este nuevo movimiento se nutre principalmente de gente joven sin experiencia militante en otros movimientos sociales u organizaciones políticas, por lo que la aportación de los activistas sociales en las primeras asambleas fue importante de cara a poder articular dinámicas de funcionamiento y en sentar las bases para la estructuración organizativa de las asambleas.

Esta intervención ha sido, generalmente, muy respetuosa con los diferentes ritmos y sensibilidades dentro de la asamblea debido a la inexperiencia y a la heterogeneidad de sus componentes. Aún así, se ha conseguido un consenso sobre dos temas fundamentales: la necesidad de dotar al movimiento de una estructura organizativa que pueda hacer frente al reto de consolidar y ampliar la protesta; en el caso concreto de Madrid, se suma la necesidad de dar cobertura política, legal y fi-

6/ La desigualdad institucionalizada en el reconocimiento, el acceso y el ejercicio de derechos, lo que supone, la imposibilidad real de disponer de un modo sostenido de los recursos adecuados para satisfacer las necesidades básicas.

7/ Las reformas universitarias de ámbito nacional que se están coordinando en el Espacio Europeo de Educación Superior, tienen como esencia principal actualizar la función de capacitación profesional de la universidad a las nuevas necesidades de un mercado laboral flexible y precario. Por lo tanto la respuesta a estas medidas viene implícitamente ligado a la negación del actual modelo laboral y económico.

nanciera a los 17 detenidos de las sentadas por la vivienda; y empezar a debatir colectivamente para poder elaborar un cierto programa político de reivindicaciones abstractas y concretas.

Estos acuerdos han permitido la estabilización de las asambleas de Madrid y Barcelona y la posterior convocatoria y realización de las manifestaciones contra la especulación y por la vivienda digna del 2 de julio, que después de la desactivación paulatina de las sentadas, han supuesto una reactivación de la lucha y un salto cualitativo en el plano organizativo.

En el caso concreto de Madrid, a pesar de la buena participación en la manifestación, no se ha conseguido enlazar con otras luchas sociales que se están desarrollando paralelamente y que están íntimamente ligadas por su temática, debido fundamentalmente a la falta de tiempo. Ya que abordan la problemática del urbanismo y la vivienda, como es el caso de las plataformas contra los parquímetros, la remodelación de la M-30 y los siete días de lucha social, aunque con esta última ha habido un intercambio interesante de experiencias confluyendo tímidamente en la manifestación.

En cambio en Barcelona, aunque la participación en las sentadas y las manifestaciones ha sido menos mayoritaria que en Madrid, la implicación decidida de un sector del movimiento social, que lleva varios años abordando la problemática de la vivienda y la especulación, ha favorecido la elaboración de un discurso más positivo que el de otras ciudades.

Del “todo urbanizable” al “talante especulador”. Retos para el movimiento. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Suelo tras haber superado de forma positiva el proceso de consulta con administraciones públicas e instituciones representantes del sector y se inicia ahora su trámite parlamentario, un anteproyecto que han titulado como potenciador del urbanismo sostenible y del derecho de los ciudadanos. Pero que realmente responde a la necesidad de racionalizar el mercado inmobiliario, que según los últimos estudios estatales e internacionales, corre el riesgo de entrar en crisis, pinchando la famosa burbuja inmobiliaria con los consiguientes perjuicios a la economía española.

En este sentido, en la propia declaración del anteproyecto de ley, se hace mención a la necesidad reorganizar el sistema “*desarrollista del urbanismo español*” con relación a la estrategia territorial de la UE, que ha sido de las instituciones más críticas con el modelo de crecimiento económico, ficticio, basado en el ladrillo y la burbuja inmobiliaria.

La ley, en rasgos generales, supone un avance en relación a la de 1998 conocida como la del “todo urbanizable”, a partir de ahora los instrumentos de ordenación deberán justificar la necesidad de transformar el suelo rural a urbanizado; el suelo que no sea necesario deberá ser preservado de la urbanización; será obligatorio someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos y de ordenación del territorio; se intenta incrementar la transparencia del procedimiento urbanístico sometiendo los convenios urbanísticos a información pública; se debe reservar un 25% del suelo a vivienda de

protección oficial (VPO) y por último los propietarios de suelo deberán ceder entre un cinco y un quince por ciento de los aprovechamientos al Ayuntamiento.

Es indudable que este proyecto de ley supone un pequeño avance en relación a la esquizofrenia constructora que hasta ahora ha regido, pero resulta del todo insuficiente de cara a poder frenar el proceso especulativo y la degradación del medio que actualmente existe. Aunque presenta ciertas medidas medioambientales, éstas son escasas y tienen numerosos agujeros negros, como es que las Comunidades Autónomas podrían incluir dentro del suelo rural (el actual suelo no urbanizable protegido) construcciones que no son propias de este tipo de suelo, facilitando una puerta de atrás para los especuladores.

Además las cuotas de suelo para vivienda de protección oficial son manifiestamente escasas y no responden a las demandas reales de la ciudadanía, que difícilmente pueden acceder a una vivienda de régimen libre. Éstas deberían ser como mínimo de un 50% para VPO y la cesión del suelo, por parte de los propietarios, entorno a un 20% para el aprovechamiento a los Ayuntamientos. En último término se encuentra un supuesto estatuto de los ciudadanos que establece, por encima de los intereses inmobiliarios privados, el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, y su participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades. Estas medidas abstractas, no vienen acompañadas por políticas concretas que permitan su realización, lo que las convierte en papel mojado al igual que lo ha sido durante más de veinticinco años el artículo 47 de la Constitución.

Por lo tanto podríamos concluir que la reforma cambia la máxima del todo urbanizable, código genético de las políticas públicas y económicas del PP, por una “*especulación con talante*”. Que nace con la intención de cumplir dos funciones primordiales: racionalizar el sector y el mercado inmobiliario de cara a intentar evitar una futura recesión del mismo, que acarrearía importantes perjuicios en el conjunto de la economía; y realizar un *lifting* político que merme el caldo de cultivo de un incipiente movimiento por la vivienda digna y convertirlo en la punta de lanza del PSOE, para las próximas campañas electorales autonómicas, en los feudos más importantes del PP (Madrid, Valencia y Baleares).

La entrada en escena de esta una nueva ley del suelo *con talante* y de aspecto ciudadanista reconfigura una nueva coyuntura en la construcción del movimiento por la vivienda. Hasta ahora los tiempos los había marcado, en cierta manera, el incipiente movimiento surgido de las sentadas, pero de aquí en adelante, es muy probable que los ritmos puedan ser impuestos desde las instituciones o incluso, según se acerquen las elecciones municipales y autonómicas, es muy posible que el PSOE intente recuperar las diferentes iniciativas por la vivienda, de cara a presentar un frente social que empuje su campaña electoral contra los gobiernos del PP. Mediatizando los debates y las dinámicas internas de las recién nacidas asambleas por la vivienda digna, forzando posicionamientos que dado la poca madurez política colectiva, no puedan ser asumidos y generen importantes disensos.

Ante estos hipotéticos escenarios, que en cierta manera ya se empiezan a concretar con invitaciones a reuniones o a foros por parte del Instituto de la Juventud de España (INJUVE), las asambleas deben de acelerar su ritmo a la hora de construir organización y discurso propio, para poder garantizar su propia autonomía. En este sentido es imprescindible aumentar la participación en las asambleas de cara a sumar no sólo a mas gente, sino también de cara a incorporar a un mayor numero de colectivos y plataformas sociales que posibiliten la extensión territorial hacia barrios y pueblos con la creación de nuevas asambleas, apostando por una coordinación en red de carácter estatal.

Además es urgente la elaboración colectiva de una carta o programa de derechos y reivindicaciones sobre la vivienda, comprensible y fácilmente aceptable por gran parte de la población, pero a su vez rupturista con el actual modelo económico. Imprescindible de cara a adquirir la madurez necesaria para poder *surfear* los cantos de sirena de la izquierda neoliberal y abordar los retos fundamentales que permitan la consolidación de este nuevo movimiento como sujeto político.

Miguel Urban es militante de Espacio Alternativo.
Forma parte del Consejo Asesor de *VIENTO SUR*.

La política fiscal que el comunismo suprimirá

Diego Guerrero

Me piden un artículo crítico sobre la política fiscal de Zapatero y Solbes, y lo primero que hay que decir es que se trata de la misma política fiscal de, por ejemplo, Aznar y Rato: es la política fiscal al servicio del capital.

El único punto de vista que tiene sentido cuando se analiza la política económica desde la perspectiva de los asalariados, y sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores asalariados conscientes que se ven a sí mismo como idénticos al proletariado explotado por el capital, es el análisis materialista de lo que sucede más allá o por debajo de las apariencias. La apariencia es que la política fiscal la hace el gobierno, como ocurre con el resto de la política económica y de la política pública en general. Pero la realidad es que el gobierno sólo hace y puede hacer lo que le deja el sistema en el que se inserta (más o menos gustosamente). En concreto: lo que es posible hacer dentro de la estructura económica social que todos los gobiernos, con el apoyo unánime de ese sector empresarial compuesto por los partidos políticos y demás unidades productivas del subsector electoral, aceptan desde el principio, por necesidad de su propia razón de ser, desde el momento en que entran voluntariamente y a manos llenas, en el juego de la “democracia de mercado” y, si son de izquierdas, se lanzan a vender la mercancía de la “necesidad de controlar el mercado con una política (por ejemplo, fiscal) dirigida por los poderes públicos y orientadas a lo social”.

¿Y qué es lo que es posible hacer dentro de ese contexto capitalista que ellos no cuestionan? Servir a los intereses del capital, contribuir a su reproducción, a la perpetuación de las relaciones de mercado y de capital, pero al mismo tiempo, y para colmo, transmitir la imagen de que se hace una política de izquierda, o al menos la (única) que es posible hacer, con el fin de contribuir a que los que sufren las consecuencias de las políticas del capital la sufran con el menor dolor posible por aquello de que la sarna con gusto no pica. Para eso, preferiríamos a la derecha, que al menos se declara de derechas.

Las pruebas de que esto es así son numerosas, pero nos conformaremos aquí con mencionar sólo tres. ¿Cómo se explica que el 80% de la recaudación total por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas provenga de las rentas salariales, y sólo el 20% de todas las demás rentas? Si se tiene en cuenta que los salarios equivalen a la mitad de la renta nacional, esto significa que la clase asalariada tributa a Hacienda por este concepto cuatro veces más en términos relativos, y sufre por consiguiente una presión fiscal cuatro veces mayor que el resto de la población. Se trata de un impuesto, el IRPF, absolutamente regresivo en realidad, a pesar de tantos supuestos críticos de izquierda, incluidos los que asesoran o simpatizan con los sindicatos (traidores) de clase, que prefieren creer que ese impuesto es progresivo porque así lo dicen la Constitución, los preámbulos y declaraciones de principios de las leyes y los medios de comunicación. Esto les ocurre por una de dos: o no entienden nada, y menos que nada el hecho de que lo que cuenta es la realidad de los hechos y no la beldad de las palabras; o bien lo entienden pero lo ocultan y lo maquillan porque en ello se juegan quizás la fortuna empresarial de sus empresas de izquierda (partidos, sindicatos, etc.).

Un segundo ejemplo de lo anterior se llama SICAV, es decir, las “Sociedades de Inversión de Capital Variable”. En realidad, estas empresas son usadas por las grandes fortunas porque gozan de la aséptica propiedad de estar sometidas a un régimen fiscal especial que les obliga a cotizar sólo el 1% de sus beneficios, en lugar del 35% que se carga en el régimen general del Impuesto de Sociedades. Pues bien, el gobierno “electo-socialista” actual ha creído necesario dotar a estas empresas de ventajas adicionales, de forma que desde mayo pasado las SICAV no sólo pueden negociar sus acciones en la Bolsa ordinaria, sino también en un Sistema Organizado de Negociación que les facilita un poco más las cosas, y además hacerlo mediante un “sistema de compraventa de acciones a valor liquidativo” similar al de los Fondos de inversión. ¿Qué explicación dan los autores de esta política fiscal para permitir que los patrimonios, las carteras de valores y las rentas de los grandes capitalistas, con el apoyo de sus ejércitos de abogados y de las redes de empresas instrumentales que se requieren para ello, se vean sometidos a una presión fiscal del 1%?

El tercer ejemplo que nos importa a los trabajadores es el de la fiscalidad que rodea a la llamada “política social”. Dejemos de lado que cuando se analiza la realidad y no las palabras, lo “social” resulta ser tan sólo es el calificativo vergonzoso que usan en

vez de “socialista” los que alguna vez se decían tales (y luego comprobaron que así no vendían). Los trompeteros de la fama del capital se presentan a sí mismos como los hacedores de una política “social” y un Estado “del bienestar” que conjuntamente regalaría al pueblo una especie de “salario social” adicional que el gobierno pondría así a disposición de los pobres y se sumaría a los salarios pagados por las empresas, todo un abundante flujo de pensiones de todo tipo, subsidios para los parados, becas para los jóvenes, atenciones varias a los jubilados y prestaciones médicas gratuitas para todos... Todo como si no supiéramos los que tenemos los ojos abiertos que todo eso lo estamos pagando con el dinero que previamente nos saca de nuestros bolsillos el gobierno gestor de los intereses generales del capital.

Los estudios serios -que se realizan, por supuesto, sin el apoyo financiero de ese mismo capital- demuestran que en España ocurre lo que también sucede en los otros países capitalistas. Es decir, que la suma de lo que reciben los trabajadores a través de esa supuesta política social no es mayor sino igual a la suma que ellos pagan al Estado para financiarlo. Habrá redistribución estatal de la renta desde otros puntos de vista (generacional, regional, etc.), no lo negamos; pero ni una mijita de redistribución a favor de la clase de los asalariados. Por consiguiente, esta política fiscal-social-capitalista sólo es una manera de dejar que las cosas sigan igual, que los efectos de las leyes del mercado vigentes, que no son sino las leyes de la explotación obrera por parte del capital, desplieguen su eficacia por el interior de todo el tejido social, pero lo hagan con mayor suavidad, adormecidos los oídos de quienes trabajan y votan con los cantos de sirena que salen de los instrumentos musicales de estos trompeteros de la patronal.

¿Hay entonces alguna alternativa? Por supuesto, como en todo. La alternativa comunista, comunal, comunitaria, igualitaria, dirigida a expropiar a nuestros expropiadores. Los trabajadores queremos que los medios de trabajo vuelvan a nosotros, queremos reapropiarnos de los medios de producción y queremos terminar con el capital. Terminar con el capital no es matar a los capitalistas, sino convertirlos, a fuerza de democracia y revolución, en trabajadores como los demás, acabar con sus privilegios. Pero ¿qué hacer mientras tanto?, preguntarán algunos. Pues bien, hagamos una reforma acorde con esos proyectos de revolución. ¿Por qué no imponer una presión fiscal del 100% de los beneficios y dejar sin gravar a quienes no viven del beneficio sino de otras rentas? (Bien “simplificado” que quedaría, por cierto, el sistema fiscal, como les gusta a todos los gobiernos, al parecer). Dirán: entonces todo el capital se iría a otros países. Pues bien: hagamos lo mismo en todos los países. Pero entonces, dirán, ningún capitalista querrá seguir siendo empresario privado ni invertir ni dar empleo a los trabajadores, y será finalmente la ruina de todos. Pues bien: que no lo hagan, que nos dejen a nosotros producir, invertir, trabajar, que nos devuelvan (a la fuerza, claro) lo que nos han quitado previamente, y que se pongan a trabajar.

Esa es la única política fiscal alternativa. Lo demás son gaitas.

Diego Guerrero es economista comunista.

VIENTO SUR - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Ir Marcadores Herramientas Ayuda

http://www.vientosur.info/

VIENTO SUR

POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

inicio | contactar | presentación | redacción | consejo asesor | colaboradores | puntos venta

sólo en la web

sumarios viento sur

archivo pdf

monográficos en la web

nuestra gente

buscador de artículos

enlaces de interés

área suscriptores

suscribirse a viento sur



VIENTO SUR revista impresa

en circulación nº 87 | julio/2006

propuesta crítica | **miradas VOSES**



Almudena Rguez. Anacoli Gedack

sumario en abierto

VS 87 - al vuelo
Al Vuelo
Viento Sur | Acrobat (.pdf) 108 k.

VS 87 - el desorden global
Transnacionales españolas: crónica de un saqueo
Alberto Montero Soler | Acrobat (.pdf) 185 k.

VS 87 -
La política israelí hacia el pueblo palestino: un sociodido
Saleh Abdel Jawad | Acrobat (.pdf) 182 k.

sólo en la web

Libano
La guerra de los 33 días y la resolución 1701 del Consejo de Seguridad
Gilbert Achcar

Israel
¡Nos negamos a ser enemigos!
Michel Warszawski

Caminando a paso ligero (militar) hacia el "Choque de Civilizaciones"
Europa cómplice del terrorismo de Estado israelí, apoyado por EE UU
Ramón Fernández Durán

Guerra Permanente
Los planes imperiales de los EEUU son un barco que se hunde
Gilbert Achcar

Bolivia
Todo el poder a quechuas y aymaras (y al MAS de Evo)
Pablo Stefanoni

Terminado

7 subrayados

Salvador

Dirigida por Manuel Huerga, basada en la obra *Compte enrera* de Francesc Escribano, producida por Jaume Roures para Mediapro.

Guión de Lluís Arcarazo y música de Lluís Llach. Protagonizada por Daniel Brühl, Leonor Watling, Tristán Ulloa, Leonardo Sbaraglia, Ingrid Rubio, Celso Burgallo, Mercedes Sampietro, Olla Escribano, Bea Segura, Andrea Ros y Joaquín Hinojosa. Rodada en formato HD 2:35, con una duración de 138 minutos. Narra la lucha, encarcelamiento y ejecución mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974 del militante anarquista catalán del MIL Salvador Puig Antich.

La dictadura franquista pretendió con este asesinato amenazar y amedrentar a toda la generación de jóvenes rebeldes empeñados en derrocarla. La muerte de Carrero Blanco, la movilización universitaria y las huelgas obreras anunciaban el final del franquismo. La Brigada Político-Social centró su objetivo en un activo, débil y escasamente implantado grupo de activistas pobremente armados, precisamente por su fragilidad y porque, pensaban, que nadie les defendería. Mataron a Salvador. Le tocó a él, podía haber sido otro el chivo expiatorio. Cualquier militante anti-franquista. Asesinaron a Salvador, pero todas las gentes luchadoras fueron heridas de gravedad por el bárbaro hecho y por la rabia de no poder impedir la ejecución.

No estamos en *Salvador* ante una narración nostálgica ni panfletaria, sino ante un relato sólidamente construido e impecablemente narrado al servicio de la verdad ocultada que da vida a personajes de verdad sin mistificación, trampa ni cartón. Es el primer film rodado íntegramente en formato HD 2:35 con evidente buen resultado ya que la imagen obtenida posibilita la intensidad y el desarrollo dramático de la acción.

El proceso militar sumarísimo estuvo plagado de graves irregularidades. Todavía hoy sus hermanas luchan por la revisión y anulación del juicio y la restitución de la memoria de Salvador. *VIENTO SUR* se suma a éste empeño y quiere contribuir a la lucha contra

la impunidad, la falsificación y la desmemoria que la transición y los gobiernos en democracia han tejido sobre la resistencia anti-franquista y sobre los crímenes del franquismo. Y lo hacemos invitando a todos nuestros lectores a ver la película.

En éste preciso momento apoyar la existencia de este tipo de cine es un acto político militante. Ver la película también. Precisamente en este momento en el que el gobierno de Zapatero ha aprobado un proyecto de ley de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que en su artículo 7 establece que se “omitirá toda referencia a la identidad de cuantas personas hubiesen intervenido en los hechos o en las actuaciones jurídicas que dieron lugar a las sanciones o condenas”. Una vez más se escamotea la verdad. Una vez más se protege y oculta la identidad de verdugos, torturadores y asesinos. En la transición se impuso el silencio y la amnesia. Hoy se regula por la ley su impunidad para la historia mediante su anonimato.

José Gutiérrez y Miguel Romero han hecho sendas críticas que, esperamos, despierten el interés por éste, por otra parte, excelente producto cinematográfico. Ambas miradas se complementan, la una desde la izquierda de la ciudad de Barcelona dónde se desarrolla la historia y la narración, la otra desde la izquierda solidaria del resto del Estado español. Ambas desde una óptica radicalmente democrática y revolucionaria.

Salvador (Puig Antich)

Como tantas otras páginas negras del inicio de la Transición, como una de las páginas que más crudamente definían el carácter de la dictadura, concretamente la del asesinato legal de un muchacho idealista como tantos otros Salvador Puig Antich (Barcelona, 1947-Ib.1974) cayó en el olvido en aras de la "concordia". Han tenido que transcurrir algunas décadas para que saliera la luz pública una historia que, ante todo, pone en evidencia que la historia del franquismo es la historia de sus crímenes. El relato nos ha llegado a través de un buen film basado en un buen libro.

Cierto es que tiempo atrás se hicieron esfuerzos contra el olvido. El más destacado quizás fue un libro de éxito *La toma de la toma* (Empúries, Barcelona, 1985), firmado por el colectivo Carlota Tolosa, pero el "caso" no llegaría hasta el gran público hasta que Francesc Escribano escribió, *Compte enrera. La historia de Salvador Puig Antich* (Ed. 62, BCN, 2001; en castellano, *Cuenta atrás* en Península), que además sirvió para un capítulo de la serie *Dies de Transició* producida por TV3, que tuvo un considerable impacto en los espectadores.

Ahora nos llega *Salvador*, que después de un pasaje por el Festival de Cannes (¡el que ganó Loach!), se estrenará ahora en septiembre, y no dudamos que su contenido va a indignar a los espectadores. Se trata de una película de "productor", que no es otro que Jaume Roures (por cierto alguien que vivió todo aquello en primer plano en aquellos años cuando era conocido en la Liga como "Melan"), que al frente de Mediapro ha producido títulos de indudable interés como *Los lunes al sol*, el documental-entre-

vista de Oliver Stone con Fidel Castro amén de los arriesgados -y soberbios- documentales de Javier Corcuera: *Las espaldas del mundo* y *El maquis de la memoria* o la muy premiada *Princesas* de Fernando León, historia de las ilusiones, la amistad y la vida de unas jóvenes prostitutas. Está claro que *Salvador* forma parte de un compromiso personal, hecho con ira y con talento.

Rodada en castellano, catalán y francés, dirigida por Manuel Huerga, que ha puesto todo su oficio en el producto, *Salvador* es de esas películas necesarias, un ejemplo de cine popular como muchos que ha hecho Loach o como *Sacco-Vanzetti* o *Missing*, con la particularidad de tratarse de una historia que todavía quema. Desde este punto de vista, *Salvador* no decepciona, antes al contrario, impresiona, sobre todo en la parte carcelaria, magníficamente interpretada. "Meter" en una ficción un drama político de esta envergadura no era fácil, pero la película logra mantener el equilibrio hasta la rabia final, y la rabia apenas contenida de la canción de Lluís Llach. Evidentemente, quienes busquen una película anarquista se equivocan. Aunque se ajusta a la verdad de los personajes, *Salvador* es ante todo el homenaje a una generación, la del 68, que se partió la cara o murió luchando contra la dictadura.

No creo que esté de más añadir que entre los "cuatro gatos" que hicieron todo lo que estuvo en su mano por salvar la vida de Puig Antich, se encontraban los militantes de la LCR y la LC, que se manifestaron, rompieron vidrios de los edificios públicos, tiraron piedras a los "grises", y denunciaron la pasividad de los futuros parlamentarios allá donde fue posible.

José Gutiérrez

Uno de los nuestros

Hay poco espacio, sólo he podido ver *Salvador* en una copia de vídeo y, muy probablemente, habrá que volver a comentar y debatir sobre la película especialmente si, como parece, da lugar a un debate político, del cual ya hay algunas muestras mas bien desquiciadas. Así que mejor ir rápidamente a lo esencial: *Salvador* es una rara combinación de talento y valentía, rara en general, especialmente rara en el cine español, más aún cuando trata de acontecimientos políticos contemporáneos. Yo sólo recuerdo ahora dos películas de la estirpe de *Salvador*, pero ambas tienen ya más de cuarenta años: *El verdugo*, de Berlanga y *La caza*, de Saura. Estas dos películas excepcionales, necesarias para entender el clima cultural y moral del franquismo de los años 60, eran parábolas sobre una realidad encarcelada por la censura. *Salvador* es una crónica y quiere ser, y lo logra, una “crónica popular”. Éste es, a mi parecer uno de sus mayores logros cinematográficos y políticos, y es también una muestra de la valentía del proyecto: a primeros de septiembre, se van a estrenar 200 copias de la película, es decir, se va a dar la batalla del “cine de barrio” (de los “multicines”, por decirlo en lenguaje actual), no simplemente la de los circuitos “progresistas”. Con esa ambición hicieron magnífico cine político, por ejemplo, Elio Petri o Francesco Rosi, en los años 60 y primeros 70 en Italia. Ojalá *Salvador* gane la batalla de la taquilla. Porque *Salvador* es la primera película que presenta digna y verazmente a militantes revolucionarios antifranquistas. No he leído libros sobre Puig Antich. Para mí sólo era, antes de ver la película, el recuerdo de un compañero asesinado, cuya imagen, paradójicamente sonriente, difundimos cuanto pudimos (por ejemplo, en la portada de *Combate* nº 23, de abril de 1974) durante la durísima campaña, en la calle y en las cárceles, por salvar su vida, en aquellos momentos, entre el atentado contra Carrero (diciembre de 1973) y la revolución portuguesa (abril de 1974), los más difíciles de la historia de la Liga en la clandestinidad. Ahora he visto en *Salvador* a uno de los nuestros, de carne y hueso, ni héroe, ni aventurero, un militante comprometido con sus ideas, consecuente con ellas, con ganas de

vivir y con conflictos, a veces, entre la vida y la militancia.

Creo que *Salvador* no tiene sólo valores “políticos”. Es una buena película, con momentos excepcionales y otros que no funcionan tan bien. Por ejemplo, la narración de las condiciones políticas de la época en *flash back* al comienzo, hacen temer que la película va a discurrir por un camino doctrinal, a la manera del peor Bardem, que afortunadamente se abandona enseguida. Creo también que la relación con el carcelero pesa excesivamente (me refiero a un problema narrativo; parece que esta relación está siendo criticada muy duramente por los adversarios políticos de la película; no me parece que rebaje en nada el durísimo tratamiento que la película hace de los aparatos represivos del franquismo). Y en fin, para no coincidir en todo lo fundamental con Pepe Gutiérrez, a mi me sobra por completo la canción final de Llach, cuyo sobreénfasis a campanazos, me rompe la enorme emoción indignada de las luchas contra el asesinato y de su recuerdo (en esas luchas, la película olvida las que tuvieron lugar en las cárceles, especialmente comprometidas y arriesgadas, y por cierto, con un papel protagonista de las y los presos de la Liga; lástima de borrón).

Pero junto a estos problemas, hay momentos inolvidables: por ejemplo, el “gatillazo” en la acción de propaganda armada en el banco (que posiblemente provoque críticas de quienes consideran que la militancia revolucionaria debe presentarse siempre en forma “heroica”, pero es una secuencia perfectamente creíble y nada ridícula; todos cometimos torpezas entonces y, afortunadamente, de algunas pudimos reírnos); las relaciones de tensa amistad en el grupo militante; las caricias de las hermanas tratando de aferrar a Salvador a la vida; Salvador queriendo escribir en catalán la despedida a su padre; la estremecedora interpretación silenciosa que hace Celso Bugallo de ese padre, un hombre al que el franquismo aterrizó toda la vida (y esa función de aterrorizar durante décadas a tanta gente, amargándoles en el sentido literal la vida, se elude frecuentemente al hacer el balance de la dictadura).

Ésta es una película valiente, además en un tiempo cobarde. Porque es valiente en temas en los que se concentra la cobardía, no ya de la sociedad en general, sino también de la izquierda establecida. Porque *Salvador* mira dignamente a la vida de un militante revolucionario, de una organización armada, catalán,

asesinado en unos tiempos en los que ya andaban haciendo méritos, entre los cuales, no mover un dedo contra el asesinato de Puig Antich, los artífices de la “ejemplar transición”. Salvador es parte de nuestra historia.

Hay que verla.

Miguel Romero

Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas

José Manuel Naredo. *Siglo XXI, Madrid, 2006, 271 págs.*

La crisis ecológica tiene para el autor unas causas económico-financieras en un modelo de desarrollo que ha convertido todo en mercancía, ha olvidado los límites físicos materiales que posibilitan la producción de bienes y ha construido una ideología basada en valores monetarios. Este reduccionismo monetarista -del que participa una parte importante de la izquierda gubernamental, parlamentaria y sindical- impide que el discurso económico hegemónico asuma la reflexión ecológica. Pero, por desgracia, las élites capitalistas en su búsqueda de legitimaciones, sí que han sido capaces de “vestirse” de verde en la Unión Europea para no chocar frontalmente con la nueva y creciente, si bien confusa, conciencia ambiental. Con ello intentan desviar la atención pública de los problemas sociales y ambientales reales.

Para Naredo el modelo de dominación propio de la globalización tiene importantes diferencias con el colonial. Plantea una idea muy pertinente para comprender la economía de la mundialización neoliberal: el desarrollo de un país tiene poco que ver con su capacidad de producir riqueza ya que fundamentalmente depende de su posición en la arena internacional para apropiarse de la riqueza planetaria. Una característica del actual modelo

es que los problemas ambientales se plantean en combinación con agudos procesos de polarización social y territorial. El libro plantea que se ha acentuado el alejamiento del metabolismo de la sociedad industrial del modelo de la biosfera lo que unido a las reglas de juego financiero que lo regulan, está originando un nuevo orden territorial que “*alberga núcleos atractores de población, capitales y recursos*” por un lado y a la vez “*áreas de abastecimiento y vertido*”.

José Manuel Naredo intenta responder a una inquietante cuestión: si la crisis ecológica es cada día más evidente, como es el caso del cambio climático ¿cómo se explica la débil y fragmentaria conciencia ecológica social? Para ello, analiza con mirada nueva el viejo problema de la generación y selección de las ideas hegemónicas en el cuerpo social. Y va más allá, disecciona los mitos y dogmas de la economía convencional y se detiene en la explicación -con herramientas conceptuales ajenas al paradigma dominante- de dos de los mitos capitalistas más potentes: el trabajo y el desarrollo económico. La irracionalidad del sistema económico queda de manifiesto en éste libro, en el que además se proponen alternativas para una hipotética reconversión ecológica de la economía.

Manuel Gari

Rebeldía. La revista intergaláctica zapatista

<http://www.revistarebeldia.org>

En el número 83 de *VIENTO SUR* se publicó una entrevista realizada por Miguel Romero a Sergio Rodríguez Lascano, director de la revista mexicana "Rebeldía". En la misma se explicaba la situación actual del movimiento zapatista y todos los prolegómenos de la llamada "otra campaña" activada en esos momentos por parte del EZLN en todo México.

La revista "Rebeldía" se publica impresa en México. Su primer número apareció en el mes de noviembre de 2002. Desde entonces viene apareciendo regularmente cada mes.

"Rebeldía" tiene su prolongación en internet de manera intensa. En la web que comentamos (www.revistarebeldia.org) publican en formato electrónico, PDF, todos los números de la revista impresa conteniendo artículos, noticias y

eventos relacionados con las campañas políticas y actividades zapatistas, que no necesariamente aparecen en su versión en papel.

El sitio web se ha remodelado últimamente alcanzando un alto nivel tecnológico. Estas mejoras permiten búsquedas de todo tipo de artículos, comunicados, etc... y un excelente interfaz para navegar por sus contenidos.

Además, este sitio es un punto más de una especie de "ciber-anillo" zapatista, junto con otros, como "la zezta internacional", "enlace zapatista" -bitácora del subdelegado zero y la comisión sexta (sic)- y "radio insurgente". Todos estos sitios web, junto con la página del EZLN forman un auténtico anillo de información y de puesta al día de todas las propuestas y actividades zapatistas, en todo momento.

Kaosnared, desde Terrassa... contrainformando "a la contra"... del capitalismo y sus atrocidades

<http://www.kaosenlared.net>

Poco después de las movilizaciones contra la OTAN de 1985, en 1987 nació en Terrassa y su comarca "Radio Kaos". Después de una dura lucha, desde entonces, esta radio libre sigue su camino no sin haber tenido muchos avatares de resistencia y, como no, de desarrollo y lucha social.

En julio de 2001, al calor de las jornadas de protesta ante la reunión del Banco Mundial en Barcelona, en las que Radio Kaos participó activamente, el colectivo que hace posible este proyecto reflexiona y pone en marcha una nueva idea. En este caso la presencia contrainformativa, cultural y alternativa en internet, fundando KAOS EN LA RED.

Según manifiesta el colectivo editor "Lo que quiere aportar [kaosenlared.net](http://www.kaosenlared.net) es la información local, el análisis y la pluralidad. No es que no lo realicen otras páginas. Este grupo intenta conjugar lo que de bueno tie-

nen cada una de ellas, la inmediatez, el análisis, la lucha decidida y radical (ir a la raíz, no quedarnos en las ramas), pero desde un punto de vista de compartir sin acritud lo que nos une y obviar lo que nos separa".

Por otro lado añaden "Queremos fomentar la disidencia a las imposiciones del capitalismo local-mundial e incentivar el debate sobre la nueva democracia (...)"

En cuanto a ciertas formas "anónimas" de funcionamiento en internet y el papel de las organizaciones de izquierda, KAOS EN LA RED lo tiene claro, "En la red, se repite un debate sobre el anonimato en la misma, nosotros/as lo tenemos claro: ¡¡el anonimato no existe ni en la red ni en nada!! Por eso aquí no tenemos preocupación. Nosotros/as sabemos lo que nos jugamos, cada uno debe saber que se juega y porque lo hace". Salud y larga vida, compas.

Pedro Venero

BOLETIN DE SUSCRIPCIÓN

C/ Limón, 20 – Bajo ext.dcha · 28015 – Madrid · Tel y Fax: 91 559 00 91

Correo electrónico: vientosur@vientosur.info

Apellidos _____ Nombre _____

Calle _____ N.º _____ Escalera _____ Piso _____ Puerta _____

Localidad _____ Provincia _____

Región/Comunidad _____ C.P. _____ País/Estado _____

Teléfono _____ Móvil _____ Fax _____

Correo electrónico _____ NIF _____

SUSCRIPCIÓN NUEVA SUSCRIPCIÓN RENOVADA CÓDIGO AÑO ANTERIOR **MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN ANUAL [6 NÚMEROS]****ESTADO ESPAÑOL**ENVIO COMO IMPRESO 35 €ENVIO COMO CARTA 42 €**EXTRANJERO**ENVIO COMO IMPRESO 50 € (70 \$)ENVIO COMO CARTA 70 € (100 \$)**SUSCRIPCIÓN DE APOYO 70 €****MODALIDAD DE ENVIO**ENTREGA EN MANO ENVIO POR CORREO **MODALIDAD DE PAGO**EFECTIVO DOMICILIACIÓN BANCARIA **DATOS BANCARIOS para INGRESO EN EFECTIVO**

BANCAJA. Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante. C./ Caballero de Gracia, 28 – 28013 MADRID

Número de cuenta: **2077 // 0320 // 33 // 3100822631** – IBAN: **ES13 2077 0320 3331 0082 2631****DOMICILIACIÓN BANCARIA – AUTORIZACIÓN DE PAGO [datos del titular de la cuenta]**

Apellidos _____ Nombre _____

Calle _____ N.º _____ Escalera _____ Piso _____ Puerta _____

Localidad _____ Provincia _____

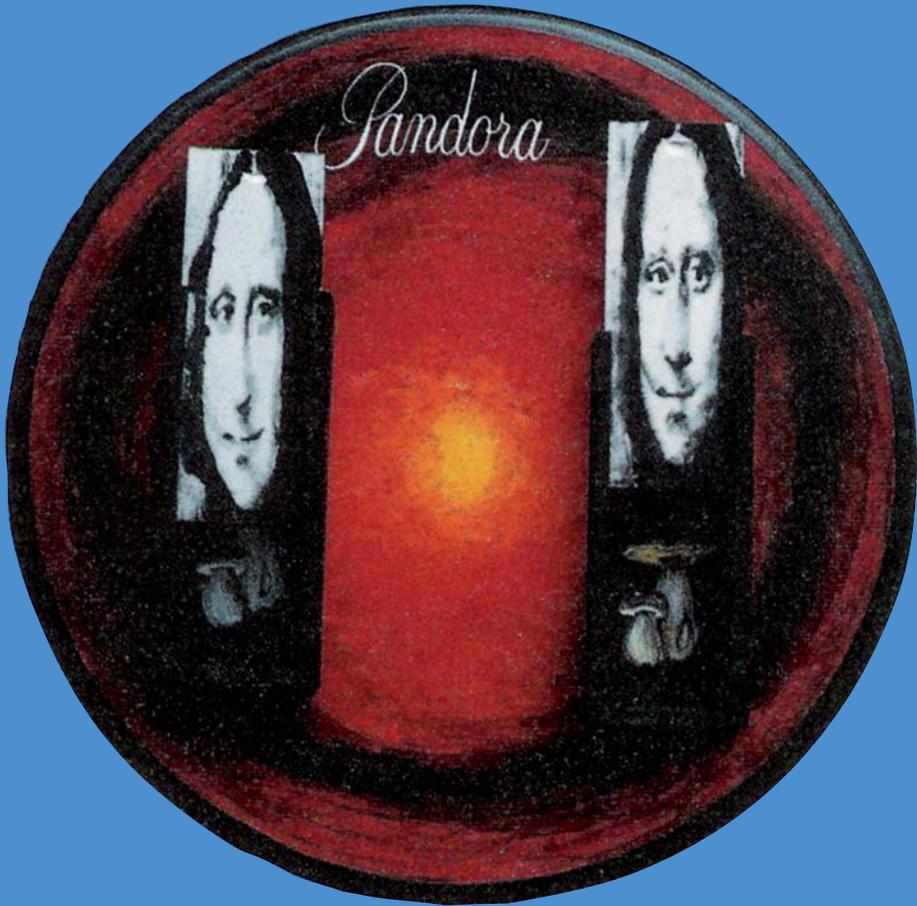
Región/Comunidad _____ C.P. _____ NIF _____

ENTIDAD _ _ _ _ OFICINA _ _ _ _ DIGITO CONTROL _ _ _ _ NUMERO CUENTA _ _ _ _

Fecha: _____

Firma: _____

OBSERVACIONES: _____



*“... un viento sur que lleva
colmillos, girasoles, alfabetos
y una pila de Volta con avispas ahogadas”.*